PODER JUDICIAL DE LA
NACIÓN

**CÁMARA FEDERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL**

PROSECRETARÍA GENERAL

**DEPARTAMENTO
DE
JURISPRUDENCIA**

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NRO. 31

Año 2001

ÍNDICE

	<u>Página</u>
<u>SEGURIDAD SOCIAL</u>	
AERONOVEGANTES	5
DOCENTES	5
ESTADO, PERSONAL DEL	6
FINANCIACIÓN	
Aportes	7
Cargos	7
Deudas con las cajas	12
Moratoria	18
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD	
Militares	19
Policía Federal	33
Servicio Penitenciario	37
S.I.D.E.	39
HABERES PREVISIONALES	
Determinación del haber inicial	39
Fallecimiento del beneficiario	40
Fecha inicial de pago	42
Movilidad	43
Reajuste	44
Reducción del haber	57
Regímenes especiales	58
Topes	61
JUBILACIÓN DE MINUSVÁLIDOS	61
JUBILACIÓN ORDINARIA	63
JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA	63
JUBILACIÓN POR INVALIDEZ	64
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES	70
MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA	71
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Fondo Compensador	75
PENSIÓN	
Concubina	77
Otros beneficiarios	77
Separación de hecho	78
Viuda/o	80
PRESTACIONES	
Acumulación	81
Cargos contra el beneficiario	83
Fecha inicial de pago	83
Pérdida o suspensión del beneficio	83
REGÍMENES ESPECIALES	84
RIESGOS DEL TRABAJO	85
SERVICIO DOMÉSTICO	88
SERVICIO EXTERIOR, PERSONAL DEL	89
SERVICIOS	
Prueba	90
Reconocimiento	90
TRABAJADORES AUTÓNOMOS	91
<u>PROCEDIMIENTO</u>	
ACCIÓN DECLARATIVA	93
APODERADOS Y GESTORES	93
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS	95
COSTAS	96
DEMANDA	96
EJECUCIÓN DE SENTENCIA	97
EJECUCIÓN FISCAL	99
ESCRITOS	99
EXCEPCIONES	100
HONORARIOS	101
INHABILIDAD DE INSTANCIA	103

NOTIFICACIÓN	104
NULIDADES	104
OBRAS SOCIALES	105
RECURSOS	
Amparo por mora de la administración	110
Apelación	111
Inaplicabilidad de ley	112
Queja	113
RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN	113
SENTENCIA	118

I- SEGURIDAD SOCIAL

AERONAVEGANTES

Caja complementaria. Ley 19.346. Desafiliación. Improcedencia.

El régimen creado por la ley 19.346 impone un aporte obligatorio a los pilotos aviadores de líneas aéreas comerciales y regulares, con el objetivo sustancial de que los afiliados que entren en pasividad puedan percibir un haber complementario tendiente a cubrir la diferencia entre el haber efectivamente percibido y lo que percibirían en actividad (ver. arts. 3, 9, 10 y 11 del referido cuerpo legal). Tal imposición legislativa, a la luz de los principios de cooperación y solidaridad, no resulta inconstitucional aún cuando no pueda discutirse que, en atención al descalabro económico que afecta al país, resulte cada vez más difícil al Fondo Compensador satisfacer plenamente y con eficacia su objetivo de cobertura previsional.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83074

16.05.01

“FERNÁNDEZ LOZA, ALBERTO c/ Caja Complementaria de Previsión para Pilotos Aviadores”

(E.-F.-H.)

DOCENTES

Haberes previsionales. Movilidad. Ley 24.016.

Reconocido en sede administrativa que la titular se encontraba incluida en las previsiones del Dec. 8820/62, y surgiendo de las constancias de autos que presentó la renuncia condicionada en plena vigencia de la ley 24.016, corresponde hacer lugar al reclamo de que se le liquide su haber jubilatorio en los términos de la ley referida. No obsta a tal conclusión el art. 160, 3er. párrafo de la ley 24.241, ya que el mismo se refiere a aquellos regímenes especiales que regulan un sistema de movilidad distinto al de la ley 18.037; ni las disposiciones de la leyes 24.463, toda vez que el objetivo principal de ella fue reformar el sistema integrado de jubilaciones y pensiones establecido en base a la ley 24.241 que regía un sistema de movilidad particular, pero no la afectación de regímenes especiales y específicos jubilatorios.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83312

14.06.01

“ZARZA, BERTHA AMANDA c/ A.N.Se.S.”

(F.-E.-H.)

ESTADO, PERSONAL DEL

Ley 22.955. Haberes previsionales. Horas extras. Cómputo. Res. 70/91 I.N.P.S. Inaplicabilidad.

La Res. 70/91 del I.N.P.S. aparece dictada, frente a las directivas de los arts. 4 de la ley 22.955 y 8 del Dec. 3319/83, en exceso del marco establecido por las referidas normas, ya que por ella se ha pretendido agregar, para hacer aplicable lo previsto en la ley y su reglamento, un requisito que estos no mandan, alterando así el orden normativo establecido por el art. 31 de la C.N. Por lo tanto, se debe descartar su aplicación habida cuenta que corresponde al Poder Judicial determinar el alcance jurídico de las leyes en ejercicio de la facultad propia del control

de legalidad -arts. 18, 31 y 116 C.N.- (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. int. 56249/91, "Illarietti, Dora"; ídem, Sala I, sent. aclaratoria 45733, "Ramos de Alais, Sofía Pilar"). En consecuencia, corresponde ordenar el recálculo del haber del titular computando las sumas percibidas en concepto de horas extras como "asignación de carácter variable".

C.F.S.S., Sala I

sent. 93270

15.06.01

"SATORRES DE SAVIOTTI, MARÍA ELENA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Ley 22.955. Limitación de recursos. Deber del Estado. Compromisos internacionales.

La actitud estatal de establecer procedimientos que obstaculicen o afecten derechos que tienen amparo constitucional, ya sea mediante el dictado de normas dilatorias o asumiendo conductas contrarias a los fines que propicia, en tanto no merezcan una reconsideración sobre sus efectos, coloca al Estado Argentino en infracción a los compromisos internacionales asumidos. Así, se afecta el derecho de la seguridad social reconocido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 16), por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 22 y 25), por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (arts. 9 y 11), e igualmente, a los arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 11.04.97, "Ciampagna, Rodolfo").

C.F.S.S., Sala II

sent. 83724

13.08.01

"MASSA, LUIS JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

Ley 22.955. Reajuste del haber. Topes. Ley 18.037, art. 55. Improcedencia.

Tratándose de un reajuste otorgado en razón de la ley 22.955, es improcedente el agravio deducido respecto de la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 18.037.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83724

13.08.01

"MASSA, LUIS JOSÉ c/ A.N.Se.S."

(F.-E.-H.)

FINANCIACIÓN

APORTES

Reducción. Res. Gral. 3874.

Surgiendo de las constancias de autos que las Provincias de La Pampa y Neuquén no dieron cumplimiento a los extremos exigidos por la Resolución General 3874 para beneficiarse con la reducción de contribuciones patronales, corresponde confirmar la resolución del organismo que desestimó la impugnación de deuda deducida. No obsta a ello lo normado por el Dec. 624/95, dado que el mismo resulta de aplicación respecto de las contribuciones sobre la nómina salarial correspondiente a remuneraciones devengadas a partir del mes de septiembre de 1995, y el período cuestionado en autos es anterior a dicha fecha (en el caso, 03/95 y 04/95).

C.F.S.S., Sala I

sent. 92553

11.05.01

"CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. c/ D.G.I."

(Ch.-M.-D.)

CARGOS

Actividad pesquera. Encasillamiento. Decretos 2104/93 y 433/94.

No puede considerarse que el encuadre que de la actividad pesquera efectúa el Dec. 2104/93 y su Dec. Reg. 433/94 resulte inconstitucional, pero desde otro ángulo, y a los fines de una correcta hermenéutica, debe tenerse presente también que la actividad de los marineros y tripulantes de embarcaciones pesqueras de pesca costera calificada como autónoma por la legislación vigente, realizan aportes al sistema de acuerdo a la capacidad de captura de la embarcación (mayor de 50 toneladas corresponde tributar en categoría "G" y menor a dicho tonelaje en categoría "D"), y no como correspondería por el sistema de retribución a la parte conforme a lo efectivamente capturado en cada expedición marítima. Así, si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando así lo requiera la interpretación razonable y sistemática (Fallos 310:2214; 312:1614; 315:38, entre otros), por lo cual resulta irrazonable el sistema utilizado por la norma para determinar la categoría donde debe tributar el recurrente, ya que la misma se realiza sobre base presunta pudiendo serlo sobre base cierta, con los recibos que en legal forma se deben llevar, declaraciones juradas y demás información con la que cuenta el organismo recaudador -D.G.I.-. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 79676

30.08.01

"VUOSO, ALEJANDRO DANIEL c/ D.G.I."

(F.-M.A.-L.)

Cooperativas de trabajo. Trabajadores autónomos. Presunción.

La Res. Gral. 4328/97 de D.G.I. ratificó que los asociados a cooperativas de trabajo legalmente constituidas y autorizadas a funcionar por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, deberán ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social como trabajadores autónomos. En consecuencia, para desvirtuar la presunción en favor de la vinculación asociativa y no de la laboral, debe demostrarse que se está en presencia de una simulación o un fraude, sin que de dicha prueba esté exento el órgano administrativo cuando pretende imponer un cargo por una supuesta omisión o evasión previsional.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83617

12.07.01

"COOPERATIVA DE TRABAJO AEROCOOP LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(F.-H.-E.)

Cooperativas de trabajo. Fraude a la ley laboral. Prueba.

Si el trabajador se desempeñó como asociado de una cooperativa de trabajo legítima y entendió con sinceridad el cumplimiento de funciones como acto cooperativo con derecho a retribución en concepto de retornos, no es admisible que se pretenda modificar dicho encuadramiento cuando no se advierte una situación de fraude a la ley laboral (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. del 15.10.81, "Barreto, M. c/ Coop. de Trabajo Gral. Mosconi Ltda."). En consecuencia, será pura y exclusivamente una cuestión de hecho y prueba demostrar que los asociados cooperativos revisten el carácter de trabajadores y que se está frente a una simulación en fraude de la ley; supuesto de máxima gravedad que requiere de parte de quien efectúa tal imputación el máximo de prudencia.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83617

12.07.01

"COOPERATIVA DE TRABAJO AEROCOOP LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(F.-H.-E.)

Cooperativas de trabajo. Beneficio de litigar sin gastos. Prueba.

No es imprescindible producir una prueba acabada que otorgue un grado absoluto de certeza sobre la probanza invocada, sino que basta que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar, razonablemente, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su otorgamiento (cfr. C.S.J.N., sent. del 08.08.00, "Ramos, Graciela Petrona c/ Córdoba, Pcia. de y otros"). En consecuencia, dada la amplitud de criterio con que han de analizarse las pruebas aportadas, corresponde otorgar el beneficio de litigar sin gastos petitionado (en el caso, la recurrente alegó la imposibilidad de oblar el depósito previo en razón de su situación económico financiera, lo que demostró con diversas

constancias contables).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83617

12.07.01

"COOPERATIVA DE TRABAJO AEROCOOP LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(F.-H.-E.)

Determinación de deuda. Procedimiento. Deber del organismo administrativo.

En virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549"; C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.02.01, "Mercuri, Antonio c/ A.F.I.P.").

C.F.S.S., Sala I

sent. 93520

10.07.01

"CATALINAS SUITES S.A. c/ D.G.I."

(D.-M.-Ch.)

Directores de sociedades. Desempeño en más de una empresa. Aportes. Ley 24.241, art. 2, inc. b) 1. Dec. 433/94.

El art. 2, inc. b) 1. de la ley 24.241 y el Dec. 433/94 han previsto, expresamente, un tipo de trabajadores autónomos (los que ejercen la dirección, administración o conducción) y la categoría por la que deben aportar. Deducir de allí que el desempeño en diversas empresas implica sucesivas actividades, es forzar la norma. Por ello, debe concluirse que deben aportar por un único desempeño como Director, Administrador o Conductor en aquella empresa que, de acuerdo a lo que fija la norma, ocupe el mayor número de personal, y no por cada una de las empresas que conduzca.

C.F.S.S., Sala II

sent. 84230

07.09.01

"MARCHETTI, NORBERTO DANIEL c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(F.-H.-E.)

Directores de sociedades. Recursos. Falta de depósito previo. Apertura de la instancia. Procedencia. Valor justicia.

El Tribunal ha sostenido sistemáticamente que la falta de depósito previo produce la deserción del recurso por imperio de lo dispuesto por el art. 15 de la ley 18.820, y que dicha disposición legal no se ha visto afectada por la reforma constitucional de 1994 y la incorporación efectuada en la misma de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello, ante la falta del referido depósito, correspondería sin más, así resolverlo. Sin embargo, debe considerarse procedente la apertura de la instancia, cuando lo contrario implicaría consentir que circunstancias formales conduzcan a la frustración del valor justicia (en el caso, la cuestión debatida gira en torno a lo decidido por la Sala I a partir del caso "Buhar, Yako" -sent. del 27.09.99- cuyo criterio han adoptado, en un virtual plenario de hecho, la Sala II, en autos "Soldati, Alejandro" -sent. del 29.09.00- y más recientemente, la Sala III, en autos "Soldati, Santiago" -sent. del 12.03.01-, lo que motivó que el propio Director General de la A.F.I.P. - D.G.I., asumiendo tal circunstancia, mediante la instrucción general nº 16/00, ampliada por su similar nº 03/01 dispusiera, con el objeto de evitar dispendio de la actividad administrativa y jurisdiccional, la suspensión de las intimaciones a aquellos trabajadores autónomos que en forma simultánea se desempeñen en las actividades de dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro o sociedad comercial o civil, con motivo del dictado de reiterados fallos contrarios al caso "Sánchez, Hugo Osvaldo", que sirvió de fundamento al organismo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Chirinos votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. 92835

29.05.01

"BARROTO, MARCELINO HORACIO c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(D.-Ch.-M.)

Directores de sociedades. Recursos. Falta de depósito previo. Apertura de la instancia. Improcedencia.

No surgiendo de las actuaciones que la recurrente haya dado cumplimiento al requisito del depósito previo, ni intentado acreditar la falta de recursos para hacer frente al mismo, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Disidencia del Dr. Chirinos).

C.F.S.S., Sala I

sent. 92835

29.05.01

“BARROTO, MARCELINO HORACIO c/ A.F.I.P. - D.G.I.”

(D.-Ch.-M.)

Directores de sociedades. Recursos. Falta de depósito previo. Apertura de la instancia. Procedencia. Valor justicia.

Quien se desempeña como director de varias sociedades anónimas o como gerente en más de una sociedad de responsabilidad limitada, ejerce una sola actividad, por lo que corresponde aportar por un solo cargo, el de mayor significación económica (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.09.99, “Buhar, Yako”; íd. Sala II, sent. del 29.09.00, “Soldati, Alejandro”). En igual sentido, el propio Director General de la A.F.I.P. - D.G.I., mediante la instrucción general nº 16/00, ampliada por su similar nº 03/01 dispuso, con el objeto de evitar dispendio de la actividad administrativa y jurisdiccional, la suspensión de las intimaciones a aquéllos trabajadores autónomos que en forma simultánea se desempeñen en las actividades de dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro o sociedad comercial o civil, con motivo del dictado de reiterados fallos contrarios al caso “Sánchez, Hugo Osvaldo”, que sirvió de fundamento al organismo.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94163

17.08.01

“AYALA, MARCELO ERNESTO CESAR c/ A.F.I.P. - D.G.I.”

(M.-D.-Ch.)

Formulación. Sustento. Documentos. Fotocopia simple.

El art. 27 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Dec. 1759/72), establece que los documentos cuya agregación se solicite a título de prueba, deben presentarse en su original o en copia certificada por la autoridad administrativa. Por tal razón, las fotocopias simples de un documento no resultan idóneas -por no ser instrumento hábil para hacer, por sí solo, fe en juicio- para sustentar la formulación de cargos por parte del organismo. Ello así, dado que por sus características, no pueden ser objeto de reconocimiento o de manifestación alguna acerca de su autenticidad con respecto al documento original (cfr. C.N.A.Com., Sala A, “Pereyra Iraola, José c/ Alberto J. Armando S.A.”; ídem, Sala C, “Rubinstein, Efrain c/ Roli S.C.C.”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 92780

29.05.01

“ASOCIACIÓN BANCARIA c/ A.F.I.P. - D.G.I.”

(D.-M.-Ch.)

Profesiones liberales. Médicos de guardia. Relación de dependencia.

La circunstancia de que a los médicos que realizaban guardias no se les efectuaran notas de débito en concepto de gastos de administración ni de uso de consultorios -como a los demás médicos-, permite inferir que cobraban un sueldo por sus servicios y no honorarios, máxime si de las actuaciones se desprende que tenían garantizada una retribución fija por sus servicios. Dichas circunstancias permiten sostener que entre los referidos médicos de guardia y la clínica donde prestaban servicios existió una subordinación económica, puesto que el riesgo económico no quedaba a cargo de los profesionales y, en consecuencia, debe concluirse que se encontraban insertos en la estructura empresarial de la clínica, prestando un servicio necesario y acorde con la finalidad de la misma, que torna procedente la presunción contemplada en el art. 23 de la L.C.T.

C.F.S.S., Sala III

sent. 72998

19.09.01

“CLÍNICA PRIVADA DR. BESSONE S.R.L. c/ A.F.I.P.”

(L.-F.-M.A.)

Relación de dependencia. Arts. 23 y 115 L.C.T.

Habiendo sido acreditado que la persona por la que se labraron actas de inspección e infracción cumplía tareas de venta en el local del recurrente, se tornan aplicables las presunciones emergentes de los arts. 23 y 115 de la L.C.T., según las cuales la relación de trabajo presume la existencia de un contrato de trabajo, a la vez que el trabajo no se presume gratuito. En tales condiciones, las meras manifestaciones de la persona referida, formuladas fuera del proceso -en el caso, declaración jurada prestada ante un Juzgado de Paz, aduciendo que se trata de una colaboración desinteresada, sin percibir suma alguna por tal concepto- y ajenas, por tanto, a toda posibilidad de control por parte del organismo, tanto como la certificación de estudios según la cual aquél se encuentra cursando la carrera de analista programador, carecen de entidad probatoria suficiente para desvirtuar los efectos jurídicos derivados de las disposiciones citadas (cfr. art. 386 C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala III

sent. 79687

30.08.01

“EHRlich, ANÍBAL ARNOLDO c/ D.G.I.”

(F.-M.A.)

Trabajadores que se desempeñan en el exterior. Ley de contrato de trabajo. Condiciones de aplicabilidad.

La L.C.T., en su versión corregida por la ley 21.297 -que rige la vinculación del personal con su empleador vernáculo-, regula todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes en cuanto el contrato se ejecute en nuestro territorio, sea que se haya celebrado dentro o fuera de él. Por ello, en tanto el personal por el cual se formulan cargos por aportes omitidos se desempeña en el exterior, contratado por otra empresa -aunque perteneciente al mismo grupo económico-, que como empleadora le abona el salario mensual, provee asistencia médica, alojamiento, etc., va de suyo que no se cumple con la condición de aplicabilidad aludida. Además, en concordancia con ello, el art. 1 de la ley 18.037 no contenía norma alguna sobre los trabajadores argentinos que prestan servicios en el exterior, aspecto que -bueno es recordarlo- resulta propio de ser articulado a través de convenios internacionales, a los que remite la norma antes referida en el último párrafo de su art. 4.

C.F.S.S., Sala III

sent. 72260

25.06.01

“SHELL CIA. ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. c/ D.G.I.”

(F.-L.-M.A.)

DEUDAS CON LAS CAJAS

Depósito previo. Devolución. Plazo. Intereses.

Dejada sin efecto la resolución por la que se habían formulado cargos por omisión de aportes y contribuciones, debe procederse al reintegro del depósito efectuado en cumplimiento de lo previsto por el art. 15 de la ley 18.820, dentro del plazo de diez días de recibidas las actuaciones por el organismo de origen, con más sus intereses respectivos por el período de indisponibilidad, calculados a la tasa prevista por el art. 10 del Dec. 941/91, es decir, la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A.

C.F.S.S., Sala III

sent. 72260

25.06.01

“SHELL CIA. ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. c/ D.G.I.”

(F.-L.-M.A.)

Impugnación de deuda. Actas. Acto preparatorio.

Las actas no configuran un acto administrativo en sentido estricto conforme lo regula el título III de la ley 19.549, sino que deben considerarse como un acto preparatorio del mismo (cfr. C.F.S.S., sent. del 30.05.96, “Grasso, Jorge Claudio”). Las diligencias que se cumplen con la intervención de los inspectores -con las facultades que les acuerda la normativa vigente- y que se instrumentan a través de las actas de verificación que se notifican al interpelado, no son más que constataciones de la situación del contribuyente frente al organismo administrativo, siempre sujetas a revisión.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94163
17.08.01
“AYALA, MARCELO ERNESTO CESAR c/ A.F.I.P - D.G.I.”
(M.-D.-Ch.)

Impugnación de deuda. Actividad probatoria. Deber del organismo administrativo.
El actuar de la administración no puede subsumirse en una mera revisión contable, pues ello importaría una inversión de la carga de la prueba (cfr. Wassner, Roberto, “Trámites, procedimientos, recursos administrativos y judiciales en previsión social”). Por ello, si se advierte que la actuación administrativa cuya revisión se trae a la instancia judicial, adolece de una grave inobservancia de los deberes a cargo de la autoridad recaudadora, pues se ha ignorado la actividad probatoria en la que han intervenido sus propios agentes, debe concluirse que dicha circunstancia determina la nulidad de su actuar.

C.F.S.S., Sala II
sent. 84147
30.08.01
“URGENCIAS S.R.L. c/ D.G.I.”
(H.-F.-E.)

Impugnación de deuda. Actividad probatoria. Deber del organismo administrativo.
El proceso administrativo debe brindar protección jurídica al particular a la par que asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general. Es por ello que la observancia de la regla del debido proceso adjetivo, debe acentuarse aún más cuando el órgano administrativo resulta al mismo tiempo parte y juez dentro de una misma causa, pues en esa doble condición posee información propia que le facilita la constatación de las afirmaciones que efectúe el administrado. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a obtener una decisión fundada, son las garantías amparadas en nuestra C.N., base de nuestro sistema republicano de gobierno y deben resguardarse celosamente a fin de evitar excesos y poder arribar así a la verdad jurídica objetiva de la cuestión en debate” (cfr. C.F.S.S., sent. del 12.03.98, “Nizetich, Pedro Jorge”).

C.F.S.S., Sala II
sent. 84147
30.08.01
“URGENCIAS S.R.L. c/ D.G.I.”
(H.-F.-E.)

Impugnación de deuda. Fotocopia. Dec. 1759/72, art. 27. Excesivo rigor formal.
Aunque la fotocopia obrante en autos de la solicitud efectuada por la recurrente a la A.N.Se.S. no se encuentre certificada conforme lo prescripto por el art. 27 del Dec. 1759/72, en tanto dicha actuación se habría efectuado ante el organismo administrativo que es, en definitiva, el acreedor de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social, aparecería como revestido de excesivo rigor formal descalificar dicho elemento de juicio por tal motivo, sin haber previamente ordenado constatar su autenticidad (cfr. Fallos 238:550 y C.F.S.S., Sala I, sent. del 28.06.96, “Grey Rock Automotores S.A.C.I.I. y F. c/ D.G.I.”).

C.F.S.S. Sala I
sent. 93465
26.06.01
“DR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I.”
(M.-D.-Ch.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Eximición. Seguro de caución.

El depósito previo que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido. Por ello, corresponde eximir al recurrente de dicha carga si acompañó una póliza de seguro de caución, garantizando a la D.G.I. el pago de las obligaciones reclamadas en las actas labradas.

C.F.S.S., Sala I
sent. 94163
17.08.01
“AYALA, MARCELO ERNESTO CESAR c/ A.F.I.P - D.G.I.”
(M.-D.-Ch.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Devolución. Plazo. Intereses. Tasa aplicable.

Dejada sin efecto la resolución por la que el organismo efectuó la determinación de deuda, corresponde ordenar a éste que el en plazo de 30 días reintegre las sumas depositadas por la accionante para acceder a la instancia judicial, con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. art. 10, Dec. 941/91, C.S.J.N., sent. del 10.06.92, "López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A." y Fallos 303:1769; 311:1644, entre otros).

C.F.S.S., Sala I

sent. 93520

10.07.01

"CATALINAS SUITES S.A. c/ D.G.I."

(D.-M.-Ch.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Eximición. Prueba. Sucesión indivisa.

El importante desapoderamiento de bienes a que hace referencia la doctrina de la C.S.J.N. para que proceda la eximición de la exigencia del depósito previo a la apelación (arts. 15 de ley 18.820 y 12 de ley 21.864, modificados por las leyes 23.659 y 24.463) requiere, dado su carácter excepcional, una prueba fehaciente que ha de ser aportada por quien pretende dicha eximición. A tal fin, resulta insuficiente las manifestaciones en abstracto acerca de la imposibilidad de pago vertidas en el recurso de apelación, máxime cuando a la fecha de interposición del mismo, la requerida era una sucesión indivisa, por lo que las declaraciones juradas impositivas del administrador judicial -o de los sucesores, en su caso- de ganancias y bienes personales, a cuya tributación se hallaba sujeta (cfr. ley 20.628 y Dec. 2353/86; y ley 23.966 y Dec. 127/96, respectivamente, y sin perjuicio de otras de orden local que pudieran comprenderla), hubieran posibilitado una mejor ponderación de la real posición patrimonial y financiera, permitiendo, eventualmente, su encuadre en las hipótesis de excepción.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92670

15.05.01

"SUCESIÓN INTESTADA DE EDDA MARÍA ROCCATAGLIATA DE RAMATO c/ D.G.I. "

(D.-M.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Seguro de caución. Póliza. Devolución.

Prestada la conformidad por parte del organismo recaudador al desistimiento del recurso de apelación efectuado por parte del recurrente (en el caso, por haberse acogido al régimen del Dec. 93/00 y Res. Gral. 793 A.F.I.P. - D.G.I.), con posterioridad a la notificación de la sentencia y previo asentar en autos la constancia respectiva una vez que la parte actora acompañe la copia del documento a desglosar, corresponde devolver al interesado la póliza de seguro de caución oportunamente constituida a los efectos de cumplir con el requisito del depósito previo.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52031

29.06.01

"CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE ASOCIACIÓN CIVIL c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(E.-H.-F.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Eximición. Improcedencia.

Un pronunciamiento que concluya con la inaplicabilidad de una disposición legal, amerita su previa declaración de inconstitucionalidad o, aplicando la doctrina judicial habida en relación con la ley 18.820 (art. 15 y sus modificatorias), la demostración de quien la invoca, de causales de exención.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52059

03.07.01

"TELEBOLIVAR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(F.-E.-H.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Eximición. Improcedencia.

Las formas procesales, es cierto, no deben ser limitativas del derecho de defensa

en juicio de los individuos, pero tienen un cometido y no pueden ser soslayadas por el Juzgador, sobre todo si el titular no demuestra el agravio que le ocasiona (más allá del cuestionamiento que el fondo de la cuestión traída a litigio le merece) y, en todo caso, su imposibilidad de cumplirlas. No puede el juez arrogarse atribuciones de los litigantes ni suplir sus omisiones, estando a cargo de éstos la acreditación de los extremos que invocan y el cumplimiento de todos los recaudos (formales y de fondo) que sean necesarios para propiciar el pleno conocimiento de sus derechos en el ámbito judicial.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52059

03.07.01

“TELEBOLIVAR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I.”

(F.-E.-H.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Eximición. Improcedencia.

Frente a la obligatoriedad del depósito previo, no cabe sino exigir al recurrente, por lo menos, la demostración de los extremos que le impidan acatar tal obligación; extremos que no puede ni debe presumir el Juzgador, cuya función es aplicar el derecho al caso concreto que se lleva a su conocimiento, en sus diversas facetas y posibilidades, con imparcial objetividad, y no suplir la inactividad de las partes en defensa de ese derecho.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52059

03.07.01

“TELEBOLIVAR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I.”

(F.-E.-H.)

Impugnación de deuda. Recursos. Depósito previo. Eximición. Improcedencia.

Limitándose el apelante a solicitar una medida cautelar innovativa, sin cuestionar la constitucionalidad del art. 15 de la ley 18.820 ni aducir y probar fehacientemente la desproporción del monto a depositar en relación con su capacidad económica, debe tenerse por no acreditados los extremos que permitirían al Tribunal eximirlo del depósito previo.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52059

03.07.01

“TELEBOLIVAR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I.”

(F.-E.-H.)

Impugnación de deuda. Resoluciones 4032 y 877/92. Formulario 803. Ley 18.820, arts. 11 y 12.

La normativa reglamentaria (Resoluciones 4032 y 877/92) excede los requisitos previstos por los arts. 11 y 12 de la ley 18.820, los cuales no requieren la presentación del formulario de declaración jurada 803; agregando por vía de resoluciones administrativas un recaudo y consecuencias para el caso de omisión no previstos en la ley, y alterando de esa forma el orden normativo establecido por la C.N. (art. 31). Ello así, habida cuenta que corresponde al Poder Judicial determinar el alcance jurídico de las leyes en ejercicio de la facultad propia del control de legalidad -arts. 18, 31 y 116 C.N.- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 15.04.97, “Waisman, Olga c/ D.G.I.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72275

29.06.01

“EMPRESA GODOY S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I.”

(L.-M.A.-F.)

Impugnación de deuda. Resolución 4032. Formulario 803. Excesivo rigor formal.

La desestimación del tratamiento de la presentación del recurrente por la falta de presentación del formulario 803 en el plazo de 15 días previsto para la interposición de la impugnación (art. 3º, ap. 2.2.4, Res. Gral. 4032), deviene excesivamente rigurosa, teniendo en cuenta que el organismo actuante, tras advertir el incumplimiento señalado, en lugar del rechazo “in límine”, debió haber efectuado la intimación correspondiente. En consecuencia, debe concluirse que se ha configurado una actitud arbitraria e irrazonable por parte de aquél, que constituye un exceso de rigor formal que deberá subsanarse considerando la presentación efectuada con sentido amplio, atendiendo a la necesidad de establecer la verdad jurídica objetiva (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 21.09.98, “Coop. Eléctrica de Consumo”; íd. sent. del 15.11.95, “Coconor S.A.U.T.E.”). (Del dictamen Fiscal al que

adhiera la Sala).
C.F.S.S., Sala III
sent. int. 72275
29.06.01
"EMPRESA GODOY S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I."
(L.-M.A.-F.)

Impugnación de deuda. Resolución 877/92 A.N.Se.S. Res. Gral. 79/98 A.F.I.P. Recursos. Acceso a la jurisdicción.

Corresponde declarar formalmente admisible el recurso de queja si el organismo, basándose en la Res. 877/92 dictada por la A.N.Se.S., denegó el acceso a la jurisdicción, contrariando los lineamientos del art. 15 de la ley 18.820 y las directivas del art. 10 de la ley 23.473. Ello así porque uno de los principios básicos de nuestro derecho positivo está dado por la posibilidad de que los organismos administrativos ejerzan funciones jurisdiccionales, pero a condición de que exista siempre la posibilidad de una instancia de revisión o recurso ante el órgano judicial con competencia para decidir, lo que presupone la posibilidad de interponer recurso ante los jueces del Poder Judicial y la negación de la competencia administrativa para dictar pronunciamientos finales y definitivos de carácter irrevisable -ver Bidart Campos, "Tratado de Derecho Constitucional Argentino", T. II, pág. 313/4- (cfr. C.F.S.S., sala II, sent. del 29.09.95, "Malamud, Néstor"); criterio que se observa receptado en la Res. Gral. 79/98 de la A.F.I.P., vigente desde el 31.01.98, que dispone la necesaria intimación al contribuyente para cumplimentar requisitos formales de la presentación impugnatoria. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 72275
29.06.01
"EMPRESA GODOY S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I."
(L.-M.A.-F.)

Impugnación de deuda. Ley 18.820. Procedimiento administrativo previo. Finalidad.

La razón de ser de un procedimiento previo administrativo debe buscarse en principios y garantías superiores que atañen a la división de poderes y al derecho de defensa, cuya efectivización torna imprescindible que, en los sumarios tramitados conforme la ley 18.820, se observen las formas sustanciales que resguardan el debido proceso. Ello así, dado que el pronunciamiento administrativo tiene una doble finalidad: garantizar los derechos de los particulares y asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general, dada la naturaleza profundamente axiológica y fundamental de ese principio cuya plena vigencia es la base esencial del goce de los restantes derechos individuales -ver Hutchinson, "Régimen de procedimiento administrativo. Ley 19.549", y Carcavallo, "Cobro de aportes y contribuciones. Procedimiento. Garantías. Costas", pub. en T.S.S., 199570- (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 17.08.95, "EDILSA S.A."). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 72275
29.06.01
"EMPRESA GODOY S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I."
(L.-M.A.-F.)

Impugnación de deuda. Res. 877/92 A.N.Se.S. Recursos. Queja. Ley 18.820, art. 15.

No obstante no haber el organismo administrativo rechazado en forma expresa recurso judicial alguno, si la resolución que se recurre (fundada en la aplicación de lo dispuesto por la Res. A.N.Se.S. 877/92) se asimila a la negativa en tal sentido, a fin de garantizar el derecho de defensa del titular y posibilitar su acceso a la justicia por la vía recursiva establecida en el art. 15 de la ley 18.820, corresponde hacer lugar a la queja por apelación denegada y ordenar al organismo previsional dicte resolución expresa sobre la cuestión de fondo -en el caso, sobre las características de la explotación y sobre los criterios utilizados por la impugnante para determinar las sumas que debe depositar en concepto de aportes y contribuciones de la seguridad social- (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 31.05.94, "PENINSULAR S.A.A.G.I. y C."). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. int. 72275
29.06.01

“EMPRESA GODOY S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I.”
(L.-M.A.-F.)

MORATORIA

Años de antigüedad. Cómputo. Improcedencia.

El acogimiento a una moratoria no implica una reafiliación, sino la aceptación por parte del acreedor (A.N.Se.S) del pago en cuotas de una deuda por aportes omitidos en su oportunidad. Al respecto, se ha sostenido que carece de sustento legal la pretensión de que los pagos de cuotas de moratorias habiliten para computar como años de antigüedad en la afiliación a aquéllos en los que se efectivizaron dichos pagos (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 22.08.89, “Jorge, Antonia”).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77748

20.05.01

“PANETH, PEDRO JULIÁN C/ A.N.Se.S.”

(M.A.-F.-L.)

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

MILITARES

Haberes previsionales. Dec. 1897/85. Res. Nº 500 del Ministerio de Defensa. Prescripción.

Si se pondera la falta de publicación en Boletín Oficial del Dec. 1897/85 y de la Resolución del Ministerio de Defensa Nro. 500/85, así como la cuestionada naturaleza de las sumas reclamadas, se advierte que la sentencia que computa el plazo de prescripción desde la fecha del dictado de las normas sin considerar el planteo de la actora respecto a la dificultad que tuvo para conocerlas, se encuentra revestida de un injustificado rigor formal, incompatible con el derecho de defensa (cfr. C.S.J.N., sent. del 05.08.93, “Amestoy de Petrecca, Beatriz Leonor c/ Estado Nacional”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83290

11.06.01

“VECELLIO, ERNESTO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa y otro”

(F.-E.-H.)

Haberes previsionales. Res. Nº 500 del Ministerio de Defensa. Prescripción.

La falta de publicación de la Resolución Nro. 500 del Ministerio de Defensa determina que el plazo de prescripción para el cobro de las sumas a las que también tiene derecho el personal retirado, corra sólo a partir del conocimiento efectivo de la mencionada Resolución (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed. en pleno, sent. del 19.10.93, “Arbey Ballesteros, L. otros c/ Estado Nacional”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83290

11.06.01

“VECELLIO, ERNESTO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa y otro”

(F.-E.-H.)

Haberes previsionales. Res. Nº 500 del Ministerio de Defensa. Carácter remunerativo.

Las sumas otorgadas al personal militar en actividad en las condiciones establecidas en el Dec. 1897/85 y la Res. del Ministerio de Defensa 500/85 no tienen naturaleza de préstamo, sino de gratificaciones; de modo que al integrar los conceptos de haber o asignación a los que aluden las disposiciones de la ley 19.101, deben recibirlas también los militares retirados (cfr. C.S.J.N., sent. del 06.06.89, “Martínez, Marcelino Hilario c/ Estado Nacional”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83290

11.06.01

“VECELLIO, ERNESTO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa y otro”
(F.-E.-H.)

Haberes previsionales. Dec. 1897/85. Res. Nº 500 del Ministerio de Defensa. Costas.

El principio general en materia de costas (que las mismas "se imponen al vencido", art. 68 C.P.C.C.) importa una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr. Morello, Sosa, Berizonce; "Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. Aires y de la Nación, comentados y anotados"), pues de otro modo, los gastos efectuados se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (cfr. C.N.A.Civ., Sala "E", sent. del 07.10.83, E.D. 108-147; ídem Sala "D", sent. del 24.02.84, L.L. 1984-C-158). El fundamento del instituto y valor esencial sobre el cual se construye el principio radica en el hecho objetivo de la derrota, ya que las circunstancias subjetivas, la conducta observada en el litigio, su buena o mala fe, carecen de influencia para determinar la imposición de costas.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83290

11.06.01

“VECELLIO, ERNESTO LUIS Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa y otro”
(F.-E.-H.)

Desempeño del cargo de Presidente. Pensión graciable. Ley 16.989. Improcedencia.

El Reglamento para el Funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo (ley 21.256) alteró el orden normativo de nuestra Carta Magna, al incorporar como órgano supremo de la Nación a la Junta Militar. Por ello, el desempeño de la primera magistratura por parte de los militares designados no constituyó un ejercicio de las facultades inherentes al cargo de Presidente de la Nación, en su formulación constitucional, dado que la permanencia propia de la función debió ceder ante la transitoriedad típica de una comisión de servicio, subordinada a una autoridad superior que, como órgano suprajerrárquico, se reservó las funciones que la Constitución de 1853 ponía en cabeza del Presidente de la Nación.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94497

07.09.01

“GALTIERI, LEOPOLDO FORTUNATO c/ Estado Nacional - Secretaría de Desarrollo Social”
(Ch.-D.-M.)

Desempeño del cargo de Presidente. Pensión graciable. Ley 16.989. Improcedencia.

El General Galtieri fue un funcionario ejerciendo un cargo militar -el de Presidente de la Nación- en situación de dependencia de la Junta Militar. Por ello, al aceptar dicha función lo hizo en los términos de las normas de facto dictadas por aquélla, lo que equivale a aceptar una comisión de servicio por el sólo hecho de ser miembro de las Fuerzas Armadas, circunstancia que quedó evidenciada en el hecho de continuar percibiendo su remuneración normal en tanto militar en actividad.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94497

07.09.01

“GALTIERI, LEOPOLDO FORTUNATO c/ Estado Nacional - Secretaría de Desarrollo Social”
(Ch.-D.-M.)

Desempeño del cargo de Presidente. Pensión graciable. Ley 16.989. Improcedencia.

El Presidente de la Nación de acuerdo a la nueva formulación constitucional establecida por la Junta Militar, estaba precedido por ésta -superior jerárquicamente a su investidura- y, como consecuencia de ello, las facultades inherentes al Poder Ejecutivo no estaban ejercidas en forma unipersonal como lo prevé la Consti-

tución Nacional, sino que su ejercicio estaba reservado en parte por la Junta Militar, y en parte era delegado en la figura del Presidente de la Nación, nombrado por la misma Junta, autodesignada órgano supremo de la Nación.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94497

07.09.01

“GALTIERI, LEOPOLDO FORTUNATO c/ Estado Nacional - Secretaría de Desarrollo Social”

(Ch.-D.-M.)

Desempeño del cargo de Presidente. Pensión graciable. Ley 16.989. Improcedencia.

Debe concluirse que lo normado por el art. 1 de la ley 16.989 (modificado por ley 19.006) implica un especial reconocimiento de la Nación a quienes han sido distinguidos por el pueblo para ejercer la más alta magistratura que la Constitución establece. Dicha hermenéutica no se compadece con que sean reconocidos del mismo modo servicios prestados por un militar en actividad, a quienes otros de grado equivalente que lo pueden remover, lo comisionan para una tarea -en el caso, el ejercicio con restricciones establecidas por los propios comitentes, del cargo de “Presidente”-. En consecuencia, debe concluirse que en el período que va desde diciembre de 1981 a junio de 1982 no existió propiamente -ni de derecho ni de hecho- un Presidente de la Nación, ni un órgano unipersonal que lo reemplazara, sino un órgano colegiado, a saber, la Junta de Comandantes en Jefe. Por ello, no configurándose en autos el sustento fáctico para la aplicación de la normativa invocada, corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que denegó el beneficio de pensión graciable solicitado.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94497

07.09.01

“GALTIERI, LEOPOLDO FORTUNATO c/ Estado Nacional - Secretaría de Desarrollo Social”

(Ch.-D.-M.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inaplicabilidad.

De la lectura de los considerandos del Dec. 430/00 surge claramente que su finalidad ha sido “introducir modificaciones al gasto en personal” (cons. 2º) por medio de “la reducción de los sueldos del sector público” (cons. 9º). Asimismo, circunscribe el ámbito de aplicación personal y material de sus disposiciones a “la relación sustancial de empleo público” (cons. 11º) y a “la rebaja de los haberes del personal estatal” (cons. 16º), y luego de individualizar a los sujetos comprendidos, establece que sus disposiciones regirán “con independencia del régimen laboral que resulte aplicable a dicho personal” (art. 1º). De todo ello surge que los preceptos del referido decreto son aplicables exclusivamente al personal que presta servicios activos en el sector público nacional, quedando totalmente fuera de su alcance aquellos sujetos que actualmente se hallan en estado de pasividad o en situación de retiro efectivo. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Herrero. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inaplicabilidad.

Del texto del Dec. 430/00 surge claramente que el propio titular del Poder Ejecutivo ha advertido la existencia de dos ámbitos materiales y personales de aplicación normativa, al disponer la reducción de los fondos destinados a los haberes de retiros, jubilaciones y pensiones por medio del Dec. 438/00 (dictado apenas 48 hs. después de aquél), excluyendo taxativamente “las situaciones amparadas en los regímenes especiales para las fuerzas armadas y de seguridad o defensa y el personal militarizado de las mismas ...”. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Herrero. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inaplicabilidad.

La inteligencia que se asigna a las disposiciones del Dec. 430/00 preserva la autonomía funcional de ambas relaciones jurídicas de derecho público y sus respectivos y específicos regímenes legales, como también se adecua a la doctrina del Alto Tribunal que sostiene que en la interpretación de las leyes previsionales, el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que las inspiran (Fallos 320:2596, entre otros). Por ser ello así, resulta innecesario expedirse acerca de la validez constitucional del referido decreto 430/00, el que debe declararse inaplicable al personal retirado de las fuerzas armadas y de seguridad. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Herrero. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inaplicabilidad.

El objetivo sustancial del Dec. 430/00 es imponer una reducción de las retribuciones brutas de los haberes del personal en actividad y no afectar derechos patrimoniales del personal entrado en pasividad. Ello obstaculiza el progreso de la tacha de inconstitucionalidad formulada por el titular, máxime cuando otro decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo -el Dec. 438/00-, que sí afecta al personal jubilado imponiendo una reducción de los haberes de pasividad, excluye de su ámbito al personal de las fuerzas armadas, de seguridad y defensa, y al militarizado. Las disposiciones del Dec. 430/00 no resultan aplicables al personal retirado de las fuerzas armadas y de seguridad. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Etala. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inaplicabilidad.

Si por vía de hipótesis se admitiera que la aplicación del Dec. 430/00 a los haberes de pasividad, para que un planteo de inconstitucionalidad del mismo pudiese prosperar, el titular tendría que demostrar que la quita y/o reducción supera el 15% de su haber, ya que el Superior Tribunal de la Nación ha admitido la validez constitucional de las normas jubilatorias cuya aplicación provoque una disminución de la prestación no superior a dichos porcentajes (cfr. C.S.J.N., sent. del 19.08.99, “Actis Caporale, Loredano”; íd. sent. del 21.12.00, “Bieler de Caraballo, Nelly E.”). Las disposiciones del Dec. 430/00 no resultan aplicables al personal retirado de las fuerzas armadas y de seguridad. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Etala. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Es evidente que con la aplicación del Dec. 430/00 el patrimonio del titular ha sufrido objetivamente un menoscabo, sin importar su grado o cuantía, en la medida que la magnitud del agravio que ocasiona no corresponde a la autoridad pública mensurar, en tanto la incidencia perniciosa que significa depende, por ser su evaluación eminentemente subjetiva, de cada uno de los involucrados por la medida y ello conlleva a la necesidad de determinar si la norma que lo dispone cumple con los recaudos legales. Por eso, debe entenderse que la vía del amparo resulta adecuada, pues éste debe ir más allá de la simple discusión formal de admisibilidad en torno a la gravedad o irreparabilidad de un daño -situación que obviamente no puede meritar la administración, atento el carácter alimentario que reviste el haber previsional y las necesidades de cada sujeto y su núcleo familiar-, resul-

tando trascendente la labor interpretativa de los jueces, quienes deben determinar si la cuestión suscitada se ajusta al marco constitucional. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

El dictado del Dec. 430/00 no se trata de un acto discrecional o de pura administración, pues las propias circunstancias que lo avalan dejan en claro que se está en presencia, lisa y llanamente, de un decreto de necesidad y urgencia. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

La ley 25.152, que el organismo cita para avalar el Dec. 430/00, no da carta blanca para modificar pautas presupuestarias aprobadas. “Si la ley que es objeto de reglamentación no derogó una norma de igual rango, el decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo no puede hacerlo sin exceder su potestad reglamentaria, en violación del inc. 2 del art. 99 de la C.N. (cfr. C.S.J.N., “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros”, Fallos 322:752). Por ende, mal puede interpretarse que la intención legislativa -limitada al ajuste fiscal- fuera modificar por vía de un “decreto ordinario” el gasto público previsto en el presupuesto. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

“La retribución del empleado público no puede ser reducida, ya que su quantum está garantizado por el principio de intagibilidad de las remuneraciones -arts. 14 bis y 17 C.N.- el que por ende no puede ser afectado ni disminuido sin violar la Carta Magna. Razones de índole presupuestaria o de dinámica administrativa no son suficientes para quebrantar tal directiva, dado que la relación de empleo con el Estado, revestida de características específicas y garantías correlativas -especialmente la estabilidad- debe constituir una prioridad para el legislador, y en su aspecto retributivo, que es la obligación sustancial del Estado empleador, el imperativo constitucional sólo admitiría que eventualmente se altere el sueldo cuando situaciones de grave riesgo social justifiquen una medida súbita” (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 12.12.96, “Díaz, Víctor Raúl c/ P.E.N.”, voto de la Dra. Herrera). La C.S.J.N., en el caso “Guida, Liliana c/ P.E.N.” (sent. del 02.06.00), expresamente refirió a la emergencia como condicionante de la posibilidad del Estado de reducir las remuneraciones de los agentes públicos. La jurisprudencia transcripta resulta importante, pues aun con las peculiaridades propias de cada causa, pone de relieve un hecho importante: la reducción de los haberes no responde a una facultad ordinaria de los poderes del Estado, y menos aún del Ejecutivo. Antes bien, sólo en casos de crisis y emergencia, puede ser tolerada. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Si el Congreso de la Nación no sanciona la ley que exige el art. 99, inc. 3 de la

C.N., facilita que se desdibujen los precisos límites del régimen de la división de poderes y favorece un estado de inestabilidad de las relaciones jurídicas y da lugar a diversas y desafortunadas visiones respecto de qué debe entenderse y sobre qué plataforma normativa descansa la noción de seguridad jurídica. Al respecto se ha dicho que “Si este órgano fundamental del Estado (el Congreso) funcionara como en teoría está previsto, la cuestión misma de los decretos de necesidad y urgencia ni siquiera existiría” (cfr. Guillermo Fanelli Evans en Estudios sobre la Reforma Constitucional), y que “Si no hay reglas limitando el ejercicio de la necesidad y urgencia, se gobernará de facto” (cfr. Ekmekdjian, E.D. 13./07/00). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Cuando el Poder Ejecutivo emite un decreto de necesidad y urgencia, los jueces de todas las instancias deben comprobar si se halla reunido el requisito constitucional consistente en que existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes (art. 99, inc. 3º). Solamente cuando se da esa situación extraordinaria es posible admitir la procedencia constitucional de un decreto de la naturaleza aludida (cfr. Félix Lon, “¿Supralegalidad de los decretos de necesidad y urgencia?”, J.A., 18/03/98, nº 6081). Por ello, el juicio ha de ceñirse a esa faceta en la medida que lo que se plantea es el control jurídico –si se encuentra cumplimentada la exigencia constitucional- y no al examen de contenido de la norma, que sí es una tarea de carácter eminentemente de política legislativa que solamente puede llevar a cabo el legislador (cfr. autor y obra citada). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

La claridad de los términos que emplea el constituyente no abriga dudas sobre el fin institucional que persiguió la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, y que no es otro que ratificar al Congreso de la Nación como el órgano específico que la Constitución designa para cumplir la actividad legislativa (arts. 1, 24, 44 y sigts. Y 99 inc. 3º) por sobre “prácticas paralelas al sistema constitucional” de índole cuasi-legal que sólo es admisible en situaciones justificables de extrema excepcionalidad. La innegable voluntad de aquél de rechazar “prácticas paralelas, a contramano de la directiva constitucional, ha sido interpretada en igual sentido por la C.S.J.N. –voto de la mayoría- en la causa “Verrocchi, Daniel” (sent. del 19.08.99) donde se afirmó que “el texto nuevo es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país, especialmente desde 1989”. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

El camino que la Constitución impone transitar al Poder Ejecutivo para legitimar su actuar cuando recurre a la figura del decreto de necesidad y urgencia, impone satisfacer, de manera esencial, exigencias materiales ineludibles. Primeramente, aparecen tres inevitables: 1) Que concurren circunstancias excepcionales; 2) Que sea imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la C.N. para la sanción de las leyes; 3) La existencia de la Comisión Bicameral Permanente. A dicha numeración, cabría agregar otro tipo de recaudos que son producto inescindible de

la materia en tratamiento: a) Que el Congreso se encuentre en receso, y b) Que la materia objeto del decreto de necesidad y urgencia no haya recibido tratamiento legislativo. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Con relación a la concurrencia de “circunstancias excepcionales”, la doctrina del Alto Tribunal ha interpretado que para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas circunstancias: sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal, o que la situación que requiriese solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de la leyes (cfr. “Verrocchi, Daniel” ,sent. del 19.08.99). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Ante la ausencia de la Comisión Bicameral Permanente que expresamente prevé el inc. 3º del art. 99 de la Constitución Nacional, no puede recurrirse a la aplicación de la doctrina de la “ratificación virtual”. Por ello, más allá de la mención de forma que contiene el Dec. 430/00 de dar cuenta de su dictado al Honorable Congreso de la Nación a los fines del referido artículo, es de resaltar que desde la reforma constitucional de 1994 debe considerarse abrogada la aplicación de la doctrina de la ratificación virtual que la C.S.J.N. enunciara oportunamente, debido a que el hoy art. 82 de la C.N. dispone que “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente”, con lo que se impide la “sanción tácita o ficta”. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

De los fundamentos que explican el motivo del dictado del Dec. 430/00, en parte alguna aparece una mención de causas objetivas, incontrovertibles y notorias que expliquen las “circunstancias excepcionales” que obligan a eludir el procedimiento constitucional para la formación y sanción de las leyes (art. 77 C.N.). Hay sí, para satisfacer un aspecto meramente formal en la redacción de la medida, una retórica referencia –genérica y voluntarista- para dar una pátina de justificación: “Que la citada situación antes descripta configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites previstos por la C.N. para la sanción de las leyes resultando imperioso el dictado del presente”. Allí radica el meollo que el Poder Ejecutivo debió probar para justificar la legitimidad del procedimiento constitucional del decreto de necesidad y urgencia. Dicho aspecto era medular para la salud de las instituciones de la República y, a manera de frontera, lo separaba de la figura del decreto-ley. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Aún admitiendo, a título de hipótesis, que es un atributo del Poder Ejecutivo no justiciable evaluar la situación existente y rotularla como de “gravísima” o de “emergencia”, en el caso del Dec. 430/00 lo que es inadmisibles es que, como justificativo de la conducta adoptada, se invoque un estado de “excepcionalidad” que no guarda vínculo de coherencia con la exigencia esencial de imposibilidad de “seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” por hallarse el Congreso de la Nación en sesiones ordinarias (art. 63 C.N.), es decir, que no se encontraba en receso o frente a una imposibilidad material de imprimirle el tratamiento correspondiente (arts. 77 y ss. C.N.). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

No son suficientes las razones económicas que se alegan para convalidar el Dec. 430/00. Además, la magnitud de la crisis que reflejan los considerandos, de ajustarse a la realidad, son un motivo más que imperioso para dar participación al Congreso que, al par de ser la expresión de la representación popular, la competencia que la Constitución le asigna (art. 75 C.N.) torna inevitable su intervención. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Nadie desconoce que la preciosa situación económica que se cita en el Dec. 430/00 no sea importante y merezca la preocupación de la sociedad. Es deber de todos contribuir con medidas destinadas a su mejoramiento. En esa inteligencia, es indudable que los jueces no pueden juzgar al margen de la realidad, y con su mandato judicial colocar a la Administración Pública en situación de no poder satisfacer los compromisos del erario por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin, o en la de perturbar la marcha de la administración. Teóricamente, es razonable contemplar esa situación. Empero, en manera alguna, ello significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir con el orden constitucional, o lo que es más grave aún, desdibujar el esquema de la división de poderes con el propósito de derogar una ley mentando circunstancias no creíbles para obviar al Congreso de la Nación. Ello importa tanto como colocarse fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto (cfr. doctrina de la C.S.J.N. en “Pietranera, Josefa y otros”, sent. del 07.09.96). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

La necesidad que pueda tener el Poder Ejecutivo en contar, en escaso tiempo, con determinada legislación sobre una materia, no es causal suficiente para pretender sortear el imprescindible trámite parlamentario, que es una garantía más que el régimen republicano pone como control del poder y protección para la razonabilidad de las normas. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

El sometimiento material y formal del Poder Ejecutivo a los inderogables procedimientos que establece la Constitución Nacional para que adquiera legitimidad el orden jurídico, no descansa ni depende de su voluntad o discrecional apreciación de sí debe aplicarla o no. El Poder Ejecutivo es un poder constituido, no el poder constituyente. De allí que la sola invocación de la existencia de crisis o emergencia, por verosímil y preocupante que sea, no habilita ni autoriza a prescindir del Congreso de la Nación, que es el depositario natural del principio de la soberanía del pueblo. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Desde la perspectiva constitucional es inaceptable, por insuficiente, acudir a razones de apremio económico para configurar sobre la base de ellas, las circunstancias excepcionales que impiden seguir los trámites previstos por la Constitución Nacional para la formación de las leyes; tanto más si no existieron razones de fuerza mayor que impidiesen la reunión de las Cámaras del Congreso ni se ha demostrado la urgencia que justificase soslayar el debate en el seno del órgano que representa por excelencia la voluntad popular, especialmente tratándose de una materia en extremo delicada. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

No es motivo atendible, ni justifica o torna creíbles argumentos en pro de respaldar una apariencia de “circunstancias excepcionales”, apelar a la demora que significa por los canales constitucionales el debate de un proyecto de ley. Tampoco que la magnitud de la actividad legislativa conspira contra la celeridad que imponen soluciones inmediatas. Estas son, en definitiva, razones más efectistas que ciertas. La descalificación legislativa con causa en su lentitud, como contrapartida de la falaz apelación a concretos y prontos resultados que demanda la dinámica institucional moderna, son objetables atajos para obviar al gobierno del pueblo representado en el Congreso de la Nación (art. 22 C.N.). No se teme, en sí, al tiempo que demande el tratamiento “de formación y sanción de las leyes”, sino al resultado de su tratamiento. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

La indecisión del Poder Legislativo en crear la Comisión Bicameral Permanente no significa que el Poder Ejecutivo pueda continuar haciendo uso y abuso de las prácticas paralelas, a las que el Poder Constituyente decidió poner fin sancionando la Reforma de 1994. El concepto de “prácticas anteriores” a la referida reforma significa un muro de contención a todo intento del Ejecutivo de turno de apelar a las mismas. Y si el Poder Legislativo no avanza en la sanción de los procedimientos previstos por la Constitución actual, su omisión no puede interpretarse como de tolerancia a la repetición de conductas para-constitucionales a las que la Reforma de 1994 puso fin. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

Ante la inexistencia de “circunstancias excepcionales” que impidieran concretar el trámite ordinario dispuesto por el art. 77 y ss. de la Constitución Nacional, al dictar el Dec. 430/00, el Poder Ejecutivo ha ingresado e interferido en competencias propias del Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12, C.N.), conducta claramente prohibida a aquél de modo sustantivo (art. 99, inc. 3, 2do. párrafo, C.N.). Ello vicia y afecta al referido decreto de necesidad y urgencia, y lo descalifica como tal por su nulidad absoluta e insanable al constituir un acto de exclusivo voluntarismo del Poder Ejecutivo, incompatible con los principios de representatividad y división de poderes, propio del sistema republicano (art. 1, C.N.). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83350

25.06.01

“SOTO, CARLOS HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Préstamo. Dec. 1897/85. Res. 500/85 Ministerio de Defensa. Costas a la demandada. Allanamiento. Improcedencia.

Corresponde rechazar el agravio de la accionada cuestionando la imposición de las costas por haberse allanado al momento de contestar la demanda, si de las constancias de autos surge que, a la par del allanamiento, opuso la defensa de prescripción que fue rechazada por el “a quo”. Ello así, porque el art. 70 del C.P.C.C. establece que para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 78505

27.06.01

“ARRIETO, EDUARDO JOSÉ Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa”

(M.A.-F.-L.)

Haberes previsionales. Suplementos. Decs. 628/92 y 2701/93. Prescripción. Interrupción por reconocimiento de la obligación. Dec. 2684/93.

A la luz de lo prescripto por el art. 3989 del Código Civil se dictó el Dec. 2684/93, que autorizó al Ministerio de Defensa a cancelar, del modo que indica, los importes correspondientes a la compensación por “inestabilidad de residencia” instituido por los Decretos 628/92 y 2701/93, devengados hasta el 31.12.93 al Personal militar de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad en situación de retiro y sus pensionistas que adhirieran al régimen instaurado. En consecuencia, aunque los actores no se encontraran “prima facie” comprendidos en las condiciones enumeradas en el primero de los decretos -en el caso, al menos no se ve cumplido lo dispuesto por el art. 3, inc. b)-, dado que el reconocimiento de la obligación es un acto jurídico por el cual alguien admite la existencia de una obligación a su cargo y su dictado implica la admisión por él de la existencia de la obligación, lo que configura el reconocimiento de la deuda (cfr. Jorge J. Llambías, “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones”, Tº II B, págs. 72 y 79), debe concluirse que se han dado las circunstancias previstas en los arts. 718 y ss. y 3989 del Código Civil.

C.F.S.S., Sala I

sent. 96237

03.12.01

“PONT LEZICA, HÉCTOR CÉSAR Y OTRO c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa”

(Ch.-M.-D.)

Haberes previsionales. Suplementos. Prescripción. Cómputo.

Reconocido el carácter general y bonificable de los adicionales y suplementos creados por los Decretos 2000/91, 2115/91, 628/92, 2701/93, el plazo de prescripción debe computarse desde el día de la promoción de la demanda.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92957

30.05.01

“MABRAGAÑA, JUAN RAMÓN Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa”

(M.-D.-Ch.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2769/93.

La C.S.J.N. en las causas “Bovari de Díaz, Aída y otros” y “Villegas, Osiris G. y otros” (ambas del 04.05.00), afirmó que de la exégesis del Dec. 2769/93 y la Res. del Ministerio de Defensa 1459/93, como de los informes producidos, se puede concluir que el suplemento por responsabilidad de cargo o función, la compensación por vivienda, la compensación por adquisición de textos, el suplemento por mayor exigencia de vestuario y el suplemento por zona, destinados al personal en actividad del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, “... no han sido creados ni otorgados con carácter generalizado a la totalidad del personal en actividad ni a la totalidad del personal de un mismo grado, y que su aplicación se ha ajustado, en general, a los términos del decreto del Poder Ejecutivo y la resolución del Ministerio de Defensa”, sin que se advierta, por lo demás que “el Poder Ejecutivo, como jefe de las fuerzas armadas, se hubiese excedido en sus facultades reglamentarias (arts. 57 y 58 de la ley 10.101... al otorgar las asignaciones cuestionadas y determinar sus alcances temporales y fácticos sobre la base de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia tenidos en cuenta al momento de su dictado ...”, pues como surge de los considerandos del citado decreto, con ello ha procurado compensar ciertos gastos que está obligado a realizar el personal militar en actividad y determinadas circunstancias específicas que debe cumplir. Por todo ello, concluyó que tales asignaciones “... instituidas y aplicadas con carácter particular y como compensación de ciertos gastos (arts. 57 y 58 de la ley 19.101), en tanto participan de tal naturaleza, no pueden considerárselas acordadas en concepto de sueldo y, por lo tanto, no deben ser computadas para determinar el haber de retiro”.

C.F.S.S., Sala III

sent. 78035

03.05.01

“CAMPOS, MARÍA DE LA GLORIA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior”

(F.-M.A.-L.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2769/93.

Para que “... una asignación sea incluida en el concepto de sueldo y, por lo tanto, deba ser trasladada al haber de retiro por haber sido otorgada con carácter generalizado, se requiere, en principio, que la norma de creación la haya otorgado a la totalidad de los militares en actividad ...; y excepcionalmente, en el caso en que de la norma no surja su carácter general, en la medida en que se demuestre de un modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los grados lo percibe y que importa una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro”; circunstancias éstas que no se configuran respecto a los rubros contemplados en el Dec. 2769/93.

C.F.S.S., Sala III

sent. 78035

03.05.01

“CAMPOS, MARÍA DE LA GLORIA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior”

(F.-M.A.-L.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2769/93. Costas por su orden.

Rechazada la pretensión de que se computen como sueldo a los fines del cálculo del haber de retiro los rubros contemplados en el Dec. 2769/93, corresponde imponer las costas de ambas instancias por su orden, atento la índole de la cuestión debatida y habida cuenta que la parte actora pudo considerarse razonablemente asistida de mejor derecho ante la existencia de precedentes jurisprudenciales favorables (art. 68 C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78035

03.05.01

“CAMPOS, MARÍA DE LA GLORIA Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior”

(F.-M.A.-L.)

POLICÍA FEDERAL

Haberes previsionales. Compensaciones. Dec. “S” 2801/93.

Corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que rechazó la pretensión del cobro de las compensaciones previstas por el Dec. “S” 2801/93, considerando lo dispuesto en el art. 14 de la ley “S” 19.373/71 -modif. por ley “S” 21.705/77-, por resultar aquéllas sustancialmente análogas a lo resuelto por la C.S.J.N. en pronunciamientos relativos a normas de idéntico contenido, en las causas “Bovari de Díaz, Aída y otros” y “Villegas, Osiris G. y otros”, ambas falladas el 04.05.00, en las cuales el Alto Tribunal estableció la naturaleza y alcance de dichos ítems, a cuyos fundamentos y consideraciones cabe remitir por razones de brevedad.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94498

07.09.01

“ROJAS, JULIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(Ch.-D.-M.)

Haberes previsionales. Obra Social. Aporte. Porcentual. Dec. 582/93. Competencia.

El fuero de la Seguridad Social es competente para entender en una demanda iniciada con el objeto de que, previa declaración de inconstitucionalidad del Dec. 582/93, se ordene al Estado Nacional - Ministerio del Interior se abstenga de retener el 10.75% del haber de retiro del titular con destino al financiamiento de la Obra Social de la Policía Federal Argentina, autorizándosele únicamente la percepción del 3% tal como lo prescribe la ley 23.660. Ello así, porque la naturaleza de la pretensión esgrimida es netamente previsional, puesto que si bien se cuestiona una norma dictada por el P.E.N., el fin que se procura con ello es poner término a un descuento que -a criterio del titular- resulta confiscatorio de su haber de retiro y se opone a las disposiciones de la normativa que rige la actividad de las obras sociales. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52091

12.07.01

“LICERA DE SEKULA, EMILSE ALCIRA c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Obra Social. Aporte. Porcentual. Dec. 582/93. Competencia.

La competencia del Tribunal está referida, para el caso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, únicamente a las demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones (art. 2, ley 24.655). En consecuencia, debe concluirse que no se circunscribe a la órbita del mismo una demanda tendiente a que revoque y/o declare la nulidad del Dec. 582/93 por inconstitucional, y se ordene al Estado Nacional - Ministerio del Interior se abstenga de continuar percibiendo en concepto de aporte, el porcentaje del 10.75% del haber de retiro del titular con destino al financiamiento de la Obra Social Policial, autorizándosele a dicho ente a que perciba sólo el 3%, tal como lo prescribe la ley 23.660. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52091

12.07.01

“LICERA DE SEKULA, EMILSE ALCIRA c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Obra Social. Aporte. Porcentual. Dec. 582/93. Competencia.

Se declara la competencia del fuero contencioso administrativo federal -y no de la justicia Federal de la Seguridad Social- para entender y decidir en la acción de amparo contra el Ministerio del Interior y la Policía Federal Argentina, a fin de que se abstenga de seguir percibiendo de parte del actor, en concepto de aporte, el porcentaje del 10.75% de su haber de retiro con destino al financiamiento de la Obra Social Policial, autorizándoseles a retener el 3% tal como lo prescribe la ley 23.660 y se decrete la inconstitucionalidad del art. 841 del Dec. 1866/83 y del Dec. 582/93 (cfr. C.N.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 09.02.99, “Domínguez, Antonio José c/ Ministerio de Interior - Policía Federal Argentina”). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52091

12.07.01

“LICERA DE SEKULA, EMILSE ALCIRA c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior”

(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2744/93. Causa de la obligación. Ley 25.344. Fecha de corte.

La verdadera causa de la obligación no está dada por la sentencia de la Cámara que se limita a reconocer el derecho del peticionante a la percepción de los beneficios previstos por el Dec. 2744/93, sino por el propio decreto que origina la obligación en la demandada de pagar lo reconocido en la sentencia. En consecuencia, la obligación generada responde a una causa anterior a la fecha de corte imputada por la ley 25.344 (01.01.00), motivo por el cual, habiendo la C.F.S.S. actuado lo ordenado por las Resoluciones de Cámara nº 55 (24.11.00) y nº 57 (05.12.00) con relación a la aplicación de la norma referida y su Dec. Reg. 1116/00, corresponde considerar que el crédito quedó comprendido en la ley de emergencia en cuestión.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 52740

19.11.01

“PÉREZ DE PIÑERO, MARÍA ESTHER c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”

(M.-Ch.-D.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2744/93. Carácter salarial.

La generalidad que asumió el pago al personal en actividad de los suplementos establecidos por el Dec. 2744/93, que se percibe con independencia de si el interesado se ve sometido a una exigencia o situación especial que implique el riesgo o peligro, muestra de modo indisimulable que su otorgamiento ha tenido connotaciones salariales ... Entonces, más allá de la motivación del decreto de referencia que relaciona las circunstancias calificantes del derecho a los beneficios con particulares exigencias de algunos cargos en un caso, o singulares responsabilidades de determinadas dependencias en otros, y hasta de su propio texto (que prohíbe el otorgamiento generalizado de los suplementos por el grado o por la situación de revista en actividad), lo cierto es que ante su evidente naturaleza salarial, se torna imperioso su cómputo para la determinación de los haberes de pasividad, habida cuenta de lo dispuesto por el recordado art. 97 de la ley 21.965 (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.03.98, “Torres, Pedro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83895

24.08.01

“RENGACH DE HIPPERMAYER, ROSA c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior y otro”

(F.-E.-H.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2744/93. Carácter salarial. Ley 24.624, art. 44.

El decreto 2744/93 no puede -por su naturaleza- modificar ni desconocer lo establecido en normas superiores que, en ese punto, establecen claramente no sólo el concepto por el cual deben acordarse los aumentos al personal en servicio activo, sino también el derecho de los retirados al incremento de sus haberes (cfr. doctrina de Fallos 262:41), máxime cuando de lo que se trata es de preservar la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero con respecto al segundo -Fallos 312:787 y 802:403- (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.03.98, “Torres, Pedro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”). Tampoco puede concluirse que el art. 44 de la ley 24.624 (Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1996), al ratificar decretos que crearon suplementos similares, haya modificado la norma específica en la materia; máxime cuando el art. 20 de la ley 24.156 expresamente veda tal posibilidad, al disponer que la ley de presupuesto “no podrá reformar o derogar leyes vigentes”.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83895

24.08.01

“RENGACH DE HIPPERMAYER, ROSA c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior y otro”

(F.-E.-H.)

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 2744/93. Carácter salarial. Ley 24.624, art. 44.

No puede concluirse que el art. 44 de la ley 24.624 (Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1996), al ratificar decretos similares (en el caso, Nros. 2133/91 y 713/92.), haya modificado la norma específica en la materia: la ley 21.965; máxime cuando el art. 20 de la ley 24.156 expresamente veda tal posibilidad, al disponer que la ley de presupuesto "no podrá reformar o derogar leyes vigentes". Esta norma -en sentido similar al art. 18 del decreto ley 23.354/56- tiene el propósito de limitar el presupuesto a su función formal de acto gubernamental, cuyo objetivo es autorizar los gastos a realizar el próximo año, y calcular los recursos probables con que se solventarán esos gastos (cfr. Villegas, Héctor, "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", pág. 791; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 05.06.96, "García Vacas de Borderes Castex, Nilda Isabel y otros c/ E.N."; ídem, Sala I, sent. del 26.11.96, "Fernández Prini, Roberto c/ P.E.N."; ídem, Sala V, sent. del 16.04.97, "Padula, Carlos A. c/ E.N.").

C.F.S.S., Sala II

sent. 83895

24.08.01

"RENGACH DE HIPPERMAYER, ROSA c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior y otro"

(F.-E.-H.)

Haberes previsionales. Suplementos. Prescripción. Caso "Jaroslavsky". Ley 23.627.

En los autos "Jaroslavsky, Bernardo" (fallo del 26.02.85) la C.S.J.N., al dejar sin efecto la sentencia apelada que hiciera lugar a la defensa de prescripción anual opuesta por el ente gestor frente a una solicitud de reajuste de haberes relativos al beneficio ya acordado, estableció -sobre la base de los fundamentos del dictamen del Procurador Fiscal- que la prescripción a aplicar en la especie era la bienal "por cuanto la prescripción anual prevista en el art. 82 de la ley 18.037 viene indicada para regir el pago de haberes devengados con anterioridad a la solicitud del beneficio, mientras que los devengados con posterioridad a ese acto, el plazo por cuyo transcurso quedaría extinguido el crédito es de dos años, conforme con lo previsto en dicha norma". Dicha doctrina fue aplicada, de manera uniforme, por las tres Salas que conforman el Tribunal (cfr. Sala I, sent. del 29.03.93, "Orqueanza de Gastaldi, Julia"; Sala II, sent. del 10.04.90, "Rondán, Isidra Bernardina"; Sala III, sent. del 16.08.89, "Szczipak, Sofía Rebeca", entre otros). La misma interpretación debe efectuarse con respecto al art. 2 de la ley 23.627, dada su similitud con el art. 82 de la ley 18.037 -así también lo entendió la Sala I de la C.F.S.S. en autos "Musto, Rubén Nicolás c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal", sent. del 20.05.99-.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83895

24.08.01

"RENGACH DE HIPPERMAYER, ROSA c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior y otro"

(F.-E.-H.)

Costas. Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad. Art. 68 C.P.C.C.

El principio general en materia de costas (que las mismas "se imponen al vencido", art. 68 C.P.C.C.) importa una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr. Morello, Sosa, Berizonce; "Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. Aires y de la Nación, comentados y anotados"), pues de otro modo, los gastos efectuados se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (cfr. C.N.A.Civ., Sala "E", sent. del 07.10.83, E.D. 108-147; ídem Sala "D", sent. del 24.02.84, L.L. 1984-C-158). El fundamento del instituto y valor esencial sobre el cual se construye el principio radica en el hecho objetivo de la derrota, ya que las circunstancias subjetivas, la conducta observada en el litigio, su buena o mala fe, carecen de influencia para determinar la imposición de costas.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83895

24.08.01

"RENGACH DE HIPPERMAYER, ROSA c/ Estado Nacional - Ministerio del Inte-

rior y otro”
(F.-E.-H.)

SERVICIO PENITENCIARIO

Haberes previsionales. Reducción. Dec. 430/00. Inaplicabilidad.

Tanto de los considerandos como de la parte normativa del Dec. 430/00, no se desprende que queden abarcadas en sus prescripciones las personas que se encuentran en estado de pasividad. Al respecto, debe advertirse que partiendo de la finalidad de que con su dictado se tiende “a introducir modificaciones al gasto del personal”, se otorga al P.E.N. competencia para normar los sueldos del sector público ..., sin hacer mención alguna a los haberes de pasividad, reflexión que da plena aplicación al principio que informa la doctrina de la Excma. C.S.J.N. en cuanto puntualiza, por una parte, que “la inconsecuencia o falta de precisión, jamás se supone en el legislador y por ello se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de la leyes debe hacerse evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que concilie y deje a todas con valor y efecto” (Fallos 303:1041; 310:395; 312:1264 y sent. del 26.12.96, “Chocobar, Sixto Celestino”, entre otras); y por la otra, que “la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar su voluntad es la letra de la ley” (Fallos 308:1745; 312:1098; 313:254; etc.). En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que hizo lugar a la acción de amparo deducida, declaró inaplicable el Dec. 430/00 y ordenó a la demandada abstenerse de aplicar la reducción en el haber de retiro respectivo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72071

21.06.01

“BOBADILLA, DIONISIO Y OTROS c/ Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”

(M.A.-L.-F.)

Haberes previsionales. Reducción. Dec. 430/00. Inaplicabilidad.

Las disposiciones del Dec. 430/00 no pueden hacerse extensivas al sector pasivo, toda vez que ello involucra una reducción de los haberes de retiros, jubilaciones y pensiones acordadas y en goce, lo cual tratándose de derechos alimentarios, requiere a tal fin de norma legal expresa (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 12.03.01, “Havlis, Carlos Alberto”). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72071

21.06.01

“BOBADILLA, DIONISIO Y OTROS c/ Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”

(M.A.-L.-F.)

Haberes previsionales. Reducción. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

El Dec. 430/00 no reúne los requisitos exigidos por el art. 99, inc. 3) de la Constitución Nacional, puesto que ha sido dictado durante el período de sesiones del Congreso, razón por la cual hubo de ser éste el organismo donde se debatiera la cuestión. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia del “a quo” que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta, declarando -en el caso- la inconstitucionalidad del decreto de referencia y ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que se abstuviera de aplicar las disposiciones de dicha normativa. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72071

21.06.01

“BOBADILLA, DIONISIO Y OTROS c/ Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”

(M.A.-L.-F.)

Haberes previsionales. Reducción. Dec. 430/00. Inconstitucionalidad.

La necesidad y urgencia contemplada en el art. 99, inc. 3) de la Constitución Nacional para atribuir validez a los decretos-leyes nada tiene que ver con imposibilidades políticas de obtener los votos requeridos para que prospere una iniciativa

legislativa del Poder Ejecutivo. Una interpretación contraria implicaría desconocer el principio de la división de poderes y, consiguientemente, un quiebre en el orden institucional que nos rige. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72071

21.06.01

“BOBADILLA, DIONISIO Y OTROS c/ Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”

(M.A.-L.-F.)

S.I.D.E.

Haberes previsionales. Suplementos. Sentencia. Jurisprudencia de la C.S.J.N. Recurso extraordinario. Improcedencia.

Aunque los agravios remitan al examen de normas de carácter federal como son las leyes 19.373 y 21.965, los Decretos 780/92 y 2751/93 y el Decreto “S” 4639/73, modificado por el Decreto “S” 2081/93, razón por la cual, en principio, correspondería conceder el recurso extraordinario deducido, el mismo deberá ser denegado si el pronunciamiento apelado tiene respaldo en fallos emitidos por la C.S.J.N. en las causas “Bovari de Díaz, Aída y otros”, “Villegas, Osiris G. y otros” (ambas sentencias del 04.05.00), “Franco, Rubén Oscar y otros” (sent. del 19.08.99) y “Freitas Henriquez, José Eduardo y otros” (sent. del 05.10.99), en virtud de las cuales, el Alto Tribunal estableció la interpretación y alcance de las normas referidas.

C.F.S.S., Sala I

resolución

29.11.01

“BARDI, OSCAR HORACIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina”

(Ch.-M.)

HABERES PREVISIONALES

DETERMINACIÓN DEL HABER INICIAL

Fecha de cese. Caso “Baudou”.

En cuanto a la determinación del haber inicial, habiendo cesado el titularidad con anterioridad al 01.04.91, no resulta de aplicación lo dispuesto por la C.S.J.N. en autos “Baudou, Osvaldo Jorge”, sent. del 31.08.99.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94342

31.08.01

“GUTIÉRREZ DE CHIARELLA, JUANA VALENTINA c/ A.N.Se.S”

(M.-Ch.-D.)

FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO

Bonos de consolidación. Ley 24.463, arts. 16, 22 y 23. Inaplicabilidad.

Cuando lo que se procura es el cobro de la deuda reconocida por el propio organismo, a ser abonada mediante la entrega de bonos con arreglo a lo dispuesto por la ley 23.982 y el decreto 2140/91, resulta inaplicable lo previsto por los arts. 16, 22 y 23 de la ley 24.463, disposiciones de excepción que sólo se refieren al pago de retroactividades resultantes de sentencias que reconocen el derecho al reajuste de haberes.

C.F.S.S., Sala III

sent. 79710

30.08.01

“SORIA, JORGE PABLO c/ A.N.Se.S.”

(F.-L.-M.A)

Bonos de consolidación. Costas. Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad.

Las disposiciones del art. 21 de la ley 24.463 habrán de interpretarse y aplicarse con criterio restrictivo, habida cuenta de su carácter excepcional respecto del régimen general de costas previsto por el C.P.C.C. . Por tal motivo, resultan ajenos a su ámbito de aplicación los procesos en los que se procura el pago de una acreencia reconocida por el propio organismo (en el caso, pago de Bocones correspondientes a la deuda reconocida a favor de los herederos).

C.F.S.S., Sala III

sent. 79710

30.08.01

“SORIA, JORGE PABLO c/ A.N.Se.S.”

(F.-L.-M.A)

Conviviente. Carácter de causahabiente. Bonos de consolidación.

Probado con el expediente administrativo agregado por cuerda que al accionante se le reconoció el carácter de causahabiente, pues el propio organismo administrativo le otorgó el derecho a pensión en consideración a su condición de conviviente a la época del deceso de la causante, corresponde tener por acreditado su carácter de causahabiente en los términos dispuestos por el art. 43 del C.P.C.C. y art. 20 de la ley 14.370, y confirmar lo resuelto por el “a quo” que hizo lugar a la demanda interpuesta por el accionante en procura de obtener el cobro de bonos de consolidación pendientes de pago a su concubina prefallecida. El Alto Tribunal, en un fallo de características análogas, expresó que es descalificable el pronunciamiento que por no revestir la calidad de heredero en los términos del art. 3545 del Cód. Civ. y 43 del C.P.C.C., denegó legitimación a la conviviente para continuar el trámite de reajuste del beneficio jubilatorio iniciado por el causante, ya que desconoce la resolución del organismo previsional que había aceptado expresamente su calidad de causahabiente y el derecho a percibir los haberes impagos a la muerte del jubilado (cfr. sent. del 30/04/96, “Herrasti, Soledad”, Fallos 319:655). Dicha doctrina resulta de aplicación conforme las pautas establecidas por el art. 19 de la ley 24.463. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77115

10.05.01

“GAROFALO, ENRIQUE c/ A.N.Se.S”

(M.A-L.-F.)

Haberes impagos. Herederos. Ley 14.370, art. 20.

El art. 20 de la ley 14.370 fue objeto de análisis por el máximo tribunal de la República, quien con remisión a la jurisprudencia de fallos anteriores dejó sentado -entre otros conceptos- que los beneficios jubilatorios impagos forman parte de la herencia del difunto, disponiendo confirmar así la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que denegaba -lo solicitado por la entonces Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Navegación- que el importe adeudado al causante, por haberes impagos, fuera tenido como ajeno al haber de la sucesión (Fallos 261:47, “Nicolás, Esturiale-Sucesión”- del 26.02.65).

C.F.S.S., Sala I

sent. 94118

17.08.01

“CHIAVASSA DE SCOTTI, OLGA DELFINA c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”.

(M.-D.-Ch.)

Herederos. Prescripción. Habilitación de la instancia. Etapa previa a la traba de la litis.

Para que el órgano jurisdiccional pueda examinar el fondo de la pretensión que ante él se deduce, es preciso que concurren ciertas circunstancias establecidas por el derecho procesal, conocidas como requisitos o presupuestos procesales. El examen de estos recaudos, que condicionan la admisibilidad de la pretensión, puede ser efectuado no sólo a requerimiento de la demandada, sino también dada su naturaleza, en una etapa preliminar en la cual el juez puede desestimar oficiosamente la demanda (art. 337 del C.P.C.C.), sin que por ello se altere el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (cfr. C.S.J.N., sent. del 04.02.99, “Gorordo Allaria de Kralj, Haydee María c/ Estado Nacional”, consid. 7mo.). En igual sentido se ha sostenido que la falta de habilitación de la instancia puede ser declarada previo al traslado de la demanda en los supuestos de incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed. en pleno, sent. del 15.04.99, “Romero, Gerardo c/ E.M.G.E.”). En consecuencia, corresponde adoptar el nuevo criterio establecido

por el Máximo Tribunal en aras de preservar el principio de economía procesal, y en especial el respeto a la disposición legal contenida en el art. 19 de la ley 24.463, razón por la cual resulta procedente el análisis de la habilitación de instancia en la etapa procesal previa a la traba de la litis. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la mayoría de la Sala. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 72109

21.06.01

“GORRESE, DELIA ISABEL Y OTROS c/ A.N.Se.S.”

(L.-M.A.-F.)

Herederos. Prescripción. Habilitación de la instancia. Reclamo administrativo previo.

La respuesta a un oficio judicial en modo alguno puede configurar un acto administrativo que reúna los recaudos previstos en el art. 7 de la ley 19.549. Por tanto, la petición formulada por los accionantes -únicos herederos del causante reconocidos en el sucesorio- de que se les haga efectiva la percepción de los bonos previsionales que se hubieran reconocido en sede administrativa, solo puede ser encauzada en las previsiones del art. 30 y ss. de la L.N.P.A., esto es, mediante un reclamo administrativo previo. Sin embargo, conforme las numerosas circunstancias que autorizan la habilitación de la instancia judicial por excepción al referido reclamo administrativo previo (art. 32 de la ley 19.549, según texto ley 21.686), entre las que se destaca la prevista en el inc. e) -”...cuando mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficiencia cierta del procedimiento transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil”-, debe considerarse admisible la excepción si la conducta renuente de la Administración aparece clara y expresa, en sentido contrario al pretendido por los reclamantes -en el caso, en la respuesta emitida por el organismo al oficio judicial que se le enviara puso de manifiesto en forma suficiente que un eventual reclamo administrativo resultaría inútil, en atención a la negativa de colocar a disposición de los herederos la deuda que tuvieran con la causante por considerar que la misma se hallaría prescrita (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 22.11.94, “Bernacchi, Mario N. c/ E.N.”); motivo por el cual corresponde tener por habilitada la instancia judicial. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la mayoría de la Sala. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 72109

21.06.01

“GORRESE, DELIA ISABEL Y OTROS c/ A.N.Se.S.”

(L.-M.A.-F.)

Herederos. Prescripción. Habilitación de la instancia. Reclamo administrativo previo.

El art. 15 de la ley 24.463, reformado por ley 24.655, establece que la Justicia Federal de la Seguridad Social entenderá ante la impugnación de resoluciones emanadas de la Administración Nacional de la Seguridad Social. En consecuencia, no existiendo pronunciamiento administrativo respecto al conflicto suscitado en autos, debe concluirse que la acción intentada resulta improcedente. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 72109

21.06.01

“GORRESE, DELIA ISABEL Y OTROS c/ A.N.Se.S.”

(L.-M.A.-F.)

FECHA INICIAL DE PAGO

Prestación básica universal. Dec. 679/95, art. 3. Inaplicabilidad.

La exigencia incorporada por el art. 3 del Dec. 679/95, en cuanto dispone que el haber de la PBU se devenga sólo a partir de la presentación de la solicitud ante el organismo -sin que interese en este análisis en que forma ésta deba plasmarse- invalida la aplicación del sistema legal regulado en torno al nacimiento del derecho a la prestación, devengamiento, plazo de prescripción e interrupción de la misma. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78651

29.06.01

“GARCÍA, SUSANA ELENA c/ A.N.Se.S.”
(M.A.-F.-L.)

Prestación básica universal. Dec. 679/95, art. 3. Inaplicabilidad.

El art. 3 del Dec. 679/95 -reglamentario del art. 19 de la ley 24.241-, en cuanto pretende imponer una fecha inicial de pago distinta a la del reconocimiento del derecho al beneficio, enerva la aplicación del instituto legal de la prescripción, que presupone precisamente el ejercicio del derecho al cobro de haberes existentes, y que sólo puede resultar afectado en el supuesto de ausencia de solicitud del reconocimiento administrativa durante el transcurso de un año. En consecuencia, corresponde declarar la inaplicabilidad de la normativa reglamentaria por ilegal, en la medida que la misma no se ajusta a lo dispuesto por normas de jerarquía superior, tales como el art. 19 de la ley 24.241 y art. 82 de la ley 18.037 (cfr. art. 31 C.N.). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78651

29.06.01

“GARCIA, SUSANA ELENA c/ A.N.Se.S.”
(M.A.-F.-L.)

MOVILIDAD

Regímenes especiales. Dec. 1044/83. Ley 24.019.

No se advierte que la inclusión de los beneficiarios del Dec. 1044/83 al régimen de la ley 24.019 se erija como un factor en contra de las pretensiones del peticionante a obtener el reajuste del haber de pasividad (en el caso, obtuvo el beneficio conforme el Decreto mencionado por haberse desempeñado como Director General de la Secretaría de Servicios Públicos), en tanto en uno o en otro régimen, le corresponde una jubilación del 82% móvil. Ello así, máxime teniendo en cuenta que las leyes 24.241 y 24.463 no afectaron el régimen jubilatorio específico de la referida ley 24.019.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83146

30.05.01

“REPETTO, JULIO ALBERTO LUIS c/ A.N.Se.S.”
(E.-H.-F.)

REAJUSTE

Confiscatoriedad. Período aplicable.

La pauta por la que se fija el criterio de confiscatoriedad sólo corresponde aplicarla al período anterior al 31.03.91 (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 13.11.97, “Ruiz, Virgilio Magin”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 94145

17.08.01

“STEFANELLI, MARTHA c/ A.N.Se.S.”
(M.-Ch.-D.)

Topes. Ley 18.037, art. 55. Ley 24.463, art. 3. Planteo de inaplicabilidad.

El tratamiento del planteo de inaplicabilidad del tope dispuesto por el último párrafo del art. 55 de la ley 18.037 y por el art. 3 de la ley 24.463, debe posponerse para el momento de practicarse liquidación en base a los parámetros ordenados en la sentencia, oportunidad en la que recién podrá ser objeto de análisis la posible confiscatoriedad derivada de su aplicación.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94145

17.08.01

“STEFANELLI, MARTHA c/ A.N.Se.S.”
(M.-Ch.-D.)

Denegación. Comunicación del organismo. Impugnación judicial. Procedencia.

El último párrafo del art. 15 de la ley 24.463 mantuvo su redacción no obstante la reforma introducida por la ley 24.655, ya que el legislador consideró que la decisión de la A.N.Se.S. es la condición suficiente para habilitar la posibilidad de su impugnación judicial. En consecuencia, en cuanto existe una resolución de la

A.N.Se.S. que el actor entiende le causa agravio, el derecho a accionar judicialmente contra la misma no está condicionado al cumplimiento de otros requisitos más que los que la propia ley impone (cfr. C.F.S.S., Sala I, "Fernández, Jorge Alfredo c/ A.N.Se.S.", sent. del 30.06.97; ídem, "Geloso, Amelia", sent. del 27.11.97).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51736

11.05.01

"VON ASCHEBERG, DETMAR JUAN c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Denegación. Comunicación del organismo. Impugnación judicial. Procedencia.

No cabe presumir que la "comunicación" por la que la A.N.Se.S. hace saber al interesado la improcedencia de su pedido de reajuste, exteriorizando una manifestación administrativa precisa, no haya sido el resultado de un obrar regulado por la propia administración. En tales circunstancias, concluir que la misma no resulta impugnabile judicialmente importaría premiar un comportamiento anómalo de la A.N.Se.S., que se aparta de las formas que debe observar, con la consiguiente afectación del derecho de defensa del peticionante (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 16.07.98, "Missorini, Fernando").

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51736

11.05.01

"VON ASCHEBERG, DETMAR JUAN c/ A.N.Se.S."

(M.-D.-Ch.)

Ley aplicable.

Corresponde revocar el fallo que hizo lugar a la solicitud de reajuste del haber previsional basado en la ley 18.037, cuando de las constancias de autos se desprende que el peticionante solicitó y obtuvo su jubilación al amparo de la ley 24.241. Al respecto, ha sostenido la C.S.J.N. que "al descubrir un error en una sentencia, no puede obviarse su modificación so pena de incurrir con la omisión en falta grave, pues se estaría tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error, y los jueces no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva" (cfr. Fallos 313:1024; 311:103; 320:2343; entre otros).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51745

11.05.01

"BUSTOS, ROSARIO NELLY c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Ley 14.499. Ley 18.037, art. 53. Inconstitucionalidad. Confiscatoriedad. Porcentaje.

Cuando la sustitución del régimen de movilidad establecido por la ley 14.499 por el prescripto en la ley 18.037 se traduce en un descenso del nivel de los haberes del recurrente, que por su magnitud es irrazonable y confiscatorio, debe aplicarse la establecida por la referida ley 14.499 para reajustar el haber previsional en el período anterior al 01.04.91, conforme la doctrina del Alto Tribunal en los casos "Moreno Hueyo, Guillermo José" (sent. del 27.09.88) y "Gastañaga, Ricardo Ernesto" (sent. del 31.07.90), y reconocer la invalidez constitucional del art. 53 de la ley 18.037. Sin perjuicio de todo ello, el pago de las diferencias resultantes para el período indicado deberá adecuarse al porcentaje del 15% emergente del caso decidido por la C.S.J.N. en autos "Bieler de Caraballo, Nelly E. y otros c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos" -sent. del 21.12.00- (cfr. art. 19, ley 24.463).

C.F.S.S., Sala I

sent. 94050

17.08.01

"VAZQUEZ, OLINDA RENEE Y OTROS c/ A.N.Se.S."

(Ch.-M.-D.)

Período posterior al 01.04.95. Ley 24.463, art. 7, inc. 2). Caso "Heit Rupp".

Respecto a la movilidad del haber a partir del 01.04.95, deberá estarse a lo dispuesto por el art. 7, inc. 2) de la ley 24.463 (cfr. C.S.J.N., sent. del 16.09.99, "Heit Rupp, Clementina").

C.F.S.S., Sala I

sent. 94050

17.08.01

“VAZQUEZ, OLINDA RENEE Y OTROS c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, art. 16.

Lo dispuesto por el art. 16 de la ley 24.463 podrá ser objeto de consideración recién ante un eventual proceso de ejecución de sentencia (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.03.97, “Canónico, Mario”).

C.F.S.S., Sala I
sent. 94050
17.08.01

“VAZQUEZ, OLINDA RENEE Y OTROS c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Sentencia. Cumplimiento. Plazo. Ley 24.463, art. 22.

El mecanismo de cumplimiento de sentencias previsto en el art. 22 de la ley 24.463 resulta de aplicación a las retroactividades emergentes de los pronunciamientos sobre reajustes (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 02.12.98, “Arisa, Ángel Humberto”); pero de dicha doctrina se excluye el nuevo haber resultante del recálculo ordenado en la sentencia, el cual deberá comenzarse a pagar dentro de los 90 días de quedar firme el mismo. Ello así, teniendo en cuenta la edad del titular y el carácter alimentario del beneficio, cuya reducción puede insolventar o menguar sustancialmente el patrimonio del actor y de esta forma, hacer ilusorio el derecho que legalmente le corresponde.

C.F.S.S., Sala I
sent. 94050
17.08.01

“VÁZQUEZ, OLINDA RENEE Y OTROS c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Actualización. Desvalorización monetaria. Leyes 21.864 y 23.928.

Ordenado el reajuste del haber previsional, las sumas que pudieran resultar en favor del reclamante corresponde actualizarlas por desvalorización monetaria desde que cada una fue debida, y hasta el 31.03.91, de acuerdo al índice previsto por el art. 2 de la ley 21.864 y doctrina de la C.S.J.N. (cfr. Fallos 303:645, “Grassi, Fernando”; 304:1064, “Pepe, Juana Laura” y “Orallo, Claudio”, sent. del 24.12.83), como asimismo de este Tribunal en autos “Navarro, Luis Ramón c/ CNPPE Y SP”; C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 15.09.89). A partir de la fecha indicada serán de aplicación las disposiciones pertinentes de la ley 23.928.

C.F.S.S., Sala I
sent. 94050
17.08.01

“VÁZQUEZ, OLINDA RENEE Y OTROS c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Actualización. Intereses. Tasa aplicable.

Reajustado el haber previsional, los intereses se liquidarán desde que cada suma fue debida hasta el 31.03.91 a la tasa del 8% anual (conf. ley 23.928; art. 622 del Código Civil y doctrina de Fallos 303:645 y “Buezas, Tomás c/ I.M.P.S.”, sent. del 18.02.88). En lo sucesivo, se aplicará la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. art. 10, Dec. 941/91; C.S.J.N., “López, Antonio Miguel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.”, sent. del 10.06.92; “Banco Sudameris c/ Belcam S.A. y otro”, sent. del 17.05.94 y Fallos 303:1769, 311:1644, entre otros). Esto sin perjuicio de la aplicación en la etapa de ejecución de lo dispuesto por las leyes 23.982 y 24.130, según sea la situación del crédito.

C.F.S.S., Sala I
sent. 94050
17.08.01

“VÁZQUEZ, OLINDA RENTE Y OTROS c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Medida cautelar. Procedencia.

Encontrándose acreditados los requisitos que hacen viable su otorgamiento - verosimilitud del derecho y peligro en la demora-, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el accionante, a efectos de que el organismo le abone el 82% del haber (conforme el porcentaje previsto por la ley 22.955, que es el cuerpo normativo en base al cual obtuvo el beneficio previsional), hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión (en el caso, reajuste del haber previsional

en base al reencasillamiento dispuesto por el SINAPA mediante Res. 186/94).
(Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
C.F.S.S., Sala II
sent. int. 52012
27.06.01
"RODRÍGUEZ, OSVALDO c/ A.N.Se.S."
(E.-H.-F.)

Medida cautelar. Improcedencia.

La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.08.93, "Bulacio Malmierca, Juan Carlos c/ Bco. de la Nac. Argentina"; íd. sent. del 22.09.94, "Eco Service S.A. c/ Bs. Aires, Pcia. de"; íd. sent. del 25.06.96, "Pérez Cuesta S.A.C.I. c/ Estado Nacional"), correspondiendo al juzgador actuar con especial prudencia dado que la alteración del estado de derecho del peticionante resulta un anticipo del fallo formal de la causa, y en ese marco deben evitarse apresuramientos que, posteriormente, puedan afectar las arcas del Estado tornando ilusoria la posibilidad de un efectivo recupero de lo pagado sin causa. En consecuencia, debe rechazarse la medida cautelar peticionada por el accionante, tendiente a que se ordene al organismo abonar el 82% móvil hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión. Ello así, máxime si de las constancias de autos se desprende que aquél jamás percibió el haber en el porcentaje que reclama, por lo que el mantenimiento de la situación actual no puede configurar un daño de irreparables consecuencias. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 52012
27.06.01
"RODRÍGUEZ, OSVALDO c/ A.N.Se.S."
(E.-H.-F.)

Período del 01.04.91 al 31.03.95. Caso "Chocobar". Caso "González, Herminia".

La C.S.J.N., en el caso "González, Herminia del Carmen" (sent. del 21.03.00), ratificó el valor constitucional de las prescripciones del art. 19 de la ley 24.463 que atribuye a sus decisiones en materia previsional efecto vinculante; y si bien -reiterando una posición sustentada desde tiempo atrás (Fallos 262:101; 302:748; 304: 498 y 1459; 307:2124; 312:3201, entre otros)-, convalidó el accionar del Tribunal en cuanto había entendido que los extremos probados justificaban apartarse del precedente "Chocobar, Sixto Celestino" (sent. del 27.12.96), con relación al fondo de la cuestión rechazó en forma implícita la solución propiciada por los expertos consultados, en la que se había fundado la Sala para hacer lugar al reajuste a partir del 01.04.91, y dispuso la concreta aplicación de las pautas establecidas en el referido caso "Chocobar". En consecuencia, no existiendo en la causa en análisis ninguna "cuestión novedosa" ni motivo valedero que justifique un nuevo apartamiento a las directivas que sobre la movilidad de haberes estableciera el Tribunal Címero, y sin perjuicio que sobre el fondo se mantenga el mismo criterio expuesto al fallar el caso "González, Herminia del Carmen" (compatibilidad de las leyes 18.037 y 23.928 en torno a la movilidad de los haberes previsionales), corresponde aplicar en autos, por las razones expuestas, las directivas de la doctrina "Chocobar" durante el período comprendido entre el 01.04.91 y el 31.03.95. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II
sent. 83362
25.06.01
"PEREYRA, BALTAZAR c/ A.N.Se.S."
(H.-F.-E.)

Período del 01.04.91 al 31.03.95. Caso "Chocobar". Caso "González, Herminia".

La C.S.J.N., en la causa "González, Herminia del Carmen" (sent. del 21.03.00), reafirmó, por el voto de la mayoría, aplicar la decisión habida en los autos "Chocobar, Sixto Celestino" (sent. del 27.12.96) para determinar la movilidad por el período que va desde el 01.04.91 al 31.03.95. Sin perjuicio de ello, el Alto Tribunal reconoció la potestad de los jueces de apreciar con criterio propio las sentencias de la Corte y apartarse de ellas cuando medien motivos valederos. Precisamente, en ese entendimiento se gestó el fallo que la Sala dictó en los autos de referencia, como consecuencia mediata de una realidad constatada mediante elementos probatorios ajustados al particular objeto a desentrañar, producidos

con fundamento y rigor científico, sobre el sistema de movilidad a regir en el período mencionado, con norte, siempre, en el art. 14 bis de la C.N. Por tanto, sin abrigar otra finalidad que aplicar bien el derecho según el saber y entender del sentenciante, debe considerarse ajustado reiterar en autos el criterio que se sostuvo en la mencionada sentencia “González, Herminia del Carmen” y, en consecuencia, aplicarse la movilidad implementada por el art. 53 de la ley 18.037 hasta la entrada en vigencia de la ley 24.241. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83362

25.06.01

“PEREYRA, BALTAZAR c/ A.N.Se.S.”

(H.-F.-E.)

Período posterior al 01.04.91. Caso “Chocobar”.

Sin perjuicio de dejar a salvo el criterio en torno al carácter sustitutivo y la adecuada proporcionalidad de los haberes previsionales, la mecánica a seguir para corregir su determinación inicial, la confiscatoriedad del tope legal y la subsistencia y alcances del derecho a su movilidad -aun para períodos posteriores al 01.04.91- extensamente expuesto en la sent. N° 40090/93, en autos “Chocobar, Sixto C.” y sus citas (por reiteración de lo ya dicho en fallos 10065/91 y 10047/91, correspondientes a los casos “Sortino, Sebastián” y “Cóceres de Sardón, María”, publicados en D.T. 1991-B, págs. 1723/28 y 2296/99, respectivamente), evidentes razones de celeridad y economía procesal indican la conveniencia de ajustar la decisión por adoptar a la doctrina sentada por la mayoría del Alto Tribunal en la sentencia dictada el 27.12.96 en el antes mencionado caso “Chocobar”, habida cuenta que igual criterio fue reiterado en decenas de miles de expedientes por aquél, como así también que la parte actora no aportó argumento alguno que permita arribar a conclusiones diversas a las de dicho fallo. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Período posterior al 01.04.95. Caso “Heit Rupp”.

En lo que hace a los haberes devengados a partir del 01.04.95, y sin perjuicio de dejar a salvo la opinión personal (cfr. entre otros, C.F.S.S., Sala III, sent. del 23.06.98, “Tulli, Tarcisio Higinio” y “Romero, Carlos”, en concordancia con C.F.S.S., Sala I, sent. del 01.10.97, “Tumini, José Rafael”), corresponde hacer aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. a partir de su pronunciamiento del 16.09.99 en la causa “Heit Rupp, Clementina”. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

La postergación del tratamiento de la defensa de limitación de recursos para la etapa de ejecución se ajusta a derecho, habida cuenta que dicha defensa no constituye excepción alguna -menos aún de previo y especial pronunciamiento- que tenga incidencia en la etapa de conocimiento, ni que pueda influir en el dictado de la sentencia, quedando reservado su tratamiento para la etapa de ejecución del fallo a dictar, en el caso que se reconozca el derecho al reajuste de haberes pretendido (cfr. C.F.S.S., Sala III, “Guiteff, Ángel”; id. “Luján, Juan Anibal”, ambas del 26.09.97). La vía del absurdo permite demostrar el acierto de dicha postura, por cuanto obvias razones de celeridad y economía procesal sugieren la conveniencia de no realizar actuación alguna en torno a esa defensa hasta tanto no exista una condena que obligue a la A.N.Se.S. a abonar diferencias de haberes a favor de la parte actora. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

La indefinición legal sobre la naturaleza jurídica y alcances de la defensa de limitación de recursos, lejos de haber pasado por desapercibida a los legisladores, fue deliberadamente propuesta para ampliar el marco de actuación judicial (cfr. versión taquigráfica del debate parlamentario, sesión del 15.02.95, págs. A85vta. y siguientes). El diputado Durañona y Vedia, respondiendo a quienes atacaban su postura, sostuvo que "... para nada significa detener el curso del proceso ni cambiar el curso de la sentencia. Después de la toma de razón de las distintas demandas (que hubieren de prosperar, debería agregarse), se sabrá cuales son las que deben ser atendidas con recursos específicos que cada año establecerá el Congreso de acuerdo al art. 18 ... Por lo tanto -y esto es bueno que se aclare para la interpretación de los jueces- no se trata de una excepción ni de un previo al pronunciamiento, no modifica el contenido esencial que va a tener el fallo ...". En consecuencia, sin que ello importe abrir juicio alguno sobre su validez, corresponde confirmar el diferimiento de la defensa de limitación de recursos para su tratamiento en la etapa procesal oportuna. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

"GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

La defensa de limitación de recursos que dispone el art. 16 de la ley 24.463 no constituye una excepción en los términos estrictamente procesales, en tanto no ha sido expresamente designada como tal, y menos tiene el carácter de previo y de especial pronunciamiento, dados los efectos de estas últimas que, en la práctica, se traduciría en el rechazo de las pretensiones de los actores teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 354, inc. 2, del C.P.C.C. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

"GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

La figura legislada como "defensa" por el art. 16 de la ley 24.463 debe entenderse como una facultad que se otorga al Estado Nacional con el fin de que el mismo, en atención al estado de las finanzas públicas, pueda demorar el pago de la eventual condena en su contra, precisamente a raíz de la posible carencia de fondos -acreditada mediante dictamen de la Auditoría General de la Nación- y prever distintos medios, dilatados en el tiempo, para hacer frente a los créditos en su contra, como ha hecho hasta el momento (por ejemplo, pago en cuotas, o con Bonos, etc.). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

"GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

La disposición del art. 16 de la ley 24.463 no constituye una excepción de fondo, ni siquiera dilatoria (cualquiera sea la motivación de cada una de ellas que reconocen distintas finalidades), por lo que no tiene sentido que se oponga como tal en la etapa de conocimiento ante el reclamo formulado, por lo que la decisión de considerar que la misma no es oponible -en ese estadio procesal- al acreedor, se ajusta a derecho. En su oportunidad, el deudor (A.N.Se.S.) ante la imposibilidad de satisfacer el pago con los recursos ordinarios de que dispone deberá hacer aplicación del art. 22 de la ley 24.463, y comunicarle al acreedor, así como al juez interviniente, la dificultad sobreviniente y la fecha probable de la cancelación del crédito (cfr. Vázquez Vialard, "La 'defensa' de 'la limitación de recursos' para atender el mayor gasto provocado por la sentencia, en el proceso judicial de la Seguridad Social"). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. 81248
23.11.01
“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”
(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

Teniendo en cuenta los efectos de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, corresponde considerar a la “defensa de falta de recursos” (art. 16, ley 24.463) como un argumento defensivo de fondo, con la particularidad que atento la materia de que se trata y la posibilidad cierta que las probanzas aportadas por las partes el reclamo pueda o no prosperar y que aún en caso afirmativo el monto resulta indeterminado generalmente al iniciarse la demanda, etc., resulta razonable que el Estado pueda oponerla en cualquier estadio procesal, porque se trata de una facultad que le otorga la ley, que tuvo en cuenta la cantidad de juicios por reajustes, recálculo del haber inicial, etc. Si lo hubiera hecho al contestar la demanda, lo atinado es posponer su análisis a la etapa de ejecución del fallo, si es que se reconoció al actor el derecho al reajuste de haberes pretendido. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. 81248
23.11.01
“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”
(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

Recién en la etapa de ejecución -luego de practicada la liquidación- podrá verificarse con certeza la falta de recursos. Tan es así, que en la práctica se vienen efectuando los pagos de las sentencias en virtud de un orden de prelación derivado de la fecha de notificación de aquellas, con la excepción de los casos de mayores de 80 años (en tal sentido debe tenerse en cuenta las leyes anuales de presupuesto 25.237 -2000-, 24.401 -2001-, de emergencia 25.344 y su Dec. Reg. 1116/00 y la Res. 1061/01 de A.N.Se.S.). Esto revela que el Estado mantiene su voluntad de pago, lo que sería contradictorio sin un alcance restrictivo del art. 16 de la ley 24.463. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. 81248
23.11.01
“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”
(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

Si se admitiese una interpretación que asimilase “defensa de falta de recursos” a una excepción de previo y especial pronunciamiento, el 100% de los reclamos por reajuste del haber previsional deberían ser desechados de plano de mediar la presentación de la “defensa”. Ello no haría sino consagrar una doble ventaja para el Estado Nacional, pues en un supuesto pagaría en la medida de sus posibilidades en un plazo incierto, y en el otro directamente desaparecería su deuda “in totum”, efecto que no se compadece con las garantías constitucionales en juego y la propia denominación de la ley como de “solidaridad previsional”. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III
sent. 81248
23.11.01
“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”
(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

No sólo -en lo práctico- es dable observar el error que significaría intercalar la falta de recursos en otra etapa del proceso que no fuera la ejecución forzosa de sentencia, al carecer de suma líquida y exigible. Desde un ángulo más teórico, cabría plantearse para qué se consagra legislativamente un proceso -con actor y demandado- para que quede virtualmente “muerto al nacer” por el nocivo efecto de la defensa de falta de recursos (cfr. Walter Carnota, “Los escenarios procesales de la defensa de falta de recursos” -comentario al caso “Soto, Luis c/ A.N.Se.S.” del registro de la Sala III de la C.F.S.S.-, TySS 2000-443). (Del voto

de la mayoría, argumento del Dr. Poclava Lafuente. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, art. 16. Alcances.

Más allá de la incertidumbre de algunos legisladores acerca del alcance que había de darse a la defensa prevista por el art. 16 de la ley 24.463, el mismo ha de ser develado por el juzgador, atendiendo a la economía del proceso previsional que la referida ley instaura. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, art. 16. Alcances.

La acción por la cual el actor persigue el reajuste de la movilidad del haber fijado en sede administrativa no puede ser correctamente juzgada sin considerar el estado actual de la economía, muy diferente al que, durante décadas, determinó las pautas jurisprudenciales que tradicionalmente se aplicaron en la materia. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, art. 16. Excepción. Momento operativo.

A fin de dilucidar el momento de la relación procesal en que el art. 16 de la ley 24.463 se torna operativo, ninguna duda cabe de que nos hallamos, desde el punto de vista de la técnica procesal, frente a una excepción. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Ley 24.463, art. 16. Procedencia. Etapa de conocimiento.

La excepción contemplada por el art. 16 de la ley 24.463 permite al ente previsional plantear la limitación de recursos del Régimen de Reparto, siendo éste un aspecto que, necesariamente, ha de dilucidarse en la etapa de conocimiento, toda vez que constituye un elemento imprescindible para evaluar la validez constitucional de las normas en base a las cuales el organismo administrativo efectuó los cálculos para determinar el haber y cuya validez cuestiona el actor. Al respecto, la C.S.J.N. ha sostenido que “cuando la ley previsional establece requisitos y condiciones para la obtención de los beneficios, no sólo regula el derecho de los eventuales beneficiarios, sino también el fondo con que los satisface” (Fallos 219:342); debiendo los jueces, al decidir cuestiones relativas a reajustes de jubilaciones y pensiones “ponderar las posibilidades financieras de los entes previsionales” (Fallos 312:1706; 305:2083; 306:1155). (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 81248

23.11.01

“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-P.L.)

Limitación de recursos. Diferimiento. Etapa de ejecución.

La excepción de limitación de recursos (art. 16, ley 24.463) se trata de una defensa en la cual el demandado alega una circunstancia extintiva relacionada con el fundamento de la pretensión del actor, y que en la medida en que ella sea probada, quedaría en claro la validez jurídica de las normas legales atacadas y, consiguientemente, la inexistencia del derecho en el cual el demandante fundamenta su pretensión. Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto la sentencia que di-

firió el tratamiento de la defensa prevista por el referido art. 16 de la ley 24.463 (Disidencia del Dr. Laclau).
C.F.S.S., Sala III
sent. 81248
23.11.01
“GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO c/ A.N.Se.S.”
(L.-F.-P.L.)

Procedencia. Reconstrucción del expediente administrativo. Incumplimiento del organismo administrativo.

Frente a la desidia del organismo en cumplir con la orden del Tribunal (reconstrucción del expediente administrativo), tratándose de un recurso que lleva 10 años de trámite sin haber sido resuelto y de un pedido de reajuste del haber realizado hace 14 años -ante el cual el organismo en resolución desestimatoria estableció expresamente el régimen aplicable al actor, que éste ratificó en su memorial-, no cabe otra solución que declarar el derecho del titular al reajuste de su haber de pasividad, en consonancia con la naturaleza alimentaria de la pretensión deducida y las garantías del debido proceso, defensa en juicio y propiedad, tuteladas por los arts. 17 y 18 de la C.N. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Herrero. El Dr. Fernández votó en disidencia).
C.F.S.S., Sala II
sent. 83597
12.07.01
“POMPONIO, MIGUEL MODESTO c/ A.N.Se.S.”
(E.-F.-H.)

Improcedencia. Reconstrucción del expediente administrativo. Incumplimiento del organismo administrativo.

Ante el incumplimiento del organismo de reconstruir el expediente administrativo -conforme lo ordenado por el Tribunal-, debe concluirse que no se está en condiciones de resolver los actuados sin previamente definirse la situación previsional del titular, para lo cual no sólo habrá de contarse con la constancia de la resolución que acordó el beneficio (con indicación de la documentación y legislación tenida en mira), sino también de las certificaciones de servicios y remuneraciones que permitan la correcta realización de los cálculos correspondientes. (Disidencia del Dr. Fernández).
C.F.S.S., Sala II
sent. 83597
12.07.01
“POMPONIO, MIGUEL MODESTO c/ A.N.Se.S.”
(E.-F.-H.)

Régimen aplicable. Sentencia. Congruencia. Nulidad.

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia -y de todo lo actuado en su consecuencia- cuando la misma ha soslayado el deber de congruencia del que deben gozar las decisiones judiciales. Al respecto, el art. 34, inc. 4) del C.P.C.C. establece que debe existir correspondencia en la sentencia y el objeto de la demanda, mientras que el art. 163, inc. 6) del mismo ordenamiento, especifica que las sentencias definitivas de primera instancia deberán contener “la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio...” (en el caso, la titular, ante la denegatoria del reajuste de su haber de pensión obtenido al amparo de la ley 24.241, inició demanda sumaria impugnando de inconstitucionalidad el sistema de determinación y actualización del haber -Res. 918/94 de A.N.Se.S. y ley 24.463-, y la magistrada “a quo” hizo lugar a la demanda, rechazando el planteo respecto a los arts. 49 y 53 de la ley 18.037, ordenando la redeterminación del haber inicial siguiendo el criterio sustentado por la Sala I de la C.F.S.S. en el caso “Rúa, Ángel Héctor”, y otorgando la movilidad conforme el criterio fijado por la C.S.J.N. en el fallo “Chocobar” y lo normado por el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463).
C.F.S.S., Sala I
sent. int. 52200
17.08.01
“WEINBERG, CECILIA TERESA c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Resoluciones de la A.N.Se.S. Intervención del Ministerio Público. Ley 24.946. Res. M.P. 130/00, apartado 2).

Conforme el planteo efectuado por la Sra. Fiscal General al advertir que de la lec-

tura de las actuaciones no surge que se haya dado intervención al Ministerio Público actuante ante la anterior instancia, entre cuyas funciones se encuentra la de “velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal”, conforme arts. 25 inc. h) y 39 de la ley 24.946 y art. 6 inc. c) de la ley 24.655 que le da el carácter de parte necesaria en la tramitación de las causas de la seguridad social, como asimismo que mediante Resolución M.P. n° 130/00, apartado 2), se encomendó instruir a los Señores Fiscales con asiento en las provincias a fin de que asuman la intervención que por norma le corresponde en las impugnaciones deducidas contra las resoluciones de la A.N.Se.S.; corresponde remitir las actuaciones a la anterior instancia a fin de que se le otorgue intervención al Fiscal de lo tramitado en el proceso, notificándole de todo lo actuado.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 52159

19.07.01

“GARCÍA, EMILIO c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-D.-M.)

Sentencia. Plazo. Ley 24.463, arts. 22 y 23. Inconstitucionalidad. Ley 25.344.

El Tribunal se ha expedido respecto a la inconstitucionalidad de los arts. 22 y 23 de la ley 24.463 (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 26.02.99, “Fernández, Vicente”). Sin embargo, no puede desconocerse que el dictado de normas presupuestarias posteriores, y en especial la ley 25.344 que determina un procedimiento específico para el cumplimiento de obligaciones previsionales, no es obstáculo a la fijación de un plazo a partir del cual se de cumplimiento a la sentencia, ya que ello constituye una exigencia de substancia ineludible (art. 163, inc. 7 del C.P.C.C.), que satisface el criterio de certeza jurídica que la conclusión de la controversia impone. Por ello, corresponde ratificar el plazo fijado en la sentencia de grado como punto de partida al cumplimiento de las obligaciones previsionales con arreglo a la ley 25.344 (en el caso, la magistrada, para la determinación del haber inicial, tomó como pauta el importe resultante de la pericia, considerándolo como punto de partida para la movilidad).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83452

28.06.01

“GARCÍA LIONSO, MARTIN c/ A.N.Se.S.”

(F.-E.-H.)

Sentencia. Plazo. Ley 25.344.

Si el plazo fijado por el “a quo” para el cumplimiento de la sentencia es superior al de 90 días contemplado en el art. 22 de la ley 24.463, debe desestimarse el agravio del organismo por no encontrarse la causa debidamente fundada. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 25.344 y su Dec. Reg. 1116/00.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94342

31.08.01

“GUTIÉRREZ DE CHIARELLA, JUANA VALENTINA c/ A.N.Se.S.”

(M.-Ch.-D.)

Prescripción. Ley 18.037, art. 82. Caso “Jaroslavsky”.

El art. 82 de la ley 18.037 no ha sido modificado expresamente por la ley 24.463, ni podría entenderse que lo ha sido tácitamente por cuanto la normativa del Código Civil sobre prescripción liberatoria sólo puede ser aplicada en la materia en cuanto no contradiga los principios esenciales de la Seguridad Social, y en la medida que resulte compatible con sus características procesales, que incluyen tutela jurisdiccional administrativa y judicial. En ese sentido se ha mantenido invariable la jurisprudencia de la C.S.J.N. (cfr. “Jaroslavsky, Bernardo”, sent. del 26.02.85; Fallos 301:865; 304:289; 310:2143 y C.F.S.S. ; Sala I, sent. del 20.05.99, “Musto, Rubén N. c/ Caja de Ret., Jub. y Pens. de la Pol. Federal”).

C.F.S.S., Sala I

sent. 94342

31.08.01

“GUTIÉRREZ DE CHIARELLA, JUANA VALENTINA c/ A.N.Se.S.”

(M.-Ch.-D.)

Sumas retroactivas. Procedimiento. Ley 24.463, art. 22. Ley 25.344. Dec. 1116/00.

Reconocido el derecho al reajuste, corresponde ordenar al organismo que el nuevo haber que se determine se abone dentro del plazo de 90 días, sin perjuicio

de la aplicación del procedimiento establecido en el art. 22 de la ley 24.463 respecto de las sumas retroactivas que emerjan de las liquidaciones practicadas, todo ello teniendo en cuenta lo normado por la ley 25.344 y su Dec. Reg. 1116/00.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92554

11.05.01

“FRANCO, MARÍA ELENA c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.-D.)

Topes. Art. 55 ley 18.037. Planteo de inconstitucionalidad. Liquidación.

Conforme lo ha sostenido la C.S.J.N., resultan razonables los topes máximos establecidos en el art. 55 de la ley 18.037, en la medida que su aplicación no implique una merma en el haber previsional que, por su magnitud, sea confiscatorio (cfr. sent. del 25.09.97, Del Azar Suaya, Abraham). De allí que sólo procederá la tacha de inconstitucionalidad cuando se demuestre que la aplicación del tope legal importe una disminución irrazonable del haber de pasividad en relación al nivel de vida del titular, medido en función de la pauta legal contemplada en la ley mediante la cual se obtuvo el beneficio. En consecuencia, no habiéndose practicado la liquidación por el juez de grado, resulta prematuro expedirse en torno a la constitucionalidad del tope.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83124

21.05.01

“MAZZOTTA, GUILLERMO c/ A.N.Se.S.”

(F.-E.-H.)

REDUCCIÓN DEL HABER

Acción de amparo. Ley 16.986, art. 2, inc. e).

De conformidad con lo establecido por el art. 2, inc. e) de la ley 16.986, la acción de amparo no será admisible cuando hubiere sido presentada fuera de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. El carácter excepcional del remedio intentado hace que el plazo indicado deba computarse a partir de la fecha del primer acto cuya modificación se pretende y no, como otros entienden, a partir de cada pago. (Del voto del Dr. Fasciolo).

C.F.S.S., Sala III

sent. 71976

31.05.01

“GIANIORIO, MARTA c/ A.N.Se.S.”

(L.-F.-M.A.)

Decretos 438/00 y 108/01. Medida cautelar. Cuestión abstracta.

Por imperio del art. 1 del Dec. 108/01, dictado en función de lo dispuesto por el art. 99, inc. 3º de la C.N., se sustituyó el art. 8 del Dec. 438/00, desprendiéndose de la lectura del nuevo texto que quedó indeterminada la fecha a partir de la cual habrá de practicarse la reducción de haberes (ver. inc. d) del citado art. 1. En tales condiciones, y ante la ausencia de otros elementos de juicio, corresponde concluir que se ha tornado abstracta la medida cautelar solicitada, por la que se pretendía que el Estado Nacional se abstuviera de aplicar las disposiciones del referido Dec. 438/00 con relación a los haberes jubilatorios del titular. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 77866

31.05.01

“FERNÁNDEZ SIERRA, JOSÉ NOLDO c/ A.N.Se.S.”

(M.A.-F.-L.)

Decretos 438/00 y 108/01. Medida cautelar. Cuestión abstracta.

La solicitud de una medida cautelar innovativa reviste un carácter excepcional, y su admisión ha de juzgarse con criterio restrictivo, toda vez que en caso de hacerse lugar al mismo nos enfrentaríamos a un anticipo de jurisdicción favorable respecto al fallo final de la causa, con lo cual se lesionaría el derecho de defensa en juicio que asiste a la demandada. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 77866

31.05.01

“FERNÁNDEZ SIERRA, JOSÉ NOLDO c/ A.N.Se.S.”

(M.A.-F.-L.)

REGÍMENES ESPECIALES

Ley 24.019. Prescripción. Conducta negligente de la administración. Inaplicabilidad del art. 82 de la ley 18.037.

Decidir en contra de los intereses de la clase pasiva cuando la falta de percepción de sus créditos responde a la conducta negligente de la administración, llevaría al desconocimiento de la norma constitucional que impone otorgar y asegurar “los beneficios de la Seguridad Social con carácter integral e irrenunciable” (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.11.88, “Mac Kay Zernick, Sergio”). Ello así, la pretensión del organismo de que se aplique lo dispuesto por el art. 82 de la ley 18.037 -vigente según el art. 168 de la ley 24.241- respecto de sumas que ha retenido en su poder mediante las llamadas “vías de hecho” (en el caso, haber continuado abonando el 70% del haber de actividad pese a encontrarse vencido el plazo previsto por el art. 4 de la ley 24.019), deviene improcedente. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83582

12.07.01

“PRESTA, ELSA ZULEMA Y OTROS c/ A.N.Se.S.”

(F.-H.-E.)

Ley 24.019. Sentencia. Plazo. Diferimiento. Improcedencia.

Si las diferencias retroactivas generadas a favor de los titulares tuvieron su origen en una conducta “contra legem” del organismo administrativo, ya que vencido el plazo de excepción establecido por el art. 4 de la ley 24.019 no restableció el 82% que correspondía abonar en virtud de la normativa por la que se concedieron las prestaciones jubilatorias, no podrá pretender luego que se ampare ese obrar ilegítimo mediante el diferimiento del pago de las sumas adeudadas -de eminente carácter alimentario-, so riesgo de incurrir en abierta contradicción, y acentuar aún más el daño a que se vieron sometidos los beneficiarios al ver menguado sus haberes de pasividad. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83582

12.07.01

“PRESTA, ELSA ZULEMA Y OTROS c/ A.N.Se.S.”

(F.-H.-E.)

Ley 24.019. Prescripción. Aplicación del art. 82 de la ley 18.037.

Reconocido el derecho de los actores a que se le liquiden los haberes de pasividad conforme con la ley vigente al momento de obtener el beneficio -y no el 70% contemplado en el art. 4 de la ley 24.019 como lo hizo el organismo pese a encontrarse vencido el plazo previsto en la norma referida-, debe concluirse que se ajusta a derecho lo decidido por el “a quo” que aplicó la prescripción bienal contemplada por los arts. 82 de la ley 18.037 y 168 de la ley 24.241. Ello así, porque la acción procesal entablada (en el caso, acción de amparo) no empece a la aplicación de las normas de fondo. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83582

12.07.01

“PRESTA, ELSA ZULEMA Y OTROS c/ A.N.Se.S.”

(F.-H.-E.)

Ley 24.019. Sentencia. Plazo. Leyes presupuestarias. Ley 11.672.

No cabe reproche a la decisión del magistrado que fijó el plazo de cumplimiento de la sentencia dando estricto acatamiento a una exigencia de substancia ineludible (art. 163, inc. 7 del C.P.C.C.), criterio de certeza jurídica que la conclusión de la controversia impone. La ley complementaria de presupuesto determina un curso de acción futura a que se sujeta el Estado para cancelar su deuda. En consecuencia, el término fijado en la decisión de grado deberá tomarse como punto de partida para el cumplimiento de lo ordenado, con arreglo a las leyes presupuestarias. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83582

12.07.01

“PRESTA, ELSA ZULEMA Y OTROS c/ A.N.Se.S.”
(F.-H.-E.)

Reajuste. Personal de la ex Junta Nacional de Carnes.

Habiéndose desempeñado la titular en la ex Junta Nacional de Carnes, corresponde declarar que, a los fines del art. 160 de la ley 24.241, se encuentra encuadrada en el escalafón del Personal Civil de la Nación, en los términos del Dec. 4106 del 28.12.84.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94272

21.08.01

“ESTRADA DE FRIAS BUNGE, CELIA c/ A.N.Se.S.”
(D.-Ch.-M.)

Reducción del haber. Diferencias indebidamente descontadas. Ley 24.019.

Corresponde confirmar lo decidido por el “a quo” que condenó a la accionada a adecuar el importe del beneficio previsional –jubilación ordinaria- a las disposiciones de la ley por la que se acordó la prestación (en el caso, ley 22.955) y a abonar las diferencias indebidamente descontadas en base al art. 4 de la ley 24.019 más allá de su vigencia, conforme el criterio sustentado por la C.F.S.S. en casos análogos (cfr. entre otros, Sala I, sent. del 30.06.99, “Eggimann, Olga Bety y otros”; íd. sent. del 27.12.99, “González, Mario Rubén”), en concordancia con el temperamento adoptado por la C.S.J.N. en los casos “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros” y “Unamuno, Miguel”, ambos del 24.03.00. Dicha solución se compadece, por otra parte, con el criterio sentado por la mayoría del Alto Tribunal en el considerando 32 del fallo “Chocobar, Sixto Celestino” (21.12.96), acerca de la vigencia del derecho a la movilidad de los beneficios otorgados por regímenes especiales.

C.F.S.S., Sala III

Sent. 78983

16.07.01

“PRADO, CARLOS EDUARDO c/ A.N.Se.S.”
(F.-M.A.-L.)

Reducción del haber. Diferencias indebidamente descontadas. Pago. Ley 11.672, art. 68.

Reconocido el derecho del accionante a percibir las diferencias indebidamente descontadas en base al art. 4 de la ley 24.019 más allá de su vigencia, para el pago de los retroactivos corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 68 de la ley 11.672 (t.o. 1999), quedando intimado el organismo para que dentro del término de 15 días de devueltas las actuaciones al juzgado de origen luego de quedar firme la sentencia del Tribunal, acredite bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 239, 248 y 249 del Código Penal, la realización de los trámites imprescindibles ante las autoridades competentes para la incorporación en el ejercicio financiero correspondiente, las partidas necesarias para satisfacer el crédito del actor. Ello, claro está, solo para las diferencias surgidas a partir del 01.01.2000, por cuanto para las devengadas con anterioridad a esa fecha habrá de estarse al art. 23 y concordantes de la ley 25.344.

C.F.S.S., Sala III

sent. 78983

16.07.01

“PRADO, CARLOS EDUARDO c/ A.N.Se.S.”
(F.-M.A.-L.)

Reducción del haber. Diferencias indebidamente descontadas. Pago. Prescripción.

Corresponde hacer lugar a la aplicación del art. 82 de la ley 18.037 y tener por prescriptos los créditos reconocidos al peticionante por diferencias indebidamente descontadas en base al art. 4 de la ley 24.019 anteriores a los dos años de la fecha en que fue iniciada la acción.

C.F.S.S., Sala III

sent. 78983

16.07.01

“PRADO, CARLOS EDUARDO c/ A.N.Se.S.”
(F.-M.A.-L.)

TOPES

Ley 18.037, art. 55. Caso “Chocobar”. Cuestión de puro derecho. Improcedencia.
La C.S.J.N. en los autos “Chocobar” señaló, respecto de la aplicación de los to-
pes previstos en el art. 55 de la ley 18.037, que “para llegar a establecer la solu-
ción que corresponda al caso concreto, es preciso determinar si en las circuns-
tancias de la respectiva causa aparece o no quebrada la regla de la razonable
proporcionalidad”. Es decir que el más Alto Tribunal de la Nación consideró indis-
pensable la etapa probatoria para resolver la cuestión. Por ello, y sin perjuicio de
las facultades del “a quo” para evaluar la procedencia de las pruebas ofrecidas
por las partes, debe concluirse que la declaración de la cuestión como de “puro
derecho” atenta contra la garantía de defensa en juicio cuando existe controver-
sia entre los hechos alegados por las mismas, y éstas resulten conducentes a la
decisión del juicio.
C.F.S.S., Sala II
sent. int. 52178
23.08.01
“AMIL, JORGE c/ A.N.Se.S.”
(F.-H.-E.)

JUBILACIÓN DE MINUSVÁLIDOS

Pensión no contributiva. Desempeño de tareas remuneradas. Protección integral
de los discapacitados.

Las facultades de la Comisión de Pensiones Asistenciales de verificar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos por la normativa para el goce de pensiones no
contributivas, no pueden ejercerse con prescindencia del debido proceso adjetivo
que salvaguarda el art. 1, inc. f) de la ley 19.549. Así, no sólo carece de validez el
acto de suspensión llevado a cabo sin la previa participación de los interesados,
sino que deviene irrazonable la pretensión de aquélla de que se mantenga el
mismo hasta tanto pueda conocer y evaluar las características de las tareas
desarrolladas por los titulares y si éstas implicarán o no la caducidad del mante-
nimiento del beneficio. Por el contrario, una medida de tal magnitud sólo puede
tomarse luego de haber brindado a los afectados la posibilidad de defensa y ale-
gato, y estando los hechos en que se funda “fehacientemente probados”.

C.F.S.S., Sala II
sent. 83367
25.06.01
“FELMAN, ANDREA GABRIELA Y OTROS c/ Estado Nacional - Secretaría de
Desarrollo Social - Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales”
(H.-F.-E.)

Pensión no contributiva. Desempeño de tareas remuneradas. Protección integral
de los discapacitados.

La Comisión de Pensiones Asistenciales contraviene sin razón el presupuesto re-
lativo a la “imposibilidad para trabajar” contemplado por el art. 9 de la ley 13.478
(modificado por ley 20.267), cuando no se advierte que las condiciones que origi-
nariamente dieron lugar al otorgamiento del beneficio hayan variado, ya que no
se ha probado que las incapacidades que padecen los accionantes (algunos de
ellos dementes o inhabilitados judicialmente, y los demás con certificado de dis-
capacidad otorgado por la autoridad competente de acuerdo con la normativa
que rige la materia) haya disminuido en forma alguna. Ello así, máxime cuando
de los informes obrantes en autos se desprende que las tareas que desempeñan
son adecuadas a los caracteres de cada uno de los jóvenes, y sólo pueden lle-
varse a cabo durante unas pocas horas semanales mediante un proceso que in-
cluye el seguimiento de los progresos y entrenamientos que, lejos de involucrar
un fin económico, procura favorecer el desarrollo de las facultades del individuo
con discapacidad mental, e incentivar su inserción en la comunidad en que vive.

C.F.S.S., Sala II
sent. 83367
25.06.01
“FELMAN, ANDREA GABRIELA Y OTROS c/ Estado Nacional - Secretaría de
Desarrollo Social - Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales”
(H.-F.-E.)

Pensión no contributiva. Desempeño de tareas remuneradas. Protección integral

de los discapacitados.

La suspensión de las prestaciones no contributivas decidida por la Comisión de Pensiones no Contributivas (en el caso, debido a la detección de ingresos de aportes a favor de los beneficiarios, lo que evidenciaría el desarrollo de tareas incompatibles con el goce de aquéllas), altera gravemente el programa terapéutico emprendido por los actores y contrasta con los objetivos propiciados por la ley 22.431 de protección integral de los discapacitados, dirigido fundamentalmente a concederles franquicias y estímulos que les permitan neutralizar las desventajas que su situación física les provoca, a la vez de otorgarles oportunidades para que puedan desempeñar un rol equivalente al que ejerce el resto de los sujetos (art. 1, ley referida). Además, atendiendo al monto ínfimo del salario que perciben los peticionarios en virtud de los servicios que prestan (entre \$ 60.- y \$ 186.-), así como de la pensión no contributiva cuyo restablecimiento reclaman (\$ 101,85), lleva a concluir que la sumatoria de ambos resulta aún insuficiente para atender las mínimas necesidades vitales.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83367

25.06.01

“FELMAN, ANDREA GABRIELA Y OTROS c/ Estado Nacional - Secretaría de Desarrollo Social - Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales”
(H.-F.-E.)

JUBILACIÓN ORDINARIA

Denegación. Deuda por aportes. Imposibilidad económica. Prueba.

El hecho de no haber cancelado la deuda admitida como válida, ni alegado y probado imposibilidad económica para afrontar la circunstancia que, por vía de hipótesis, hubiera tornado operativa la doctrina del caso “Rei Rosa” (Fallos 308:1687); y tampoco haber interpuesto en primera instancia tacha de inconstitucionalidad contra los decretos sobre cuya base se ha determinado la existencia de la deuda no cancelada, obsta al análisis del tema por parte de la alzada. Lo contrario implicaría la violación de los principios de congruencia y doble instancia judicial (arts. 36 y 277 del C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83303

14.06.01

“ARRIOLA, ROSALIA DOLORES c/ A.N.Se.S.”
(E.-H.-F.)

Denegación. Falta de aportes. Prueba. Intimación al empleador. Telegrama.

El telegrama por el que se intima al empleador para que expida la pertinente certificación de servicios no resulta un elemento de prueba hábil para acreditar el efectivo ingreso de los aportes al sistema previsional. Ello así, porque el mismo no constituye una denuncia por aportes omitidos, tal como lo requiere el art. 25 de la ley 18.037.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83031

11.05.01

“ZUGUEB, JORGE c/ A.N.Se.S.”
(F.-E.-H.)

Otorgamiento del beneficio. Medida cautelar. Haber mínimo. Procedencia.

Se ajusta a derecho lo decidido por el “a quo” que, previo conceder la jubilación ordinaria, hizo lugar a la medida cautelar solicitada, obligando al organismo a otorgar un haber mínimo de jubilación ordinaria a la actora -previa caución juratoria- hasta tanto adquiera firmeza la sentencia, por encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el art. 230 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala III

sent. 79058

19.07.01

“BUTTI, BEATRIZ LUCILA c/ A.N.Se.S.”
(F.-L.-M.A.)

JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA

Acumulación con un beneficio de pensión. Improcedencia.

El correcto alcance que corresponde asignar a las normas que consagran beneficios excepcionales, como la jubilación por edad avanzada, no se aviene con las reglas amplias de interpretación establecidas respecto de los sistemas jubilatorios comunes o normales, pues median obvias razones de justicia que impiden evaluar ambos regímenes con las mismas pautas, resultando adecuado dilucidar la cuestión con un criterio crítico (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.06.82, "Franquelo, Francisco"; C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 17.06.82, "Sarru Posadas, Eleodora Francisca").

C.F.S.S., Sala I

sent. 92500

11.05.01

"ORTÍZ, ROSALVA ISIDORA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

Acumulación con un beneficio de pensión. Improcedencia.

La exigencia de optar entre un beneficio y otro no priva de un derecho adquirido, sino que establece la condición de que la peticionaria elija libremente la prestación que estima más beneficiosa (Fallos 382:299). Asimismo, el Alto Tribunal se ha pronunciado en autos "Pérez, Elvira Juana" -sent. del 26.02.76-, destacándose en el dictamen del Sr. Procurador Fiscal, en cuanto a la obligación que impone al Estado el art. 14 bis. de la C.N., que las leyes jubilatorias son de derecho público y de manifiesto carácter asistencial, por lo que el reconocimiento de beneficios previsionales está supeditado a los requisitos y condiciones que la propia ley exige para el otorgamiento y pérdida de los derechos que acuerda.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92500

11.05.01

"ORTÍZ, ROSALVA ISIDORA c/ A.N.Se.S."

(Ch.-D.-M.)

JUBILACIÓN POR INVALIDEZ

Aportante regular e irregular. Ley 24.241, art. 95. Dec. 1120/94. Demora en la iniciación del trámite. Responsabilidad del organismo.

Se ajusta a derecho la sentencia del "a quo" que revocó la resolución de la A.N.Se.S. que había denegado el beneficio de jubilación por invalidez en virtud de que al momento de determinar la calidad de aportante regular o irregular el peticionante no cumplía con los requisitos exigidos por el art. 95 de la ley 24.241 y su Dec. Reglamentario 1120/94, si de las constancias de autos surge que la demora acaecida entre el cese y la fecha de iniciación del trámite jubilatorio fue por exclusiva responsabilidad del organismo, ya que aquél se presentó en varias oportunidades a fin de comenzar el mismo sin que ello se pudiera efectivizar por un comportamiento material irregular por parte del Organismo actuante, en franca violación a lo dispuesto por el art. 49 de la ley 24.241. El desorden administrativo que impidió que se le recepcionara al peticionante su documentación, no puede jugar en contra de su derecho, pues de ser así se estaría configurando una manifiesta arbitrariedad administrativa de la demandada, máxime tratándose de una prestación de carácter alimentario. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77124

10.05.01

"CABRERA, LORENZO c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-M.A.)

Aportante regular e irregular. Ley 24.241, art. 95. Dec. 136/97. Vigencia.

Aunque al momento de dictarse la resolución denegatoria por parte de la A.N.Se.S. no se encontraba vigente el Dec. 136/97, como éste no estipula la fecha desde la cual debían aplicarse sus disposiciones, debe concluirse que resulta de aplicación no sólo a partir de su entrada en vigencia -23.02.97-, sino también

a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (cfr. art. 3 Cód. Civil). Ello así, atento que en la exposición de motivos del referido decreto se señaló que el fin perseguido era el de evitar "... situaciones no queridas y ajenas a la finalidad y espíritu de la normativa legal, limitando o suprimiendo el acceso a las prestaciones de la seguridad social", y que por ello "... se estima necesario modificar aquellos requisitos sobre la base de criterios más adecuados y flexibles". (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77124

10.05.01

"CABRERA, LORENZO c/ A.N.Se.S."

(L.-F.-M.A.)

Demanda. Ley 24.463, art. 15. Competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social.

La Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social es competente para entender en una demanda sumaria contra la A.N.Se.S. en los términos del art. 15 de la ley 24.463, por la que se pretende el otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez, aunque a tal fin el titular no haya utilizado el procedimiento previsto por el art. 49, incs. 3 y 4 de la ley 24.241, que autoriza a recurrir -en el perentorio plazo de cinco días- directamente ante la C.F.S.S. contra las resoluciones de la Comisión Médica Central.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51740

11.05.01

"MARTÍNEZ, EMILIO c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Disminución visual. Grado de incapacidad. Persona exceptuada del servicio militar. Valoración.

Si bien resulta complejo establecer el porcentaje de incapacidad padecido por el peticionante debido al tiempo transcurrido y a la carencia de elementos de carácter médico de esa fecha (en el caso, año 1961), no puede dejarse de valorar que aquél fue exceptuado del servicio militar por padecer una patología visual; y si bien es cierto -conforme lo afirmado por la Comisión Médica Central- que se exceptuaba a quienes tuvieran una miopía de más de 5 dioptrías, mejorando o no con corrección, lo cierto es que sin lugar a dudas la patología a los 20 años ya existía en un grado importante. Por tal motivo, teniendo en cuenta que la enfermedad en sí es de carácter evolutivo, debe colegirse que a los 37 años de edad (esto es, a la fecha del fallecimiento del progenitor) el peticionante se encontraba virtualmente incapacitado, máxime si se tiene en cuenta su falta de preparación profesional. En consecuencia, corresponde declararlo incapacitado en los términos del art. 53 de la ley 24.241 al momento del fallecimiento del causante, y concederle el beneficio de pensión solicitado.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83021

10.05.01

"JUSTO, GERMAN LEZCANO c/ A.N.Se.S."

(H.-F.-E.)

Incapacidad al momento de la afiliación. Informe del C.M.F. Concesión del beneficio.

Corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" que, apoyado en las fundadas conclusiones a que arriba el Cuerpo Médico Forense en base a consideraciones médico legales, concluyó que la peticionante a la fecha de afiliación, se encontraba capacitada "en alguna medida", y ordenó al organismo que emitiera una nueva resolución dentro del plazo de treinta días concediendo el beneficio solicitado. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77395

22.05.01

"TROTTI, ERNESTA c/ A.N.Se.S."

(L.-M.A.-F.)

Incapacidad al momento de la afiliación. Informe del C.M.F. Concesión del beneficio.

El dictamen del C.M.F. que estableció que la peticionante debería estar capacitada "en alguna medida" a la fecha de afiliación, constituye prueba suficiente en los

términos del art. 477 del C.P.C.C., por lo que corresponde aplicar el criterio compartido en forma unánime por la jurisprudencia de que la duda en las apreciaciones de la invalidez debe resolverse en favor del beneficiario, habida cuenta de que con las prestaciones previsionales se persigue la atención de elementales necesidades de subsistencia. Sin perjuicio de ello, debe entenderse que el “a quo” al ordenar al organismo previsional la concesión del beneficio, ha ido más allá de la competencia que le ha sido asignada por ley. En tal sentido, cumple destacar que el art. 15 de la ley 24.463, establece que los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social serán competentes respecto a las impugnaciones de las resoluciones de la A.N.Se.S. y, por consiguiente, les está vedado entrar a considerar aspectos no tratados en ellas. Por ello, corresponde dejar sin efecto la sentencia y, declarando que la actora se encontraba capacitada al momento de la afiliación, devolver el expediente al juzgado de origen a fin de que este remita las actuaciones administrativas al organismo previsional, quien deberá expedirse nuevamente acerca de la procedencia del beneficio de jubilación por invalidez. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77395

22.05.01

“TROTTI, ERNESTA c/ A.N.Se.S.”

(L.-M.A.-F.)

Incapacidad inferior al mínimo legal. Ponderación. Factor compensador. Dec. 1290/94.

Si del informe del C.M.F. -no objetado por las partes- surge que las patologías del peticionante, sumados los factores complementarios, determinan una incapacidad a los fines previsionales del 62% de la total obrera, y siguiendo la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal en cuanto a que “la exigencia del 66% no es un requisito ineludible y puede ser dejado de lado sobre la base de ponderar razonablemente la posibilidad que tiene el interesado de sustituir su actividad habitual por otra compatible con sus aptitudes profesionales, habida cuenta de su edad, su especialización en la actividad ejecutada, la jerarquía profesional que hubiera alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y naturaleza de la invalidez “(cfr. C.S.J.N., sent. del 13.03.90, “Garófalo, Pascual Jesús”), corresponde concluir, teniendo en cuenta que se trata -en el caso- de una persona de 64 años, con un nivel de educación formal primario, y fijando el factor compensador en el 4% de la tabla de factores complementarios del Dec. 1290/94, que se encuentra totalmente incapacitado a los fines previsionales.

C.F.S.S., Sala I

sent. 93162

11.06.01

“QUINTERO, HÉCTOR JOSÉ c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.-D.)

Requisitos. Cumplimiento. Fecha inicial de pago.

Tratándose de una solicitud de retiro por invalidez, y teniendo en cuenta que el accionante en ninguna oportunidad percibió beneficio previsional alguno, corresponde condenar al organismo administrativo a que abone los haberes devengados a partir del momento en que se cumplieron todos los requisitos exigidos por las disposiciones de la ley 24.241 para acceder al beneficio peticionado.

C.F.S.S., Sala I

sent. 93162

11.06.01

“QUINTERO, HÉCTOR JOSÉ c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.-D.)

Incapacidad inferior al mínimo legal.

Corresponde tener por acreditados los recaudos exigidos por el art. 48 de la ley 24.241 aunque el porcentaje de incapacidad otorgado por el Cuerpo Médico Forense (en el caso, 55%) no cubra las expectativas que marca la ley vigente para conceder dicha prestación, ya que debe ponderarse la edad del peticionante, los síntomas que presenta y la escasa posibilidad de reinserirse o competir válidamente en el mercado de trabajo, dada la realidad económica-laboral que en estos momentos está experimentando el país. Ello así, conforme el criterio sostenido por la C.S.J.N. respecto a la amplitud de criterio con que deben interpretarse las leyes previsionales para lograr la finalidad que persiguen (Fallos 267:23; 276:218; 292:392), no debiendo llegarse al desconocimiento de derechos de esta índole sino con extrema cautela (Fallos 266:2999). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fer-

nández votó en disidencia).
C.F.S.S., Sala II
sent. 83522
03.07.01
"BESOZZI, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S."
(H.-F.-E.)

Incapacidad inferior al mínimo legal.

No puede sostenerse que la brecha existente entre el porcentaje de invalidez detectado por los peritos médicos forenses y el exigido por la norma para acceder al beneficio (en el caso, del 11%), sea mínima y permita efectuar una interpretación amplia del texto legal. Cabe recordar que al respecto se ha sostenido que "si bien es cierto que quien es portador de una incapacidad se encuentra en desventaja en el mercado de trabajo respecto de quienes están sanos, ello por sí solo no es suficiente para acceder al beneficio por invalidez. De otro modo, si cada vez que existiera una incapacidad se otorgara el beneficio, en la práctica se estaría dejando de lado la finalidad que tiende a la protección de quienes se encuentran en la imposibilidad de obtener trabajo debido a su estado de salud" (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 30.04.90, "Billares, Celia"). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II
sent. 83522
03.07.01
"BESOZZI, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S."
(H.-F.-E.)

Incapacidad inferior al mínimo legal. Presunción. Ley 24.241, art. 48, inc. a). Chofer de colectivos.

Corresponde hacer lugar a la solicitud de jubilación por invalidez aunque el peticionante no acredite el 66% o más de incapacidad -lo que permitiría calificarla sin más como "total" en los términos del art. 48, inc. a) de la ley 24.241-, porque nada impide atribuirle ese carácter cuando, conforme el informe del Cuerpo Médico Forense, igualmente inhabilita al trabajador -en el caso, de 49 años de edad- para el desempeño de la tarea que normal y habitualmente venía cumpliendo -en el caso, chofer de colectivos desde hacía 25 años-.

C.F.S.S., Sala III
sent. 78393
25.06.01
"VEGA, HORACIO EDUARDO c/ Orígenes A.F.J.P."
(F.-M.A.-L)

Ley 24.241, art. 49. Dictamen de la C.M.C. Recursos. Calidad de parte.

La intención del legislador, al indicar específicamente en el art. 49 de la ley 24.241, que se le debe correr traslado al "afiliado", y a los demás -administradora, aseguradora y A.N.Se.S.- únicamente en caso de que hubieran ejercido su derecho a recurrir el dictamen de la Comisión Médica Central, fue la de asegurar la intervención de aquél en todos los casos. Es decir que si la administradora, la aseguradora o la A.N.Se.S. no recurrieron dicho dictamen, no son consideradas partes necesarias en la tramitación de las actuaciones en sede judicial, y por ende, no se requiere que se les confiera el traslado de la pericia médica así como la notificación de la sentencia. Por el contrario, el afiliado revestirá la calidad de parte del proceso en todos los casos, aún cuando no hubiera recurrido el dictamen médico. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III
sent. 77583
23.05.01
"MACIEL SOSA, FERMÍN c/ Máxima A.F.J.P."
(L.-F.-M.A.)

Leyes 18.037 y 18.038. Vía recursiva. Ley 24.241, art. 49. Inaplicabilidad.

De conformidad con el nuevo esquema procedimental establecido por la Ley de Solidaridad Previsional, y atento tratarse de un peticionante que solicitó la jubilación por invalidez bajo la vigencia de las leyes 18.037 y 18.038 que, sometido al control médico correspondiente, se le determinó cierto grado de incapacidad, dicho control no resulta susceptible de ser recurrido por la vía expresamente contemplada en el art. 49 de la ley 24.241, sino por el procedimiento específico previsto en el art. 15 de la ley 24.463. En tal inteligencia, no puede reputarse de ilegal y/o arbitrario el accionar de la A.N.Se.S. y la Comisión Médica que denegaron la vía de apelación del referido art. 49, puesto que lo actuado se ajusta a lo dis-

puesto en la Resolución Conjunta A.N.Se.S. 1183/97 y S.A.F.J.P. 556/97, que estableció que en supuestos como el de autos, las comisiones médicas se encuentran facultadas sólo a determinar el grado de incapacidad del solicitante del beneficio, y asimismo, que dicha atribución se agota con la emisión del dictamen pertinente, cuyo resultado se informa a la A.N.Se.S. para dictar el correspondiente acto administrativo (ver. arts. 4 y 7, Resolución citada). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)

C.F.S.S., Sala III

sent. 78233

20.06.01

“ARRIETA, BLANCA ESTHER c/ A.N.Se.S.”

(M.A.-L.-F.)

Reingreso a la actividad. Suspensión del beneficio. Ley 18.038.

No puede tener acogida favorable la argumentación relativa a un supuesto exceso de rigor formal por parte del sentenciante que hizo aplicación de lo dispuesto por los arts. 49 y 50 de la ley 18.038 ante la omisión de acreditar, mediante certificado expedido por autoridad competente, la rehabilitación profesional del titular para el reingreso a la actividad (art. 47 de la ley 18.038, modificado por art. 18 de la ley 22.431). Las manifestaciones expresadas por aquél, relativas a cuestiones metajurídicas tales como lo magro de la jubilación y el estado de precariedad económica resultan insuficientes, por cuanto el incumplimiento de dicho requisito deviene esencial para evitar las sanciones previstas en el citado art. 50 de la ley 18.038. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72834

31.08.01

“SCARDAMAGLIA, ANTONIO ÁNGEL c/ A.N.Se.S.”

(L.-M.A.-F.)

Reingreso a la actividad. Suspensión del beneficio. Ley 18.038.

La estrictez de las normas jurídicas, en cuanto a la exigencia de la certificación avalatoria de la rehabilitación profesional y la puesta en conocimiento al organismo previsional del reingreso a la actividad (cfr. arts. 47 y 49 de la ley 18.038), no sólo tienen como fin la tutela del estado de salud del incapacitado y su eventual reinserción laboral, sino también la posibilidad de que dicho organismo se encuentre en condiciones de controlar el cumplimiento efectivo del régimen de excepción de compatibilidad limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de tareas en relación de dependencia. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72834

31.08.01

“SCARDAMAGLIA, ANTONIO ÁNGEL c/ A.N.Se.S.”

(L.-M.A.-F.)

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES

Haberes previsionales. Reducción del haber. Ley 24.018. Prescripción.

En materia previsional el instituto de la prescripción está regulado por el art. 82 de la ley 18.037, el que ha mantenido su vigencia en razón de lo dispuesto por el art. 168 de la ley 24.241. En consecuencia, no se advierte motivo alguno para que no resulte de aplicación en una causa donde se acogió favorablemente la acción de amparo interpuesta por los peticionantes, tendiente a que se suspenda la aplicación de la reducción dispuesta en el art. 34 de la ley 24.018, y se ordenó al organismo abstenerse de efectuar descuentos a aquéllos desde el 01.01.97, procediendo a la devolución de las sumas retenidas en forma indebida.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51682

30.04.01

“CARCANO, CARLOS ALBERTO Y OTROS c/ A.N.Se.S.”

(M.-Ch.-D.)

Haberes previsionales. Reducción del haber. Ley 24.018. Prescripción.

El instituto de la prescripción se halla normado en el Código Civil, estableciendo que aquélla es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. El art. 3949 del citado plexo normativo fija que la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que quien la entabla haya dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere. Por ello, habiéndose planteado la excepción por el organismo, la misma debe ser acogida, estableciéndose que las retroactividades a abonar a los accionantes por los descuentos erróneamente efectuados, lo serán desde los dos años anteriores a la interposición de la acción.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51682

30.04.01

"CARCANO, CARLOS ALBERTO Y OTROS c/ A.N.Se.S."

(M.-Ch.-D.)

Ley 24.018. Acción declarativa. Medida cautelar. Tratamiento abstracto.

Acreditado en autos que la peticionante se desempeña como Prosecretario Administrativo del fuero Civil y que efectuó el aporte del 12% exigido por el art. 31 de la ley 24.018, el tratamiento de la medida cautelar tendiente a que la declare comprendida en los alcances del régimen de la ley referida hasta que se resuelva la cuestión de fondo, deviene abstracto. Ello así, en la medida que no ha recaído pronunciamiento definitivo que altere el cuadro de situación emergente de las resoluciones de la C.S.J.N. Nros. 112/94, 421/94, 616/94, 674/94 y 723/95, en virtud de las cuales, al presente, resulta aplicable a la peticionante la ley 24.018 en todo su alcance, y así ha de serlo hasta que se dicte sentencia que ponga fin al pleito (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 28.02.01, "Becerra, Nicolás Eduardo", voto del Dr. Fasciolo). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72451

20.07.01

"NIEPREL, MARTA SUSANA c/ A.N.Se.S."

(L.-M.A.-F.)

Ley 24.018. Acción declarativa. Medida cautelar. Improcedencia.

Desprendiéndose de las actuaciones que la medida cautelar innovativa peticionada por la accionante se confunde con el que es objeto de la acción principal, y toda vez que dicho remedio procesal reviste un carácter excepcional, y su admisión ha de juzgarse con criterio restrictivo toda vez que, en caso de hacerse lugar al mismo, nos enfrentaríamos ante un anticipo de jurisdicción favorable respecto al fallo final de la causa con lo que se lesionaría el derecho de defensa en juicio que asiste a la demandada, corresponde confirmar la sentencia que rechazó la medida cautelar interpuesta. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72451

20.07.01

"NIEPREL, MARTA SUSANA c/ A.N.Se.S."

(L.-M.A.-F.)

MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA

Haberes previsionales. Decs. 1490-P-91 y 1600-P-91 del H.C.D. Cargos.

De la lectura de los considerandos del Dec. 1600-P-91, resulta que el Dec. 1490-P-91 carece de motivación en el sentido de expresión concreta de los antecedentes de hecho y derecho en que se funda, por cuanto a la fecha de sanción no existía previsión presupuestaria suficiente para hacer efectivo su cumplimiento. Por ello, siendo el actor titular de un beneficio otorgado por aplicación del régimen establecido por el Dec. 1044/83 -que determina la jubilación en base a un 82% móvil de la remuneración asignada por todo concepto al cargo de actividad, equivalencia que mantuvo la ley 24.018-, y en tanto el incremento establecido por el referido Dec. 1490-P-91 no ha sido percibido por los que continúan en actividad, mal puede ser reclamado por el accionante.

C.F.S.S., Sala II

sent. 84089
30.08.01
“DI FILIPPO, OSCAR RAÚL c/ A.N.Se.S.”
(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Decs. 1490-P-91 y 1600-P-91 del H.C.D. Cargos.

El pago realizado en razón del Dec. 1490-P-91 carece de causa al haber sido dejado sin efecto por el Dec. 1600-P-91. Así, el importe fue pagado de buena fe pero sin causa (art. 793 Cód. Civil), por lo que no puede ser considerado como incorporado al patrimonio del recurrente y debe ser restituido. En consecuencia, resulta acertada la sentencia de grado en cuanto ratificó el cargo impuesto por lo percibido indebidamente por el titular.

C.F.S.S., Sala II

sent. 84089
30.08.01
“DI FILIPPO, OSCAR RAÚL c/ A.N.Se.S.”
(F.-H.-E.)

Haberes previsionales. Decs. 1490-P-91 y 1600-P-91. Cargos.

Corresponde confirmar la sentencia que reconoció la irretroactividad de lo normado por el Dec. 1600-P-91, mediante el cual se disponía la devolución de las sumas formuladas como cargo por el concepto de exceso de adicionales por responsabilidad jerárquica, abonadas en los meses de diciembre de 1991 y enero y febrero de 1992. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78254
21.06.01
“SAMPEDRO, JORGE MANUEL c/ A.N.Se.S.”
(M.A.-F.-L.)

Haberes previsionales. Decs. 1490-P-91 y 1600-P-91. Cargos.

No puede prosperar la pretensión del actor de que se declare ilegítima la derogación del Dec. 1490-P-91 (que otorgó un aumento adicional por responsabilidad jerárquica y que le fuera liquidado durante los meses de diciembre de 1991 y enero y febrero de 1992) dispuesta por el Dec. 1600-P-91, ya que el derecho adquirido por el quejoso es a que se le liquide su haber jubilatorio conforme el 82% del cargo en actividad y la aplicación del Dec. 1490-P-91 superaba dicho límite, por lo que no corresponde un pago que reconoce como causa el error. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78254
21.06.01
“SAMPEDRO, JORGE MANUEL c/ A.N.Se.S.”
(M.A.-F.-L.)

Haberes previsionales. Decs. 1490-P-91 y 1600-P-91. Cargos.

Los pagos efectuados al beneficiario en virtud del Dec. 1490-P-91 fueron percibidos de buena fe (art. 786 Código Civil), por lo que no resulta ajustado a derecho la formulación de cargos respecto de dichas sumas. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78254
21.06.01
“SAMPEDRO, JORGE MANUEL c/ A.N.Se.S.”
(M.A.-F.-L.)

Haberes previsionales. Reajuste. Ordenanza n° 14.702. Aplicación. Dec. 1645/78, art. 46. Inconstitucionalidad.

La C.S.J.N. ha sostenido reiteradamente que el monto de los beneficios previsionales puede ser disminuido para el futuro cuando medien para ello razones de orden público o beneficio general, salvo que la reducción resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada (Fallos 291:596; 295:674; 300:616), circunstancia ésta que tiene lugar cuando el haber respectivo pierde su naturaleza sustitutiva, ya que el conveniente nivel de la prestación jubilatoria ha de considerarse alcanzado cuando el jubilado conserva una situación patrimonial proporcionada a la que le correspondería de haber seguido en actividad (C.S.J.N., Fallos 293:26; 294:83), motivo que ha llevado a insistir en la necesidad de reducir los porcentajes admitidos como confiscatorios con anterioridad (cfr. C.S.J.N., sent. del

31.07.85, “Méndez, Enrique” y sent. del 31.07.90, “Gastañaga, Ricardo E.”). Por lo tanto, teniendo en cuenta lo resuelto en el citado último precedente - especialmente el considerando 6-, como también en las causas “Moreno Hueyo, Guillermo (sent. del 27.09.88), “Echagüe Cullen, Manuel (sent. del 04.04.89) y “Mango, Horacio N.” (sent. del 23.05.89) cuya doctrina resulta aplicable por analogía, cabe concluir que la sustitución del régimen de la Ordenanza n° 14.702 se traduce en un descenso del nivel de haberes que por su magnitud es irrazonable y confiscatorio, debiendo hacerse lugar a la inconstitucionalidad planteada contra el art. 46 del Dec. 1645/78 -modificado por Dec. 434/81-.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92779

23.05.01

“GARRAMONE DE MATA, DELIA TERESA c/ I.M.P.S.”

(Ch.-M.-)

Haberes previsionales Ordenanza n° 14.702. Aplicación.

La C.S.J.N. en la causa “Chocobar” (sent. del 27/12/96), se expidió en forma expresa en cuanto a que la sanción de la ley 24.241 no ha afectado la vigencia de los sistemas de movilidad de haberes previstos en las leyes especiales que contemplaran fórmulas distintas a la de dicha normativa. Ello así en virtud de lo dispuesto por el art. 160 de la misma, reafirmado -si cabe- por lo previsto en el Dec. 2433/93 (cfr. considerandos 31 y 32 del fallo citado). En consecuencia, encontrándonos frente a la aplicación de la vieja Ordenanza n° 14.702, cuyo sistema de movilidad se mantuvo para quienes consolidaron su beneficio al amparo de la misma, y aún con posterioridad a su derogación a través del art. 67 del Dec. 1645/78, lleva a afirmar que el peticionante habría adquirido un derecho cuya modificación lo afecta de una manera tal que viola principios constitucionales, y lo que es más grave aún, el de la seguridad jurídica base de recto orden jurídico; motivo por el cual corresponde que para reajustar el haber previsional del titular se apliquen las prescripciones de la referida Ordenanza 14.702.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92779

23.05.01

“GARRAMONE DE MATA, DELIA TERESA c/ I.M.P.S.”

(Ch.-M.-)

Haberes previsionales. Plus por vivienda. Reclamo. Procedencia.

Debe considerarse válida la petición formulada por la pensionada de que se incluya en su beneficio previsional el “plus por vivienda”, si dicho rubro había sido solicitado por el causante y el organismo nunca se pronunció al respecto. Ello así, porque las gestiones realizadas en este aspecto por el titular quedaron pendientes de resolución, subsistiendo ininterrumpidamente -a pesar de su inactividad- por no existir perención de instancia administrativa y, por lo tanto, el efecto producido por la presentación de aquélla perdura hasta que sea definida la situación en el marco y en la forma que la ley previsional determina (cfr. C.N.A.T., Sala IV, sent. del 31.05.83, “Ingratta, Zulema Irma”). Por tal motivo, deberán remitirse las actuaciones al organismo administrativo a fin de que se expida en forma expresa respecto al rubro en cuestión.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92779

23.05.01

“GARRAMONE DE MATA, DELIA TERESA c/ I.M.P.S.”

(Ch.-M.-)

Haberes previsionales. Restitución del importe íntegro. Dec. 1044/83. Ley 24.018. Acción de amparo. Procedencia.

Debe confirmarse la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo deducida por el titular, declaró vencido el plazo de vigencia del art. 34 de la ley 24.018 y condenó al organismo a abonar el haber en el importe íntegro del beneficio previsional oportunamente otorgado al amparo del régimen establecido por el Dec. 1044/83, sin el descuento establecido por aquélla disposición, como así también el retroactivo resultante por el período no prescripto, más la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. prevista por el art. 10 del Dec. 941/91. Lo así decidido se ajusta al principio que informa el criterio sustentado por la Cámara en casos análogos, como ser -entre otros-, Sala I, sent. del 30.06.99, “Eggimann, Olga Betty y otros”, íd. sent. del 27.12.99, “González, Mario Rubén”, en concordancia con el temperamento adoptado por la Excma. C.S.J.N. en los casos “Craviotto, Gerardo Adolfo y otros”, “Unamuno, Miguel” (ambas sent. del 19.05.99) y “Alias,

Manuel y otros” (sent. del 24.03.00). (Del voto del Dr. Fasciolo)
C.F.S.S., Sala III
sent. int. 72733
30.08.01
“ROMERO DE LAURNAGARAY, MARIA CRISTINA c/ A.N.Se.S.”
(L.-F.-M.A.)

Reconocimiento de deuda. Dec. 2497/98. Costas.

Si bien la causa se originó debido a la deuda que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantenía con los titulares de autos, el hecho de que se hayan aplicado las disposiciones del Dec. 2497/98, por el cual el Estado reconocía su deuda y determinaba la forma de pago de las costas, corresponde que éstas sean impuestas en el orden causado.

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 51770
11.05.01
“SUÁREZ, JUAN DE DIOS Y OTROS c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”
(Ch.-M.-D.)

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

FONDO COMPENSADOR

Fondo compensador. Peticionante jubilado. Competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social.

Si bien la C.S.J.N. en la causa “Asociación Mutual Personal del Banco de Quilmes” se pronunció a favor de la competencia del fuero laboral, entendiendo que la contienda negativa debía resolverse por aplicación de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo (ley 18.345, arts. 20 y 21 inc. a) que hace extensiva su competencia por razón de la materia a aquellas acciones que se sustentan en una norma de derecho común, siempre que el conflicto se suscite en el desenvolvimiento de la relación laboral a la cual se aplique el precepto invocado, y a las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos de trabajo; dicha doctrina no será de aplicación cuando, como en el caso de autos, de la lectura del escrito de inicio se desprende que el accionante no es un trabajador en actividad, sino por el contrario, un jubilado. En consecuencia, y en virtud de las consideraciones vertidas en el dictamen nº 8218 del 30.09.97, en autos “Barile de Miliiani, María Consiglia” del registro de la Sala I de la C.F.S.S., corresponde declarar la competencia de la Justicia Federal de la Seguridad Social. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 72604
10.08.01
“LEIBKOWICZ, JOSÉ c/ Fondo Compensador”
(F.-M.A.-L)

Fondo compensador. Reintegro. Competencia del fuero de la Seguridad Social.

El Instituto de Servicios Sociales Bancarios fue creado por la ley 19.522 como un organismo autárquico del Ministerio de Bienestar Social de la Nación (art. 1 de dicha norma), y las impugnaciones realizadas contra las resoluciones emanadas de dicho ente se rigen por la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 04.11.99, “Banco de la Edificadora de Olavarría c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”). En virtud de ello, resulta competente el Fuero Federal de la Seguridad Social para entender en una demanda que tiene por objeto el reintegro de sumas de dinero que fueron descontadas para destinarlas al “Régimen Complementario o Compensatorio Móvil de Jubilaciones”. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Etala. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 52180
23.08.01
“BRUNO, TOMAS HÉCTOR c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”
(E.-F.-H.)

Fondo compensador. Reintegro. Competencia del fuero de la Seguridad Social.

La demanda iniciada con el fin de obtener la restitución de las sumas de dinero oportunamente aportadas al “Régimen Complementario o Compensatorio Móvil de Jubilaciones” es de naturaleza previsional. La circunstancia de que la ley 24.655 no prevea expresamente dicho supuesto no debe interpretarse en sentido riguroso, ya que aquella no tuvo como fin delimitar “taxativamente” la competencia del fuero, sino reconocer la autonomía jurisdiccional de la Seguridad Social. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Herrero. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52180

23.08.01

“BRUNO, TOMÁS HÉCTOR c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”

(E.-F.-H.)

Fondo compensador. Reintegro. Competencia del fuero del Trabajo.

El fuero del Trabajo es competente para entender en una demanda contra el Instituto de Servicios Sociales Bancarios en la que se persigue el cobro de las sumas aportadas a su Fondo Compensador o Complementario. Así lo ha sostenido la C.S.J.N. en los autos “Asociación Mutual Personal del Banco Quilmes c/ Banco Quilmes S.A. (sent. del 06.10.98) y “Vincifori, Roberto Claudio c/ Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados Telefónicos” (sent. del 01.12.98). En dicha oportunidad, el Procurador General de la Nación -a cuyo dictamen remitió el Alto Tribunal- sostuvo: “Considero que la contienda negativa debe resolverse por aplicación de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo (18.345, arts. 20 y 21) que hace extensiva su competencia por razón de la materia a aquellas acciones que se sustenten en una norma de derecho común, siempre que el conflicto se suscite en el desenvolvimiento de la relación laboral a la cual se aplique el precepto invocado, y a las causas en las que tengan influencia decisiva para la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del trabajo. Dicha situación se configura en el sub lite ... el aporte destinado por el Banco a la asociación mutual de su personal, al margen de los ribetes previsionales constituye en rigor una cuestión imbricada con aspectos colectivos del derecho del trabajo, al cual se habría obligado no por mandatos provenientes de preceptos de la seguridad social, sino en virtud de la relación laboral que lo une a los beneficiarios” (Dictamen del 31.08.98, in re “Asociación Mutual Personal del Banco Quilmes c/ Banco Quilmes S.A.”). A ello debe sumarse el hecho de que no existe norma alguna que otorgue competencia al Fuero de la Seguridad Social para entender en dichos reclamos. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52180

23.08.01

“BRUNO, TOMÁS HÉCTOR c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”

(E.-F.-H.)

PENSIÓN

CONCUBINA

Haberes indebidamente percibidos. Cargos. Período. Ley 23.570. Dec. 166/89.

El Dec. 166/89, reglamentario de la ley 23.570, si bien posibilitó la rehabilitación del beneficio que había sido extinguido por las causales legales pertinentes, dejó a salvo la imposición del correspondiente cargo por los haberes indebidamente percibidos mientras estuvo vigente la citada normativa. En consecuencia, no puede obviarse la imposición de cargos, o limitarla al período de inicio de la convivencia hasta la sanción de la ley 22.611 -como pretende la titular de autos-, por cuanto este cuerpo legal sólo amparaba a quienes contraían nuevas nupcias, y recién con la modificación establecida por la ley 23.570 el legislador consideró a quienes convivían de hecho. Por ello, los cargos por haberes indebidamente percibidos deberán extenderse hasta la entrada en vigencia de la referida ley 23.570 (26.07.88). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)

C.F.S.S., Sala III

sent. 78785
29.06.01
“GIUGALE, ROSARIO c/ A.N.Se.S.”
(M.A.-F.-L.)

OTROS BENEFICIARIOS

Nietos. Ley aplicable. Magistrados y funcionarios judiciales. Ley 18.464.

El art. 161 de la ley 24.241 establece que el derecho de pensión de los causahabientes de los afiliados que a la fecha de entrada en vigor de la ley fueran titulares de jubilación o tuvieran derecho a ella de conformidad con las leyes vigentes a esa fecha, se regirán por dichas leyes. En consecuencia, habiendo obtenido el causante su beneficio jubilatorio conforme la ley 18.464, cuyo art. 11 establece que las pensiones de los causahabientes se regían exclusivamente por la ley 18.037, corresponde otorgar la prestación, sin límites de edad, al nieto o nieta huérfano de padre y madre e incapacitado para el trabajo o a cargo del causante a la fecha de su fallecimiento (art. 38 y 39, ley 18.037).

C.F.S.S., Sala I

sent. 94095

17.08.01

“PUENTE SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, CECILIA c/ A.N.Se.S”
(M.-D.-Ch.)

SEPARACIÓN DE HECHO

Convivencia. Exclusión. Apelación. Expresión de agravios.

Expresar agravios significa ejercitar un control de juridicidad mediante la crítica concreta y razonada de los eventuales errores del juzgador, para lograr de ese modo la modificación total o parcial de la sentencia o resolución atacada, exigencia que no puede tenerse por cumplida cuando el quejoso se limita a disentir con lo resuelto, sin fundamentar el recurso intentado. En tales condiciones, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51940

11.06.01

“PAPARAZZO DE PEDROLI, MARÍA c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Convivencia. Exclusión. Apelación. Expresión de agravios.

Aunque el escrito recursivo en principio aparezca infundado, por no atacar concretamente el punto central que sustentó la sentencia -en el caso, que la circunstancia de haberse verificado que la titular habría convivido con otro hombre luego de la separación de hecho y en vida de su extinto marido, resultaba suficiente para configurar la causal de exclusión prevista en el art. 1 de la ley 17.562-, teniendo en cuenta el criterio amplio con que los jueces deben apreciar las peticiones atinentes a la materia previsional (cfr. C.S.J.N., sent. del 26.10.99, “Aquerreta, Héctor”), corresponde considerar la cuestión de fondo controvertida. Una solución contraria importaría privar a la peticionante de un derecho que legítimamente le corresponde, en cuanto quedaría cerrada toda posibilidad de volver a plantear eficazmente la pretensión que originó el reclamo una vez firme el decisorio que rechaza la pensión solicitada; contraviniendo de ese modo lo sostenido reiteradamente por la Corte Suprema -criterio que además ha seguido el Tribunal- en el sentido de que “la convivencia de hecho con otro hombre, aún antes de la muerte del causante, ha dejado de ser causal de pérdida del derecho pensionario de la viuda frente a la sanción de la ley 23.570” (cfr. “Cañete, Angélica”, pub. en Revista Jubilaciones y Pensiones”, Tº I, pág. 126). (Disidencia del Dr. Díaz).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51940

11.06.01

“PAPARAZZO DE PEDROLI, MARÍA c/ A.N.Se.S.”
(Ch.-M.-D.)

Culpa. Prueba. Ley 17.562, art. 1.

El art. 1 de la ley 17.562 requiere para que la cónyuge supérstite pierda el benefi-

cio de pensión, se dé el supuesto de culpa exclusiva o concurrente. Por ello, no cuestionada la culpabilidad de la actora, mal puede considerársela culpable de la separación en base a una certificación emanada de un Juzgado (en el caso, el n° 10 de San Martín) en el que el causante acredita su concubinato, ya que ello no hace pasible a la peticionante de la supuesta separación.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92734

23.05.01

“JEREZ DE ALVARELLO, ESTER AMANDA c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.)

Culpa. Prueba. Art. 377 C.P.C.C.

El art. 377 del C.P.C.C. establece que la carga de la prueba incumbirá a la parte que afirme la presencia de un hecho controvertido. En consecuencia, aunque a juicio del organismo la prueba rendida no fuera suficiente, ello no implica que automáticamente pudiera atribuir la responsabilidad de la separación a la peticionante, sino que a tal fin debió demostrar fehacientemente la existencia de causas que permitiesen denegar el beneficio solicitado, máxime si aquella acreditó el vínculo que la unía con el causante a través de la partida de matrimonio y de testigos que acreditaron, tanto en sede administrativa como judicial, que el matrimonio subsistió hasta el momento del fallecimiento de éste.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92734

23.05.01

“JEREZ DE ALVARELLO, ESTER AMANDA c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.)

Culpa. Prueba.

En los casos en que se alegue la disolución del matrimonio -institución fundamental en toda sociedad civilizada-, se debe probar fehacientemente el hecho de la separación. Es contrario a la ley y a los principios básicos que rigen la ley matrimonial, que a través de meras presunciones que no tienen sustento en la realidad, se pretenda desconocer derechos que emergen de aquella unión.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92734

23.05.01

“JEREZ DE ALVARELLO, ESTER AMANDA c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.)

Culpa. Prueba.

El organismo previsional no puede, sin resolución fundada, prescindir de aquella prueba testimonial que ha sido recibida en formularios tipo, pues tal procedimiento resulta lesivo del derecho de defensa, que debe ser garantizado evitando incurrir en excesos rituales que conduzcan eventualmente al desconocimiento de la verdad jurídica objetiva (Fallos 238:550; 248:625; 285:440 y 295:322). En tal sentido, si las declaraciones obrantes en autos resultan insuficientes a los fines perseguidos, resulta imperativo para el organismo actuante proceder a su ampliación, sin perjuicio de disponer la producción de todos los elementos de juicio que puedan resultar conducentes al esclarecimiento de la verdad de los hechos, de conformidad con las disposiciones del art. 1, incs. a), b), e) y f) de la ley 19.549, y teniendo en cuenta los medios de prueba admitidos por el Dec. 6178/54 para la acreditación del derecho a los beneficios previsionales. Ello así, en la medida que conforme lo tiene dicho el Alto Tribunal, no debe llegarse al desconocimiento de los derechos tutelados por las leyes previsionales sino con extrema cautela (Fallos 266:299).

C.F.S.S., Sala I

sent. 92734

23.05.01

“JEREZ DE ALVARELLO, ESTER AMANDA c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.)

Daño moral. Improcedencia.

No surgiendo de las constancias de los expedientes administrativo y judicial que la A.N.Se.S. haya efectuado acto alguno que pueda ser tildado de ilegítimo, ya que tras la producción de diversas pruebas y, en base a las conclusiones extraídas de las mismas, dictó la correspondiente resolución que se impugna, y teniendo en cuenta que el art. 1071 del Código Civil establece que “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede consti-

tuir como ilícito ningún acto...”, debe concluirse que no se configura el presupuesto necesario para que recaiga responsabilidad civil en el accionar del organismo que torne procedente la indemnización por daño moral petitionado por la titular.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92734

23.05.01

“JEREZ DE ALVARELLO, ESTER AMANDA c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.)

VIUDA/O

Ley aplicable. Ley 24.241, art. 161 2do. párrafo. Excepción.

El segundo párrafo del art. 161 de la ley 24.241 contiene una regla de excepción en materia de ley aplicable, otorgando claramente la posibilidad de invocar la legislación anterior a quienes pretendan obtener el beneficio de pensión con posterioridad a su vigencia (15/07/94), siendo condición necesaria que a esa fecha el causante hubiera sido titular de una prestación jubilatoria o hubiera tenido derecho a ella, con arreglo a la antigua normativa. En consecuencia, surgiendo de las constancias de autos que el causante gozaba del beneficio de jubilación ordinaria desde el año 1989, corresponde que la pensión solicitada por la viuda se rija por las disposiciones de la legislación anterior -ley 18.037- aunque el fallecimiento de aquél se haya producido en plena vigencia de la ley 24.241.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92493

11.05.01

“LOUREIRO DA SILVA, CONCEPCION LILI c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-D.-M.)

Acumulación. Jubilación por edad avanzada. Ley 18.037.

Establecido que el régimen aplicable a la peticionante es la ley 18.037, y en atención a que dicha norma no contempla la incompatibilidad del beneficio de jubilación por edad avanzada con el de pensión, corresponde revocar la sentencia que confirmó la resolución administrativa denegatoria del beneficio solicitado.

C.F.S.S., Sala I

sent. 92493

11.05.01

“LOUREIRO DA SILVA, CONCEPCION LILI c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-D.-M.)

Fallecimiento del causante. Ley 24.241, art. 161, 2do. párrafo. Legislación anterior. Aplicación.

Por imperio del art. 161, 2do. párrafo, de la ley 24.241, los causahabientes podrían, eventualmente, adquirir el carácter de beneficiarios de conformidad con las disposiciones de la ley 18.037, ya que nos encontraríamos frente al supuesto de conservación del derecho jubilatorio en expectativa que se alcanzó durante la prestación del servicio (cfr. Jaime y Brito Peret, “Régimen Previsional -Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- Ley 24.241”, pág. 606). Con dicha norma se consagra el derecho a invocar la legislación anterior, siempre que los causantes ya estuvieran jubilados o hubieran tenido derecho a la prestación con arreglo a la antigua normativa. En consecuencia, no encontrándose disenso en autos que el causante obtuvo su jubilación bajo el régimen de la ley 18.037, corresponde ordenar a la A.N.Se.S. liquide el beneficio de pensión conforme lo dispone el art. 52 de dicho ordenamiento.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94354

31.08.01

“SURIANO DE PROVENZANO, LUISA c/ A.N.Se.S.”

(M.-D.-Ch.)

PRESTACIONES

ACUMULACIÓN

Topé. Sumas percibidas en exceso. Cargos. Error. Buena fe.

No corresponde la devolución de las sumas que fueron percibidas de buena fe (cfr. art. 1052 Código Civil). En consecuencia, debe confirmarse lo resuelto por el “a quo” que dejó sin efecto lo dispuesto por la resolución administrativa que, ante el error en el monto de las prestaciones percibidas por la titular, impuso un cargo de restitución.

C.F.S.S., Sala I

sent. 93894

19.07.01

“AHUIR, PRIMITIVA c/ A.N.Se.S.”

(M.-Ch.-D.)

Monto. Incremento. Error. Disminución.

Toda vez que el error de derecho es inexcusable, no puede pretenderse -so pretexto de que existe un derecho adquirido- que no se disminuya el haber que fuera incrementado por error.

C.F.S.S., Sala I

sent. 93894

19.07.01

“AHUIR, PRIMITIVA c/ A.N.Se.S.”

(M.-Ch.-D.)

Ley 23.604. Procedencia.

Las disposiciones de la ley 23.604 reconocen el derecho a la percepción de más de una prestación -o doble beneficio jubilatorio- siempre que se acrediten en forma independiente para cada régimen los servicios y aportes que cada ordenamiento establezca. Asimismo, el texto de la ley no exige que el beneficiario la invoque expresamente para que proceda su aplicación. Consecuentemente, siendo que aquél tiene derecho a que se consideren ambas prestaciones (en el caso, una del ex Instituto Municipal de Previsión y otra del Régimen Nacional de Previsión) y que ello se refleje en su haber previsional, resulta arbitraria la revocación de uno de los beneficios, máxime cuando el titular realizó aportes simultáneos a las cajas respectivas durante todo el período que la ley fija en cada caso, con independencia en el cómputo de servicios (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 28.09.00, “Leguizamón, Osvaldo Roberto”; ídem, sent. del 15.04.99, “Schiariti, Oscar Nicolás”; Sala III, sent. del 28.07.97, “Almeida, Julio”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 84000

24.08.01

“PAULOS, JOSE MARCELINO c/ A.N.Se.S.”

(E.-H.-F.)

Ley 23.604. Procedencia. Omisión de denunciar una prestación anterior.

El solo hecho de no haber denunciado ante el organismo administrativo la existencia de un beneficio anterior no puede conllevar al desconocimiento de un derecho que legítimamente le correspondía al titular (en el caso, el beneficio obtenido en el ámbito municipal fue otorgado con anterioridad al dictado de la ley 23.604, y el del ámbito nacional se le concedió antes de la derogación de la norma referida, efectuada mediante el art. 165 de la ley 24.241). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78826

29.06.01

“BERNARDINO, RAÚL LOZANO c/ A.N.Se.S.”

(F.-L.-M.A.)

Ley 23.604. Procedencia. Omisión de denunciar una prestación anterior. Animus doli.

Si de las constancias de la causa se desprende que la peticionante, al momento de la solicitud del beneficio de jubilación ordinaria, cumplía perfectamente con lo requerido para que proceda la excepción contemplada por la ley 23.604, debe concluirse que la misma fue obtenida conforme a derecho; y si bien es cierto que aquélla omitió denunciar el goce de una prestación anterior a la nueva solicitud, no puede tildarse ésta de maliciosa o fraudulenta por sí misma, y menos aún llegar al desconocimiento de un derecho (que por cumplir la actora con todos los requisitos legales, se debe tildar de derecho adquirido) en base a la circunstancia de presumir que esa omisión fue deliberada y con animus doli (C.F.S.S., Sala I, “Scalabrini, María Esther”, sent. del 09.10.00). (Del dictamen Fiscal al que adhiere

re la Sala).
C.F.S.S., Sala III
sent. 78826
29.06.01
"BERNARDINO, RAÚL LOZANO c/ A.N.Se.S."
(F.-L.-M.A.)

CARGOS CONTRA EL BENEFICIARIO

Sumas percibidas de buena fe. Art. 786 Cód. Civil.

Dado el carácter alimentario que revisten los haberes previsionales, necesarios para la subsistencia del titular, y teniendo en cuenta que no se incurrió en una actitud fraudulenta a efectos de obtener las diferencias surgidas de la anterior liquidación, debe concluirse que las mismas fueron percibidas y consumidas de buena fe en los términos del art. 786 del Código Civil, por lo que corresponde considerarlas de legítimo abono y, en consecuencia, declarar improcedente el recupero pretendido por el organismo.

C.F.S.S., Sala I
sent. 94024
17.08.01
"LURATI, AURORA CARMEN c/ A.N.Se.S."
(Ch.-D.-M.)

FECHA INICIAL DE PAGO

Reapertura del procedimiento.

Cuando el beneficio jubilatorio se concede en virtud de una reapertura del procedimiento administrativo, la fecha coincidirá con la de solicitud de dicha reapertura y no con la presentación del pedido del beneficio que, oportunamente, fuera denegado por no cumplir con los requisitos exigidos para su logro (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 29.09.89, Rodríguez, Rosario Aurina").

C.F.S.S., Sala II
sent. 84043
30.08.01
"MENDOZA, NOEMIR AMELIA c/ A.N.Se.S."
(E.-H.-F.)

PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO

Otorgamiento del beneficio. Vicio. Alteración del pronunciamiento. Facultad del organismo administrativo.

La primitiva resolución por la que se otorgó el beneficio jubilatorio no pudo generar un derecho inmutable y el organismo actuante, una vez en conocimiento del vicio, pudo válidamente alterar por sí mismo su pronunciamiento ejercitando el derecho que expresamente le otorga la ley para corregir, en casos excepcionales y bajo ciertas condiciones, los actos ilegítimos aunque las prestaciones se hallaran en vías de cumplimiento (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 24.03.95, "Longo, Blanca Margarita").

C.F.S.S., Sala I
sent. 93478
26.06.01
"BRUZESI, NAZARENO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Otorgamiento del beneficio. Derechos adquiridos. Reducción del haber.

En materia previsional, los derechos adquiridos están referidos al estado de jubilado y no al monto del haber. Así lo ha entendido la C.S.J.N. al sostener que no existen derechos adquiridos en cuanto al contenido económico de los beneficios previsionales, por lo que pueden ser disminuidos siempre que la reducción que se realice no importe desconocer, suprimir o alterar los derechos acordados, sino sólo rebajar para el futuro el monto del haber (cfr. sent. del 30.03.93, "Gay, Enriqueta Isabel").

C.F.S.S., Sala I
sent. 93478

26.06.01
"BRUZESI, NAZARENO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

Liquidación errónea. Diferencias. Percepción de buena fe. Art. 786 Código Civil.
Dado el carácter alimentario que revisten los haberes previsionales -necesarios para la subsistencia del titular-, y teniendo en cuenta que éste no incurrió en una actitud fraudulenta a efectos de percibir las diferencias surgidas de la liquidación erróneamente practicada, al haber sido percibidos y consumidos de buena fe en los términos del art. 786 del Código Civil, corresponde considerarlos de legítimo abono por lo que no procede el recupero pretendido por el organismo.

C.F.S.S., Sala I
sent. 93478

26.06.01
"BRUZESI, NAZARENO c/ A.N.Se.S."
(D.-M.-Ch.)

REGÍMENES ESPECIALES

Personal de ENCOTEL. Ley 23.429. Edad jubilatoria. Reducción. Otorgamiento del beneficio.

La ley 23.429 -que tuvo por objeto alterar los alcances del acuerdo plenario nº 246 de la C.N.A.T., recaído en los autos "Rivero, Domingo" (17.09.84)- consideró privilegiados los servicios prestados por el personal de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos durante el lapso que estuvo vigente la ley 12.925. En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" que hizo lugar a la pretensión del titular de que se le computaran como privilegiados los servicios desempeñados para ENCOTEL, reduciendo la edad jubilatoria requerida para obtener el beneficio de jubilación ordinaria.

C.F.S.S., Sala II
sent. 83191

31.05.01
"PETER, JOSÉ ULISES c/ A.N.Se.S."
(E.-F.-H.)

RIESGOS DEL TRABAJO

Accidente sufrido fuera de la República Argentina. Dec. 491/97, art. 17. Dec. 334/96, art. 11. Recaudos.

Verificados los recaudos dispuestos por el art. 17 del Dec. 491/97 -mediante el cual se incorpora a continuación del primer párrafo del art. 11 del Dec. 334/96 la obligación de que las aseguradoras dispongan los medios necesarios para el otorgamiento de la prestación de urgencia fuera de la República Argentina-, debe concluirse que no obstante no haberse comunicado a la aseguradora la salida del país de sus asegurados, en virtud del principio de verdad jurídica objetiva y a fin de evitar un excesivo rigor formal, dicha circunstancia no resulta atendible a fin de denostar el beneficio que le corresponde a la actora por el accidente sufrido.

C.F.S.S., Sala I
sent. 93639

18.07.01
"MARIN, CLAUDIA ALICIA c/ Berkley International A.R.T. S.A."
(M.-D.-Ch.)

Comisiones médicas provinciales. Resolución. Recursos.

La resolución dictada por las comisiones médicas provinciales "... será un acto administrativo que, en cuanto emana de un organismo del gobierno nacional, deberá naturalmente cuestionarse ante la justicia federal ..." (cfr. Akerman - Maza, "Ley sobre riesgos del trabajo. Aspectos constitucionales y procesales"). Acordado entonces que han de entender, en materia de riesgos del trabajo y ante discrepancias con lo dispuesto por la Aseguradora, las comisiones médicas provin-

ciales, sus decisiones podrán ser recurridas ante los jueces federales con competencia provincial o bien ante la Comisión Médica Central (art. 46, ley 24.557).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 52197

19.07.01

“GATICA VERGARA, COPERNICO BITELIO c/ Asociart A.R.T.”

(M.-D.-Ch.)

Ley 24.557, art. 46. Planteo de inconstitucionalidad. Improcedencia.

El planteo de inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 para que se derive la controversia al ámbito de la justicia laboral ordinaria resultará inatendible cuando la parte actora requirió expresamente, en su oportunidad, la intervención de la Comisión Médica jurisdiccional y que se siguiera el procedimiento impuesto por dicha normativa, no ofreciendo en su momento oposición al respecto (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 12.03.01, “Díaz, Sergio Domingo c/ Asociart A.R.T.”). En tal sentido, la C.S.J.N. ha sostenido que el voluntario sometimiento a un régimen jurídico sin reserva expresa, determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional (cfr. sent. del 06.02.90, “Colombo Murúa, Marcelo c/ Estado Nacional”).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 52197

19.07.01

“GATICA VERGARA, COPERNICO BITELIO c/ Asociart A.R.T.”

(M.-D.-Ch.)

Decisión de la C.M.C. Temas no debatidos. Derecho de defensa en juicio y debido proceso.

Corresponde dejar sin efecto lo decidido por la Comisión Médica Central si de las constancias de autos se desprende que, lejos de atender a la cuestión litigiosa debatida (en el caso, el derecho de la trabajadora a recibir las prestaciones en especie a cargo de la aseguradora, conforme se había expedido la Comisión Médica jurisdiccional de Comodoro Rivadavia), vulnera el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, pronunciándose sobre el porcentaje de incapacidad padecido por aquélla, aspecto que había sido objeto de decisión por otra Comisión Médica jurisdiccional (en el caso, de Rosario), cuyas conclusiones se encontraban firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72167

22.06.01

“WILHJEIM, GRISELDA CRISTINA c/ Asociart A.R.T. S.A.”

(F.-L.-M.A.)

Demanda de conocimiento. Competencia. Ley 24.557.

Ocurrido el accidente durante la vigencia de la ley 24.557, conforme lo normado por el art. 46 de ese ordenamiento será la C.F.S.S. la competente para entender en razón de la materia. Ahora bien, si el peticionante presentó una demanda de conocimiento pleno, el Tribunal deberá declarar su incompetencia en razón del grado y remitir las actuaciones a la Mesa General de Entradas para que sea sorteado a los Juzgados de Primera Instancia de la Seguridad Social; donde el juez designado evaluará si se reúnen los requisitos de admisibilidad y agotamiento de la vía administrativa previa, conforme lo normado por la referida ley 24.557. (Del dictamen Fiscal, al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72273

25.06.01

“ARIAS, JUAN MAORILLO c/ S. Leone e Hijos S.R.L. y otro”

(F.-M.A.-L.)

Grado de incapacidad. Homologación. Consentimiento. Apelación. Improcedencia.

El recurso de apelación deducido por el recurrente ante el Tribunal -al igual que el interpuesto ante la C.M.C.-, circunscripto a obtener la elevación de la incapacidad declarada, no ha de tener acogida favorable si aquél no adujo ni probó haber expresado en forma adecuada y tiempo oportuno, disconformidad alguna con el grado de incapacidad permanente, parcial y de carácter definitivo reconocida por el accidente de trabajo (según constancia emanada de la Oficina de Homologación y Visado), ni desconoció haber percibido la prestación dineraria resultante; de modo que su embate actual sobre el particular no pasa de ser una reflexión

tardía, y por lo tanto, inconducente para variar los alcances y efectos de cosa juzgada de lo ya homologado y consentido por la propia parte interesada, asumiendo de ese modo una conducta procesal inadmisibles por incongruente y contradictoria con su propio accionar anterior.

C.F.S.S., Sala III

sent. 78383

25.06.01

“CAUHEPE, ADOLFO c/ La Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A. y otro”
(F.-M.A.-L.)

Indemnización por muerte. Competencia.

Corresponde declarar la incompetencia del Tribunal y remitir las actuaciones a la Justicia Ordinaria que resulta competente, si lo que se pretende es el pago de indemnizaciones por muerte derivada del accidente laboral -en el caso, chofer de corta distancia- y demás rubros que legítimamente corresponden por derecho. En este sentido, el Sr. Procurador General de la Nación “Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c/ Gerialeph S.A. s/ Cobro de Aportes y Contribuciones” (C.S.J.N., sent. del 21.05.98) señaló “no se puede, transgrediendo el orden público implicado en las normas sobre competencia, dotar de una jurisdicción material a quien no la posee normativamente, principio que eventualmente alcanza tanto a la jurisdicción civil y comercial como a la de seguridad social”. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 79288

20.07.01

“BORDATTO, NORA GRISELDA c/ Colman, Néstor Adrián”
(M.A.-L.-F.)

Ley 24.457. Indemnización por accidente. Competencia.

La ley 24.557, en sus arts. 6,7,8,14,20 y 21, regula la situación del reclamo de una indemnización en virtud de un accidente de trabajo, asignando competencia para la determinación de la incapacidad a las Comisiones Médicas creadas por la ley 24.241 y, en caso de disconformidad con lo dictaminado, la norma prevé en su art. 46 la posibilidad de recurrir ante los juzgados federales con competencia en provincia, y posteriormente ante la C.F.S.S. En consecuencia, no habiéndose seguido dicho procedimiento, y en atención a que la pretensión no encuadra dentro de las disposiciones previstas por el art. 39 bis del Dec. 1285/58, modificado por el art. 26 de la ley 24.463, corresponde desestimarla por improcedente haciendo saber al interesado que deberá encausar la acción en la forma prevista por la normativa citada (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 13.11.98, “Bernigaud, Teresa Edelmira c/ Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72539

20.07.01

“ARROYO, BERNABÉ RENÉ c/ Dirección Provincial de Vialidad”
(L.-F.-M.A.)

Resolución de la C.M.C. Apelación. Art. 256 C.P.C.C. Aplicación. Acordada nº 200 de la C.F.S.S.

El art. 256 del C.P.C.C. (de aplicación conforme lo establecido por el art. 1 de la Acordada nº 200 de la C.F.S.S. -19.08.00-, reglamentaria del procedimiento a seguir en el trámite de los expedientes que provienen de la Comisión Médica Central), prescribe que el escrito de expresión de agravios deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación si el titular no demostró el perjuicio que el pronunciamiento que ataca le causa.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 51876

10.05.01

“HERRERA, HÉCTOR BELISARIO c/ Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda.”
(F.-H.-E.)

SERVICIO DOMÉSTICO

Acreditación. Prueba. Testimonial.

Tratándose de personal doméstico con servicios de antigua data, frente a la falta de prueba documental convictiva y contundente se deberá acudir a la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales, las que serán ponderadas con precisión, teniendo en cuenta que siendo la privacidad del hogar el ámbito donde se desarrollan las tareas domésticas, no puede pretenderse que los testigos depongan detalladamente respecto de las actividades desempeñadas por la peticionante (cfr. C.N.A.S.S., sent. del 06.04.92, "García, Ceferina"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83526

03.07.01

"MARTIÑO FERNÁNDEZ, MARÍA ALFONSA c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Acreditación. Prueba. Testimonial.

La prueba testimonial, por sí sola, resulta insuficiente para tener por acreditados, a los fines previsionales, el tiempo de servicio cuyo reconocimiento se persigue. Ello es explicable si se tiene en cuenta que, a través de dicha prueba, podrían cometerse toda clase de excesos. Al respecto, Ramírez Gronda ha expresado que "habría sido posible mediante testigos complacientes, fabricar antigüedades con sospechosa frecuencia" (cfr. Goñi Moreno, José, "Derecho de la Previsión Social", T. II, pág. 119). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83526

03.07.01

"MARTIÑO FERNÁNDEZ, MARÍA ALFONSA c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

Acreditación. Prueba. Testimonial.

De pruebas de menguada consistencia no puede, ni deben, derivarse interpretaciones amplias que conduzcan a otorgar beneficios en exceso no sólo de la ley específica, sino también de los fundamentos en que se sustentan los principios de la Seguridad Social. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83526

03.07.01

"MARTIÑO FERNÁNDEZ, MARÍA ALFONSA c/ A.N.Se.S."

(E.-H.-F.)

SERVICIO EXTERIOR, PERSONAL DEL

Haberes previsionales. Suplementos. Dec. 1885/92. Prescripción.

Procede hacer lugar la excepción de prescripción, cuando a la fecha de interposición de la demanda han transcurrido los dos años que establece el art. 82, 3er. párrafo, de la ley 18.037 -norma específica del sistema previsional- vigente por aplicación del art. 168 de la ley 24.241. En consecuencia, corresponde tener por operada la prescripción de la obligación de pagar las diferencias pretendidas por la peticionante respecto del suplemento creado por el Dec. 1885/92 (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala III, sent. del 15.06.95, "Ormaechea, Héctor Luis").

C.F.S.S., Sala I

sent. 94119

17.08.01

"ILLA DE MACKINTOSCH, ADELA ELIDA c/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto"

(M.-D.-Ch.)

SERVICIOS

PRUEBA

Certificado. Empleador. Firma.

Quien firma de puño y letra un documento en el que se certifica como empleador un período laborado, no puede desconocer la entidad de lo que firma, máxime si figuran claramente datos referidos exclusivamente a una persona determinada (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 22.10.93, “Giménez, Yolanda”; ídem, sent. del 26.11.93, “Sosinowicz, Carlos”).

C.F.S.S., Sala II

sent. 83195

31.05.01

“CAZAUX, NELLY EMILCE c/ A.N.Se.S.”

(E.-H.-F.)

RECONOCIMIENTO

Directores de sociedades. Relación de dependencia.

Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido que “la determinación del régimen previsional aplicable a los socios de una sociedad anónima (como dependientes o autónomos), depende de que los mismos se encuentren o no en relación de dependencia con la sociedad” (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 14.09.93, “Lacau S.A.A.G.I. de Inversiones y Finanzas”; ídem, sent. del 04.06.92, “Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.”). Por ello, no demostrado que el peticionante desarrollara tareas de dirección con poder de decisión, debe confirmarse lo resuelto por el “a quo” que reconoció los servicios como prestados dentro del régimen de la ley 18.037.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83237

31.05.01

“SCAGLIA, OSVALDO HÉCTOR c/ A.N.Se.S.”

(F.-E.-H.)

Sociedad conyugal.

Lo dispuesto por el art. 1218 del Cód. Civil encuentra su explicación en la circunstancia que la labor que despliegan la esposa o esposo en favor de la sociedad conyugal que integra con su cónyuge a partir del acto nupcial (arts. 1261 y 1764 Cód. Civ.), y de allí que entre ellos no pueda existir contrato que cree una relación de trabajo en los términos de los arts. 21 y 22 de la L.C.T (cfr. Vázquez Vialard, A., “Tratado de Derecho del Trabajo”, T. III, pág. 444). Ello así porque, aunque el establecimiento donde trabajaba el peticionante fuera bien propio del esposo, los frutos son gananciales (art. 1272 Cód. Civil), y gananciales habrían sido también los salarios percibidos. Tal confusión patrimonial hace imposible la ajenidad, que es de la esencia del contrato de trabajo.

C.F.S.S., Sala I

sent. 93917

13.08.01

“SEGUROTTI, LUCIANA c/ A.N.Se.S.”

(D.-M.-Ch.)

Sociedad conyugal.

La afirmación de la peticionante de que a la fecha en que fueron prestadas las tareas para el establecimiento del que era titular su esposo -y que intenta hacer valer como en relación de dependencia- se encontraba separada de hecho de éste en nada enerva la resolución que denegó el reconocimiento, ya que tal circunstancia no altera el vínculo matrimonial que se mantenía subsistente.

C.F.S.S., Sala I

sent. 93917

13.08.01

“SEGUROTTI, LUCIANA c/ A.N.Se.S.”

(D.-M.-Ch.)

Sociedad conyugal.

Corresponde confirmar el pronunciamiento por el cual se deniega a la recurrente el beneficio de jubilación ordinaria, en virtud de considerarse imposible admitir como existente el contrato de trabajo invocado entre la peticionante y su esposo (cfr. C.S.J.N., “Piccioni de Bouzas, Ofelia Hilda”, Fallos 292:400). Ahora bien, como señalara el Alto Tribunal en el precedente citado, ello no es óbice para el cónyuge que realizó una actividad lucrativa en beneficio de la sociedad conyugal -actividad por la que se efectuaron los correspondientes aportes y contribuciones de la seguridad social- se la estime cumplida por cuenta propia, considerando como autónomos los servicios del período en cuestión.

C.F.S.S., Sala I

sent. 93917

13.08.01

“SEGUROTTI, LUCIANA c/ A.N.Se.S.”

(D.-M.-Ch.)

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Deudas por aportes. Exigibilidad. Regularización voluntaria. Ley 24.476. Acción de amparo. Procedencia.

Debe conformarse lo resuelto por el “a quo” que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor, y ordenó a la A.F.I.P. - D.G.I. materializar el pedido de regularización voluntaria de deuda contenida en el Capítulo II de la ley 24.476, ya que dicha norma se encuentra vigente, resultando facultativa para la D.G.I. su reglamentación en la medida que sea necesario (art. 12), de lo que se desprende “a contrario sensu”, que al no reglamentarse la ley en examen, el organismo recaudador considera que el texto de la norma posee operatividad desde el momento de su vigencia, y es lo suficientemente claro para ofrecer duda alguna al respecto. Además, el argumento expresado por el organismo de que debería aplicarse el art. 74 del Dec. 1397/79 -reglamentario de la ley 11.683- no tiene sustento jurídico, pues la vía recursiva administrativa allí establecida no es aplicable a la materia tributaria de la seguridad social, por disposición del Dec. 2102/93. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 79388

16.08.01

“MATTIACCI, NELIDA ADORNA c/ A.F.I.P. - D.G.I.”

(L.-M.A.-F.)

II- PROCEDIMIENTO

ACCIÓN DECLARATIVA

Medida cautelar. Procedencia.

La medida cautelar se reduce a asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que debe recaer en el proceso, y se concede para asegurar la providencia definitiva. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución del “a quo” que hizo lugar a dicha medida, por la cual el titular de autos solicitó se ordenara a la empresa demandada se abstenga de extinguir la relación laboral mientras dure el proceso principal (en el caso, iniciado a fin de obtener una declaración de certeza respecto al régimen jubilatorio aplicable al actor). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52247

30.08.01

“CORRAL, JUAN CARLOS c/ Aerolíneas Argentinas S.A.”

(E.-F.-H.)

Medida cautelar. Improcedencia.

La medida cautelar exige la “verosimilitud del derecho”. Ello significa que es contradictoria con una acción declarativa que persigue despejar la incertidumbre sobre si éste existe o no (en el caso, el actor inició acción meramente declarativa, a fin de que la sentencia que se dicte deje establecido que el derecho para obtener una jubilación diferencial o especial -Dec. 4257/68- es exclusivo del trabajador y no del empleador, por lo que hasta que no formule petición en ese sentido debe continuar en actividad). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52247

30.08.01

“CORRAL, JUAN CARLOS c/ Aerolíneas Argentinas S.A.”

(E.-F.-H.)

APODERADOS Y GESTORES

Derecho a la información. Incumplimiento del organismo administrativo. Acción de amparo. Procedencia.

Quedando en claro que la administración cumplió a regañadientes su deber de informar al profesional accionante sobre la situación física de los expedientes y el estado de la cuenta de los bonos de consolidación de deuda previsional (no sin antes cuestionar la legitimación del actor, la temporaneidad de su planteo y la vía elegida, al contestar el informe que el juez de la anterior instancia solicitó), dicha circunstancia pone un serio manto de dudas sobre la conducta futura del organismo frente a similares peticiones que pudiera formular el actor de estos u otros acreedores sociales. En consecuencia, y sin perjuicio de que la información que dio origen al amparo fue proporcionada durante su transcurso, ello no importa que el derecho a la información del accionante quedó sincrónicamente restaurado “in integrum” si se repara en que la condición de profesional especializado en derecho previsional que ostenta lo lleva a requerir constantemente información relativa a los casos que patrocina, y nada hace suponer que la accionada no vuelva a incurrir en actitudes similares cuando una información de tal naturaleza le fuera requerida. Por ello, dado el carácter de las causas tramitadas por el actor en su calidad de letrado apoderado, el tiempo que demanda la tramitación de las mismas y en salvaguarda de derechos constitucionales como el de libre ejercicio de la profesión -art. 14 de la C.N.-, corresponde confirmar la decisión del “a quo” que hizo lugar a la acción de amparo y condenó a la A.N.Se.S. a otorgar al letrado la información que requiera en calidad de abogado y en ejercicio de su profesión. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 52130
20.07.01

“MARTÍNEZ, HORACIO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. - Ministerio de Trabajo”
(E.-H.-F.)

Derecho a la información. Incumplimiento del organismo administrativo. Acción de amparo. Improcedencia.

Si el organismo puso a disposición del recurrente la información requerida y que diera motivo a la acción intentada, debe concluirse que la cuestión debatida se ha tornado abstracta al haber quedado agotado el litigio por el cumplimiento de su objeto. Ello así, porque es requisito de admisibilidad del recurso de apelación que lo decidido ocasione a quien lo interpone un perjuicio cierto y actual (cfr. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil” T. V, pág. 85/86, cit. C. Civ. y Com. Fed., Sala 2, sent. del 24.11.98, “S.C. Hohnson & Son Inc. c/ Clorox Argentina S.A.”), y los agravios meramente conjeturales o futuros son inatendibles, porque es requisito de admisibilidad de la apelación que el fallo ocasione a quien lo interpone un perjuicio actual (cfr. C.Civ. y Com. Fed., Sala 2, sent. del 29.10.98, “Aguaro, José Arturo y otro c/ O.S.I.M.”). En esa línea de pensamiento, no resulta atendible el agravio vinculado a la presunta ineficacia del trámite administrativo o la presunción de la conducta futura del órgano previsional con sustento, fundamentalmente, en una conjetural desconfianza por la actitud que asumiría la administración ante las peticiones que se deduzcan; situaciones éstas que, de producirse, dejarán expeditas al profesional las acciones -civiles o incluso penales- que las repela o encauce, procedimientos, en fin, hábiles para evitar la posible reiteración de cuestiones como las que motivaron la presente causa (derecho del letrado a obtener la información necesaria para el ejercicio de su gestión) y que, en todo caso, corresponde al perjudicado adoptar y no al Tribunal prever como eventual posibilidad de juzgamiento. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 52130
20.07.01

“MARTÍNEZ, HORACIO ENRIQUE c/ A.N.Se.S. - Ministerio de Trabajo”
(E.-H.-F.)

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Tasa de justicia. Improcedencia. Impugnación de deuda.

El ordenamiento de forma ha dejado librada a la valoración del juez, conforme las circunstancias del caso y la época, el determinar cuando ciertas personas carecen de medios suficientes para afrontar el pago de los gastos causídicos que pueda ocasionar un pleito concreto (cfr. Enrique Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado” T. I, pág. 475; Morello-Sosa-Berozonce, “Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. Aires y de la Nación ...”, T. II-B, págs. 281/282 y sus citas; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, “Galeano, Adolfo c/ Jefe del Estado Mayor Gral. del Ejército”). En consecuencia, siendo criterio del Tribunal, en materia de impugnación de deuda, imponer las costas por su orden, el único objetivo para tramitar el beneficio de litigar sin gastos sería la reposición de la tasa de justicia, por lo que no corresponde -en el caso- hacer lugar al mismo, atento la multiplicidad de actividades desarrolladas por el recurrente.

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 52155
19.07.01

“WASSERMAN, LEÓN c/ A.F.I.P. - D.G.I.”
(Ch.-M.-D.)

COSTAS

Amparo por mora de la administración. Ley 24.463, art. 21. Inaplicabilidad a la

A.F.J.P.

Sin perjuicio de dejarse a salvo la opinión en favor de la imposición de costas al organismo, reiteradamente expresada en los amparos por mora de la administración (cfr. entre otros, sent. del 29/12/97, “Luoni, Jorgelina” y sent. 6/07/98, “Espíndola, Jorge Raúl”), razones de celeridad y economía procesal aconsejan hacer aplicación de la doctrina sentada al respecto por la C.S.J.N en el fallo del 17/07/99, “Ortiz, Luis Irineo”, que al revocar lo decidido por la Sala en el sentido antes indicado, impuso las costas por su orden. Por el contrario, no existe motivo alguno para modificar la condena en costas a la AFJP, toda vez que ella no se encuentra comprendida en los alcances del art. 21 de la ley 24.463, por lo que su situación queda regida por la regla general contenida en el art. 68 del C.P.C.C. . Ello así, máxime si se advierte que la administradora de fondos actuó como gestora ante la A.N.Se.S., sin acreditar su diligencia en haber instado al organismo a expedirse.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72842

31.08.01

“PALACIO, JUAN BAUTISTA c/ A.N.Se.S.”

(F.-M.A.)

Excepción de pago parcial. Art. 558, ap. segundo, C.P.C.C.

Si la sentencia hizo lugar a la excepción de pago parcial opuesta por el ejecutado, corresponde sea revocada en tanto impuso las costas por su orden (cfr. art. 558, apart. segundo, C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72270

25.06.01

“O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Ayacucho 2062”

(M.A.-F.-L.)

DEMANDA

Notificación. Copias para traslado.

La falta de copias o las deficiencias que adolezcan las mismas, sólo confieren el derecho a solicitar la suspensión del término para evacuar el traslado hasta que se subsanen los vicios u omisiones incurridas, sin que ninguna de estas circunstancias autorice a solicitar la aplicación de la sanción prevista en el art. 120 del C.P.C.C. (cfr. C.N.A.Civ., Sala A, L.L. 134-1038, sum. 20038). En consecuencia, surgiendo de las constancias de autos que el escrito de demanda fue interpuesto sin copias, circunstancia que coloca al organismo administrativo en indefensión toda vez que le resulta imposible hacer valer sus derechos, corresponde declarar la nulidad de la notificación cursada y suspender el plazo para contestar demanda hasta tanto el juez de grado intime al actor a acompañar copia de la misma. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52060

12.07.01

“SCOPESE, ALBERTO ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(E.-H.-F.)

Notificación. Copias para traslado.

El art. 149 del C.P.C.C. establece que si de las constancias de autos resultare que la parte tomó conocimiento del escrito que no había sido notificado conforme a la ley, la notificación surtirá efectos desde ese momento. Por ello, la presentación del organismo en autos implica el conocimiento de las actuaciones anteriores, por lo que no corresponde declarar nula la notificación de la demanda por el sólo hecho de haberse llevado a cabo sin las respectivas copias, ya que no hubo obstáculo para contestar y esgrimir sus fundamentos en esa intervención. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52060

12.07.01

“SCOPESE, ALBERTO ANTONIO c/ A.N.Se.S.”

(E.-H.-F.)

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Arts. 499 y siguientes C.P.C.C. Acción de amparo. Amparo por mora de la administración. Improcedencia.

Existiendo un proceso de ejecución de sentencia legislado por el art. 499 y sgts. del C.P.C.C., resulta ser éste el medio para que, por obra de los órganos judiciales del Estado y a través del empleo de las medidas coactivas correspondientes al tipo de obligación de que se trate, se sustituya la ejecución forzada a la ejecución voluntaria (cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil, Tº VII, págs. 209/210). En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" que rechazó "in limine" la acción de amparo intentada, por considerarla inadmisibles ante la existencia de otra vía judicial más idónea, como la continuación del expediente donde se dictó la sentencia por el procedimiento de ejecución antes indicado; y asimismo entendió que tampoco el caso podía encuadrarse en el art. 28 de la ley 19.549, pues dicha norma se refiere a los casos en que el organismo guarda silencio ante un reclamo administrativo, y no puede asimilarse a la falta de cumplimiento en tiempo y forma a una orden judicial firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 71863

11.05.01

"LONGO, AMALIA DEL CARMEN IRMA c/ A.N.Se.S."

(F.-L.-M.A.)

Competencia.

En atención a que no existe disposición expresa acerca de cual es el juez competente respecto de las ejecuciones de sentencia dictadas en virtud de la ley 24.463 o de las leyes anteriores sobre la materia, corresponde integrar la referida ley 24.463 y la ley 24.655 con las reglas generales que, sobre competencia, contiene el C.P.C.C., que en su art. 6, inc. 1) establece como regla especial de competencia que, a falta de otras disposiciones, será juez competente "... ejecución de sentencias ... el del proceso principal". (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 71915

24.05.01

"CARRARA, AURELIO c/ A.N.Se.S."

(M.A.-L.-F.)

Cosa juzgada. Liquidación. Ley 18.037. Vigencia.

Lo resuelto en la sentencia definitiva no puede ser modificado en la etapa de ejecución, pues ello implicaría violentar un pronunciamiento judicial firme con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, surgiendo de los términos de la sentencia que se ejecuta, que el mecanismo de movilidad ordenado perdurará "... en el período posterior al reclamado y mientras rija el actual sistema...", corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" que ordenó efectuar liquidación teniendo en cuenta los índices dispuestos en el decisorio hasta el mes de abril de 1994, fecha en que fue sustituido el régimen de la ley 18.037 por el de la ley 24.241.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52175

23.08.01

"POLLAN, MARCELINO c/ A.N.Se.S."

(H.-E.-F.)

Incidente de ejecución. Fianza. Art. 258 C.P.C.C.

El art. 258 del C.P.C.C. autoriza la ejecución de la sentencia condenatoria cuando el vencido interpone recurso extraordinario, siempre y cuando exista concordancia entre el fallo de primera instancia y el pronunciamiento de la Cámara; correspondiendo a la Alzada que concede el recurso estimar la fianza de acuerdo con las circunstancias del caso, previéndose asimismo que ella quedará cancelada si la Corte declara improcedente el recurso o confirma la sentencia recurrida - cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág-824/5-. (Del dictamen Fiscal). En consecuencia, corresponde ordenar se certifi-

quen por Secretaría copias de las piezas pertinentes para su presentación por la parte actora ante el juzgado de primera instancia, el que procederá a formar el incidente respectivo y dará curso a la ejecución pretendida, previa verificación del cumplimiento de la fianza que establezca. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia)

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72300

29.06.01

"POBLETE, ROBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa"

(L.-F.-M.A.)

Incidente de ejecución. Fianza. Art. 258 C.P.C.C.

Corresponde no hacer lugar a la formación del incidente de ejecución solicitado cuando, si bien existe concordancia entre la sentencia de primera instancia y la pronunciada por la Cámara, no se ha ofrecido la fianza exigida por la norma del art. 258 del C.P.C.C. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72300

29.06.01

"POBLETE, ROBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa"

(L.-F.-M.A.)

Pronto despacho. Astreintes. Improcedencia.

La orden de pronto despacho emitida por el Tribunal no puede ser considerada como una orden de pronto pago de los potenciales créditos previsionales que tuviese el actor, no pudiendo tampoco hablarse de morosidad administrativa como para justificar el reconocimiento en beneficio de aquél de un crédito en concepto de astreintes o multa por desidia de la administración; máxime cuando no se discute que el crédito previsional adeudado al actor fue cancelado bajo el sistema previsto por las leyes 23.982 y 24.130.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52189

24.08.01

"RODRIGUEZ, RODRIGO FRANCISCO MANUEL SALVADOR c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

Pronto despacho. Astreintes. Improcedencia.

Si el crédito previsional fue cobrado por el actor -comprendiendo capital e intereses- conforme las prescripciones de las leyes 23.982 y 24.130, no se advierten razones objetivas que justifiquen el reconocimiento de su derecho al cobro de una suma que triplica el monto del crédito original (en el caso, \$ 82.028.- y \$ 283.238,45.- respectivamente), lo que revela la exorbitancia del reclamo formulado y la utilización abusiva del sistema de multas judiciales para lograr el enriquecimiento sin causa del potencial acreedor.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52189

24.08.01

"RODRÍGUEZ, RODRIGO FRANCISCO MANUEL SALVADOR c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

EJECUCIÓN FISCAL

Apelación. Improcedencia.

El párrafo 7 del art. 92 de la ley 11.683 -aplicable al caso de autos en virtud de lo dispuesto por los arts. 1 del Dec. 2102/93 y 29 del Dec. 507/93-, en cuanto declara inapelable la sentencia de ejecución, no lesiona de por sí la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional toda vez que, por regla, la exigencia de más de una instancia no es requisito constitucional (cfr. Fallos 247:646, cons. 20; 249:181; 253:485; 255:357; 300:1084; 302:1415; 306:1124; 307:966).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52245

30.08.01

"FISCO NACIONAL - D.G.I. c/ Carpaneto, Enrique Rubens "

(E.-F.-H.)

ESCRITOS

Presentación errónea. Error excusable.

La jurisprudencia ha sostenido que “el error en que se incurre al presentar un escrito en una Secretaría distinta de aquella en que el juicio tramita debe ser inexcusable, bastando que exista una causa real que pudiera haber inducido a error al presentante para que el escrito sea agregado válidamente al expediente...” (cfr. C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 01.04.97, “Afinco S.A. c/ Sigal, Mauricio”). En consecuencia, no podrá considerarse extemporánea la presentación efectuada cuando, como en el caso de autos, tanto el mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate, como el sello del Juzgado, no hacen referencia al número de secretaría en que tramita la causa, por lo que la presentación en una secretaría errónea deberá considerarse un error excusable. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72195

22.06.01

“OBRA SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES c/ Fontana Nicastro S.A.C.”

(M.A.-F.-L.)

EXCEPCIONES

Litispendencia. Por conexidad.

La excepción de litispendencia no procede solamente cuando dos procesos en trámite presentan identidad de partes, causa y objeto, sino también cuando sea procedente la acumulación de los mismos, estos es, litispendencia por conexidad (cfr. Fallos 314:811; 315:1617; 319:1397 y sent. del 09.11.00, “Distribuidora Química S.A. c/ E.N.”).

C.F.S.S., Sala I,

sent. int. 52117

11.07.01

“A.N.Se.S. c/ Biondic, José”

(Ch.-M.-D.)

Litispendencia. Por conexidad.

Resulta manifiesta la vinculación entre un proceso en que la A.N.Se.S. pretende el recupero de las sumas de dinero pagadas indebidamente -en razón de haber continuado el titular en actividad luego de acceder al beneficio jubilatorio- y la acción de amparo iniciada por éste persiguiendo la revocación de la resolución administrativa por medio de la cual se dispuso dar de baja el beneficio oportunamente acordado. En consecuencia, existiendo identidad de partes y la posibilidad de que la sentencia a dictarse en uno de los litigios pudiera producir en el otro el efecto de la cosa juzgada o fallos contradictorios, corresponde admitir la excepción de litispendencia (cfr. arts. 188, 347 inc. 4, 354 inc. 3 y conc. C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala I,

sent. int. 52117

11.07.01

“A.N.Se.S. c/ Biondic, José”

(Ch.-M.-D.)

HONORARIOS

Ámbito previsional. Letrados. Leyes 17.040, 21.839 y 24.463.

La ley 17.040 fue prevista para la actuación en el ámbito previsional de naturale-

za esencialmente administrativa, y se aplicó análogamente por los tribunales en aquellos supuestos en que la litis se desarrollaba exclusivamente por vía recursiva y no en demandas de conocimiento. La nueva legislación que instauró el procedimiento sumario y, en tal carácter, subordinó el litigio a las normas procesales comunes, lleva a la aplicación de las disposiciones arancelarias que rigen la actividad profesional en sus distintas especialidades y, en lo atinente a los letrados, a la ley 21.839, cuya vigencia obligatoria no ha sido afectada por la norma previsional (ley 24.463).

C.F.S.S., Sala II

sent. 84043

30.08.01

“MENDOZA, NOEMIR AMELIA c/ A.N.Se.S.”

(E.-H.-F.)

Convenio de honorarios. Ejecución. Competencia.

No es ante la Alzada donde se debe resolver la cuestión en que el letrado solicita la ejecución del convenio de honorarios suscriptos con la actora. Ello así, por cuanto del juego armónico de los arts. 6, inc. 1) y 501, inc. 3) del C.P.C.C., se desprende que en las regulaciones de honorarios será juez competente el del proceso principal. Incluso, se ha sostenido que la normativa citada se refiere tanto a los honorarios regulados por el juez como a los convenidos extrajudicialmente, siendo dicha solución una aplicación del principio de la “perpetuatio jurisdictiones”, en virtud de la cual cada vez que un nuevo proceso es consecuencia de otro precedente, debe mantenerse la competencia del órgano que previno (cfr. C.N.A.Civ., Sala F, E.D. 100-779; íd. Sala E, sent. del 22.09.92, “Pubul, Martín c/ Martino, R.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 79382

16.08.01

“ALLENDE, JOSÉ ANTONIO Y OTROS c/ Estado Nacional - A.N.Se.S.”

(M.A.-F.-L.)

Imposición. Peritos. Art. 478 C.P.C.C.

Corresponde revocar la sentencia que impuso a cargo de la demandada el 50 % del monto de los honorarios profesionales regulados al perito contador -cuya intervención en autos fue solicitada por la parte actora-, si al contestar aquélla manifestó su desinterés en la producción de la pericia, y el fallo no hizo mérito de ésta para resolver a su favor (cfr. art. 478, último párrafo, C.P.C.C.).

C.F.S.S., Sala I

sent. 93968

14.08.01

“PEZ, RAMÓN DOMINGO c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-D.-M.)

Peritos. Tareas realizadas. Valoración. Ley 24.432.

En el actual régimen de la ley 24.432, los honorarios de los peritos pueden ser establecidos en un monto inferior al determinado en la norma arancelaria, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes indicaren que la aplicación lisa y llana de los mínimos ocasionará una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo cumplido y la retribución que les correspondiera en virtud de las normas arancelarias (art. 13, ley citada).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 51390

14.06.01

“BACHMANN DE GALARZA, JULIA ESTHER Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior”

(F.-E.-H.)

Recursos. Apelación. Improcedencia. Ausencia de interés jurídico.

Si el magistrado de grado se pronunció acerca de las costas, imponiéndolas en el orden causado -decisión que no fue cuestionada-, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la regulación de honorarios practicada a la dirección letrada patrocinante de la actora por considerarlos elevados, en razón de la ausencia de interés jurídico de dicha parte.

C.F.S.S., Sala I

sent. 94118

17.08.01

“CHIAVASSA DE SCOTTI, OLGA DELFINA c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”
(M.-D.-Ch.)

Regulación. Cuestionamiento. Legitimación.

Sólo el beneficiario del honorario está legitimado para plantear su incremento, por lo que las impugnaciones efectuadas a nombre del mandante son inadmisibles (cfr. C.N.A.Civ. y Com. Santa Fe, Sala II, sent. del 14.05.83, “Carfagna, A.D. c/ Otero, C.R.”).

C.F.S.S., Sala II
sent. int. 52185

23.08.01

“GUTIÉRREZ, HERMES VICENTE c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa”
(F.-H.-E.)

Regulación. Leyes 21.839 y 24.432. Estandarización de reclamos.

En atención a las disposiciones de los arts. 6 y 7 de la ley 21.839 a la luz de lo prescripto por el art. 13 de la ley 24.432, así como que la C.S.J.N. ha sostenido que “la validez constitucional de los honorarios regulados no depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del litigante a quien incumbe su pago, pues asimismo interesa a la justicia de la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía intrínseca o por su complejidad, según los casos o la responsabilidad profesional que comprometen” (Fallos 253:456, 262:86, entre otros); que a los fines de una regulación justa “el monto de la causa no es el único elemento a considerar” (Fallos 421:202), puesto que la justicia debe proceder con especial cautela teniendo presente, al momento de regular los honorarios profesionales, las particularidades propias del caso, adecuando prudentemente las normas arancelarias vigentes (cfr. C.N.A.Civ., Sala L, sent. del 30.12.93, “Puente, Roberto A. c/ Ferniba S.A.”, pub. en J.A. 1994-IV-637); y que, desde tal enfoque, se aprecia la reiteración y estandarización de reclamos, donde la controversia se plantea en términos similares, la prueba es mínima y el contenido de las presentaciones en las etapas procesales trascendentes son de parecido y repetido tenor, corresponde regular los honorarios de la dirección letrada apoderada de la parte actora en el seis por ciento (6%) de las sumas resultantes, por la totalidad de la labor desarrollada en ambas instancias.

C.F.S.S., Sala I
sent. 94378

03.09.01

“MATA, NÉSTOR HUGO c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa”
(D.-M.-Ch.)

INHABILIDAD DE INSTANCIA

Reclamo administrativo previo. Ley 19.549. Ley 25.344. Reforma sustancial.

Con la sanción de la ley de emergencia económica 25.344, los arts. 30 a 32 de la ley de procedimiento administrativo fueron sustituidos, y en su nueva redacción se deduce que el reclamo administrativo previo se ha consagrado como requisito sine qua non para la posterior procedencia de la vía judicial, importando ello una reforma sustancial.

C.F.S.S., Sala I
sent. int. 52154

19.07.01

“ZENIQUEL, MARÍA LIDIA Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior”
(D.-M.-Ch.-)

Reclamo administrativo previo. Ley 19.549. Ley 25.344. Reforma sustancial.

Si bien las leyes sobre procedimiento son de orden público y se aplican a las causas en trámite, ello encuentra un escollo insalvable en aquellas situaciones en las que se podría llegar a privar de validez a los actos procesales cumplidos o dejar sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores, desnaturalizándose de tal modo el pleno goce de derechos que contaban con protección constitucional. Tal situación se configura en el caso que, al tiempo de comenzar a regir la reforma introducida por la ley 25.344 -que sustituyó los arts. 30 a 32 de la ley

procedimiento administrativo-, ya se encontrara trabada la litis (en el caso, el peticionante inició demanda fundando la inexistencia de reclamo administrativo previo en lo dispuesto por el art. 32, inc. e) de la ley 19.549).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 52154

19.07.01

“ZENIQUEL, MARÍA LIDIA Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior”

(D.-M.-Ch.-)

NOTIFICACIONES

Ministerio de ley. Libro de asistencia. Finalidad. Personas autorizadas a dejar nota. Art. 133 C.P.C.C.

Las notificaciones por ministerio de ley rigen para las partes y sus representantes. Por ello, una persona extraña al proceso no se encuentra autorizada para irrumpir en la causa dejando nota en el libro de asistencia a que hace referencia el art. 133 del C.P.C.C., ni de ella pueden extraerse consecuencias jurídicas para las partes (cfr. C.N.A.Civ., Sala H, sent. del 26.04.91, “S.E.B. c/ S.J.M.E.”).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 51881

11.05.01

“MOLINOS, DARÍO OSVALDO c/ A.N.Se.S.”

(F.-E.-H.)

NULIDADES

Planteo. Momento oportuno.

Los vicios de carácter procesal quedan subsanados por el transcurso del plazo pertinente. En efecto, la suerte del proceso no puede quedar indefinidamente expuesta a tales impugnaciones, por lo que la nulidad no procede cuando el acto ha sido consentido expresa o tácitamente por el interesado en su declaración (cfr. C.N.A.Civ., Sala K, sent. del 14.02.95, “M., A.R. c/ T.M.A.”). Vale decir que las nulidades procesales deben invocarse por vía de incidente (doct. arts. 149, 3er, párrafo, 170 y 172 del C.P.C.C.), en la instancia en que se hayan cometido, por lo cual la denuncia de ellas en el recurso de apelación viene a ser inadmisibles (cfr. Fenocchietto-Arafi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado”, pág. 682). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77748

20.05.01

“PANETH, PEDRO JULIÁN C/ A.N.Se.S.”

(M.A.-F.-L.)

OBRAS SOCIALES

Aportes y contribuciones. Fondo solidario de redistribución. Competencia.

Con la creación de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, en lo sucesivo deberán sustanciarse ante ella las pretensiones que se funden en normas integrativas del derecho de la seguridad social, tales como las relativas a créditos derivados del régimen de Obras Sociales. En consecuencia, surgiendo del escrito de demanda que la Obra Social (en el caso, del Personal de la Dirección Industria Privada del Petróleo) pretende se declare la nulidad de la resolución dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud respecto al cumplimiento de los depósitos del 15% al Fondo Solidario de Redistribución correspondientes a los aportes de los beneficiarios obligatorios, corresponde declarar la competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad

Social. (Del voto de la mayoría, El Dr. Fernández votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala II

sent. 52243

30.08.01

“OBRA SOCIAL PERSONAL DIRECCIÓN INDUSTRIA PRIVADA DEL PETRÓLEO c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros”

(E.-H.-F.)

Aportes y contribuciones. Fondo solidario de redistribución. Competencia.

La ley 24.655 (art. 2, inc. f) atribuyó competencia a los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social para entender en las causas asignadas a la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo por el art. 24 de la ley 23.660, atinentes, exclusivamente, al cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales y de las multas establecidas en dicha ley. La clara delimitación al conocimiento del Tribunal que ciñe la referida ley 24.655, no llevó al legislador a derogar normas como las leyes 23.660 y 23.661 (art. 38), que mantienen la jurisdicción federal en la materia en todas aquellas cuestiones no específicamente asignadas al fuero de la Seguridad Social. Esa subsistencia legal y específica de atribución de competencia a otros órganos judiciales de índole también federal, invalida todo cauce interpretativo que postule exorbitar el marco jurídico que rige a la C.F.S.S. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 52243

30.08.01

“OBRA SOCIAL PERSONAL DIRECCIÓN INDUSTRIA PRIVADA DEL PETRÓLEO c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros”

(E.-H.-F.)

Aportes y contribuciones. Fondo solidario de redistribución. Competencia.

Para determinar el fuero competente procede atender a la materia sobre la que versa el proceso. En este punto, la C.S.J.N. aplicó reiteradamente el criterio según el cual debía entender la justicia federal en los juicios en que estaba en juego la prestación de los servicios médicos asistenciales (cfr. C.N.A.Civ. y Com. Fed., in re “Centro Quirúrgico Cardiovascular c/ Obra Social del Personal de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento”; ídem, “Sociedad Italiana de Beneficencia c/ Obra Social del Personal de la Actividad Vitivinícola”, ambas del 15.06.89). En consecuencia, “... corresponde declarar la competencia del fuero civil y comercial federal y no la del fuero federal de la seguridad social cuando el objeto de la pretensión deducida no se relaciona con la materia jubilatoria y previsional, ni encuadra en ninguna de las causas mencionadas en el art. 2 de la ley 24.655” (Boletín de Jurisprudencia nº 4, año 1997, pág. 4). (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 52243

30.08.01

“OBRA SOCIAL PERSONAL DIRECCIÓN INDUSTRIA PRIVADA DEL PETRÓLEO c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros”

(E.-H.-F.)

Aportes y contribuciones. Fondo solidario de redistribución. Competencia.

Salvo el limitado marco de los juicios de apremio regulados por el art. 24 de la ley 23.660, no existe norma expresa que habilite el conocimiento del fuero de la Seguridad Social en las causas que versen sobre el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Antes bien, la C.S.J.N., respecto de los jueces que deben conocer en procesos en que son parte las obras sociales, como así también en los temas referidos al Sistema Nacional del Seguro de Salud, unificó la competencia en la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal (cfr. “Tallarico, M. c/ Clínica Privada Banfield”, Fallos 315:2292). En consecuencia, corresponde declarar la competencia de dicho fuero para entender en una acción en la que se pretende se declare la nulidad de la resolución dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud respecto al cumplimiento de los depósitos del 15% al Fondo Solidario de Redistribución correspondientes a los aportes de los beneficiarios voluntarios. (Disidencia del Dr. Fernández).

C.F.S.S., Sala II

sent. 52243

30.08.01

“OBRA SOCIAL PERSONAL DIRECCIÓN INDUSTRIA PRIVADA DEL

PETRÓLEO c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros”
(E.-H.-F.)

Beneficiarios. Derecho de opción. Medidas cautelares. Tratamiento abstracto. Dec. 377/01.

Corresponde confirmar lo resuelto por el “a quo” que, teniendo en cuenta la dispuesto por el Dec. 377/01, declaró abstracto el dictado de la medida cautelar tendiente a obtener que se suspendiera la aplicación de los Decretos 446/00, 1104/00 y 1105/00. Ello así, por cuanto aquella norma -que suspendió la aplicación de los decretos aludidos hasta tanto recaiga sentencia definitiva con relación a las medidas cautelares dictadas en los procesos actualmente en trámite- comprende a la totalidad de las obras sociales sin distingo alguno, hayan o no obtenido el dictado de una medida cautelar.

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72602

10.08.01

“OBRA SOCIAL DE ÁRBITROS DEPORTIVOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
c/ Estado Nacional”

(F.-L.-M.A.)

Encuadramiento de obra social. Incompetencia del fuero de la Seguridad Social.

La ley 24.655 -de creación de la Justicia de Primera Instancia de la Seguridad Social- establece en su art. 2, inc. f), la competencia de los tribunales de ese fuero en las causas asignadas a la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo por el art. 24 de la ley 23.660, relacionadas con el cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargo de intereses y actualizaciones adeudadas a las obras sociales; no existiendo norma alguna que asigne al Fuero de la Seguridad Social, competencia específica en los litigios que pudieran estar involucrados al Sistema Nacional del Seguro de Salud. En consecuencia, debe concluirse que la demanda instaurada con el objeto que se decreta la nulidad de una resolución que dispuso un encuadramiento de obra social, excede la competencia de la justicia federal de la seguridad social e incumbe a aspectos relacionados directamente con el derecho laboral, por lo que corresponde la remisión de las actuaciones a dicho Fuero en virtud de lo dispuesto por los arts. 20 y 21 de la ley 18.345.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 51987

14.06.01

“INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL c/ Hospital de Pediatría SAMIC
Prof. Dr. Juan P. Garrahan”

(E.-H.-F.)

Certificado de deuda. Libramiento. Oposición. Acción de amparo. Improcedencia.

No resulta correcto el proceder de la entidad bancaria que mediante acción de amparo pretende, in limine litis, impedir que la obra social demandada realice actos encaminados a librar el certificado de deuda. Ello así porque, teniendo en cuenta que en la hipótesis de existir una determinación de deuda por parte de la obra social, el banco actor tiene el derecho impugnatorio en sede administrativa, y recién entonces en caso de no lograr su cometido, se le abre la vía recursiva ante los estrados judiciales por aplicación de la ley 18.820 según requisitos procedimentales que esa misma ley determina, donde tiene cabida también el derecho a la oposición de las defensas y planteos de excepciones que prevé el art. 544 del C.P.C.C. para los juicios de apremio (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 02.09.97, “Banco Regional de Cuyo S.A. c/ I.S.S.B.”; sent. del 15.04.97, “Santa Lucía Cristal c/ Sind. de Emp. de la Ind. del Vidrio y Af. R.A.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77587

23.05.01

“BANQUE NATIONALE DE PARÍS - SUCURSAL BUENOS AIRES c/ Obra Social
Bancaria Argentina”

(L.-F.-M.A.)

Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo.

El certificado de deuda –que resulta el basamento documental de la causa- no resulta título ejecutivo hábil para abrir la vía ejecutiva tendiente al cobro de las acreencias insertas en dicho instrumento, si de las constancias obrantes en autos se desprende que el mismo adolece de la falta del requisito de exigibilidad, atento que al momento de expedirse, la demandada no se encontraba debidamente in-

timada y, como es doctrinariamente sabido, la exigibilidad es uno de los presupuestos para que el título sea hábil y traiga aparejada ejecución. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72630

10.08.01

“O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios de la Calle Austria 2479”

(M.A.-F.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo.

En una ejecución fiscal, la excepción de inhabilidad de título será articulable cuando no se hubiere cumplido con los trámites administrativos exigidos para el libramiento de una boleta de deuda o de un título ejecutivo (Fallos 288:416). De esa forma se persigue evitar que sobre la base de esos documentos expedidos en forma unilateral y bajo el amparo de reglas procesales estrictas, se deje indefenso al administrado. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72630

10.08.01

“O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios de la Calle Austria 2479”

(M.A.-F.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo.

La obra social debió cumplir con el procedimiento bilateral previsto por la ley 18.820 previo a la emisión del título que habilitara la vía del apremio consagrada en el art. 24 de la ley 23.660, posibilitando de tal modo al presunto deudor el discutir la deuda verificada, ofreciendo y produciendo las pruebas que hicieran a su derecho, y emitiendo luego una decisión fundada, revisable administrativamente y que resulte pasible -depósito previo mediante- de recurso judicial. La inobservancia de dicho procedimiento quita al certificado de deuda expedido, el carácter de título ejecutivo hábil (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 24.04.98, "O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios Acuña de Figueroa 1616"). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72630

10.08.01

“O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios de la Calle Austria 2479”

(M.A.-F.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Certificado de deuda. Título ejecutivo.

Para que el instrumento con el que se deduce una ejecución fiscal revista el carácter de título ejecutivo debe, necesariamente, encontrarse precedido por el procedimiento administrativo que contempla la ley de la materia, y que pesa sobre quien inicia la ejecución la carga de acreditar el cumplimiento de dicho recaudo. Este procedimiento no es una exigencia formalista, sino que, por el contrario, con él quedan salvaguardadas las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso (art. 18 C.N.) y el derecho de propiedad (art. 17 C.N.), pues resulta la única vía idónea, al decir de la C.S.J.N. en la causa “Techint” –28.11.95-, para que las determinaciones de deuda que realicen las obras sociales en virtud del art. 21 de la ley 23.660 y el art. 86 del Dec. 2284/91, puedan impugnarse judicialmente ante la C.F.S.S. por imperio del referido art. 16 de la ley 24.463. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72630

10.08.01

“O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios de la Calle Austria 2479”

(M.A.-F.-L.)

Cobro de aportes y contribuciones. Ley 23.660, art. 24. Novación.

Siendo que la novación conlleva la extinción de la primera obligación por otra que la sustituye y resulta exigible (arts. 801 y 803 Código Civil), es requisito insalvable que el acto cancelatorio se encuentre probado con documentos, los que deben acompañarse en oportunidad de producirse la defensa, resultando improcedente la apertura de la causa a prueba para acreditar los pagos que se invocan, atento la limitación probatoria establecida en esta materia y la necesidad de evitar dilaciones que desnaturalicen el trámite del juicio (Fallos 294:314).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51696

30.04.01

“OBRA SOCIAL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO c/ CATA S.A.C.I.F.I.”
(M.-Ch.-D.)

Cobro de aportes y contribuciones. Ley 23.660, art. 24. Novación.

Oponer la defensa de novación y pretender fundarla en un plan de facilidades de pago de varios impuestos -en el que se incluye aportes y contribuciones- que la ejecutada habría presentado ante la A.F.I.P. con posterioridad a la iniciación de la ejecución, resultan inoponibles al progreso de la acción por la cual la obra social persigue el cobro de aportes y contribuciones en los términos del art. 24 de la ley 23.660. Ello así, por cuanto la propuesta que hubiere formulado el contribuyente no es materia que deba debatirse en este proceso, en el que sólo cabe la acreditación instrumental del convenio y su vigencia al tiempo de su oposición, para juzgar sobre la procedencia de la excepción.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51696

30.04.01

“OBRA SOCIAL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO c/ CATA S.A.C.I.F.I.”
(M.-Ch.-D.)

Cobro de aportes y contribuciones. Impugnación. Res. Gral. A.F.I.P. 247/98. Acción de amparo. Improcedencia.

Si de las constancias de autos se desprende que la impugnación efectuada por la accionante respecto de la deuda que le determinara la obra social fue resuelta por ésta, ratificando la liquidación que oportunamente efectuara, dicha circunstancia resulta determinante para revocar la decisión del “a quo” que hizo lugar al amparo iniciado con el objeto de que la demandada se abstuviera de continuar con los trámites de la causa. Ello así, puesto que la A.F.I.P. ha dictado la Res. Gral. 247/98, por la cual se creó un mecanismo de impugnación de las deudas determinadas por las obras sociales cuyo conocimiento compete a la autoridad máxima de dicho organismo, y que, eventualmente, para el caso de disconformidad con esta decisión, también existe un recurso judicial ante la C.F.S.S. para la revisión del pronunciamiento que pueda dictarse. Al respecto, la C.S.J.N. se ha inclinado por sostener que la acción de amparo no es la vía pertinente para urgir trámites administrativos, ya que la dependencia jerárquica y jurisdiccional otorga medios adecuados al efecto (cfr. doctrina de Fallos 262:181y 269:87). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 77588

23.05.01

“PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. c/ O.S.P.R.E.R.A.”
(L.-F.-M.A.)

Sentencia de remate. Apelación. Improcedencia. Art. 554 C.P.C.C.

No encontrándose configurado ninguno de los supuestos contemplados en el art. 554 del C.P.C.C. para que la sentencia de remate sea apelable, resulta ajustada a derecho la denegatoria del recurso interpuesto.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52172

13.08.01

“OBRA SOCIAL DE MODELOS ARGENTINOS c/ Vidal Rivas, Héctor”
(E.-F.-H.)

RECURSOS

AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actitud reticente del organismo.

La mera referencia efectuada por la A.N.Se.S. de que el expediente administrativo perteneciente al titular se encontraría en los Juzgados del Trabajo, sin especificar en cual de ellos ni el motivo por el cual está allí, no cumple con el objetivo del recurso del amparo por mora, y evidencia una conducta pertinaz y reticente del organismo para cumplir con sus funciones (en el caso, el actor inició el trámite de solicitud de reajuste de sus prestaciones jubilatorias en julio de 1994, poste-

riormente solicitó “pronto despacho” y, al no obtener respuesta, inició demanda en abril de 1998).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52128

20.07.01

“PIÑA, HÉCTOR AMADEO c/ A.N.Se.S.”

(E.-F.-H.)

APELACIÓN

Desistimiento. Procedencia.

Corresponde tener por desistido de la apelación a quien ejercitó dicho desistimiento con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal. No empece a ello el hecho de que el recurso interpuesto y concedido libremente, no hubiese sido sostenido con la presentación del memorial respectivo en tiempo y forma luego de haber sido notificada la recurrente de la puesta de los autos en la oficina, si el desistimiento fue presentado antes que el Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción de alzada, se hubiere pronunciado sobre la admisibilidad formal del remedio intentado.

C.F.S.S., Sala III

sent. 78118

19.06.01

“MÓNACO, OSCAR LUIS c/ A.N.Se.S.”

(F.-L.-M.A.)

Expresión de agravios. Deficiencia. Art. 65 C.P.C.C.

El juzgador no puede suponer o interpretar la finalidad del argumento recursivo, ya que la regla de congruencia lo obliga a ajustarse a los agravios vertidos en el memorial, estándole vedado suplir las deficiencias técnicas que éste contiene a la luz del art. 65 del C.P.C.C.

C.F.S.S., Sala II

sent. 83934

24.08.01

“HEREÑU, LUIS LORENZO c/ A.N.Se.S.”

(E.-F.-H.)

Inapelabilidad por el monto. Art. 242 C.P.C.C.

Las directivas del art. 242 del C.P.C.C. disponen que serán inapelables todas las sentencias definitivas y demás resoluciones -cualquiera fuere su naturaleza- en las que el valor cuestionado no exceda la suma de \$ 4.369,67 (Fallos 323:311). En consecuencia, siendo el monto del litigio ante la Alzada menor al previsto en la norma, corresponde declarar mal concedido el recurso.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52177

23.08.01

“REYNOSO, ISMAEL ALBERTO c/ A.N.Se.S.”

(F.-E.-H.)

Procedencia. Efecto. Facultad del Tribunal.

La jurisprudencia ha sostenido que “es de competencia del tribunal de apelación, como juez del recurso, definir su procedencia o improcedencia, sin que para ello esté vinculado por la concesión que hubiera realizado el juez, el consentimiento de las partes o la errónea tramitación que se le hubiera dado a las apelaciones en la alzada” (cfr. C.N.A.Civ.Com.Fed., Sala II, sent. del 12.04.95, “Levi, Diego y otros c/ Aerolíneas Argentinas”). En consecuencia, corresponde hacer aplicación de lo normado en el art. 276 del C.P.C.C. en cuanto prevé que “si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo serlo en relación, el Tribunal de oficio ... así lo declarará”; y remitir la causa a la anterior instancia, en la que las partes deberán dar cumplimiento con lo estipulado en el art. 249, 2do., párrafo, del ordenamiento citado. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78942

16.07.01

“POVIÑA DE ASTRADA, ANA MARÍA RAMONA c/ A.N.Se.S.”

(F.-L.-M.A.)

INAPLICABILIDAD DE LEY

Contradicción. Plexo normativo. Impugnación de deuda. Directores de sociedades.

La contradicción que hace viable el recurso de inaplicabilidad de ley debe versar sobre juicios de derecho, interpretación de la norma aplicable, su contenido y/o alcance, etc.; más la analogía en los casos en pugna debe resultar de la aplicación del mismo e idéntico plexo normativo, pues es específicamente la legalidad de los pronunciamientos el objeto de análisis sobre el que versará el juzgamiento a efectuar por la totalidad de los integrantes de la Cámara. En ese sentido se pronunció en pleno la C.N.A.Civ. (cfr. "R. C. y otra" del 27.09.73) al determinar que de los precedentes invocados deben descontarse, entre otros, los dictados en función de un régimen legal diferente. En consecuencia, debe concluirse que el fallo "Sánchez, Hugo Osvaldo c/ D.G.I." (C.F.S.S., Sala III, sent. del 23.09.96), cuyo decisorio se fundó en las disposiciones de la ley 18.038 y elaboró una exégesis del art. 11, no resulta incompatible con la solución dada por la Sala I del mismo Tribunal en la sentencia recurrida, dado que en ella se interpretó el contenido y alcance de las disposiciones de la ley 24.241, recurriendo para ello a la armonización de la totalidad de sus disposiciones, así como su concordancia con el Dec. 2104/93.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52003

27.06.01

"BAGO, JUAN CARLOS c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(F.-H.-E.)

Finalidad.

El recurso de inaplicabilidad de ley tiende a solucionar eventuales contradicciones entre sentencias de una misma Cámara, y no la apertura de una tercera instancia donde el recurrente pueda impugnar los argumentos del fallo de alzada a modo de una nueva expresión de agravios, o examinar la apreciación de cuestiones de hecho y valoración de pruebas de la segunda instancia (cfr. C.N.A.T. en pleno, 14.10.66, "Befacz, Francisco c/ Gómez, Luis y otros).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51928

11.06.01

"MORA, FLORENTINO c/ A.N.Se.S."

(D.-M.-Ch.)

Invocación del precedente.

La carga de invocar el precedente con anterioridad al pronunciamiento que se cuestiona (art. 288 C.P.C.C.), es un recaudo esencial para la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley, porque tiene por objeto que la Sala a la que le toca fallar tenga la oportunidad de cotejar su interpretación jurídica del caso con la doctrina establecida en el precedente, alertando de ese modo acerca de la posible contradicción jurisprudencial a producirse en la hipótesis de apartarse de los términos de dicha doctrina (cfr. Palacio - Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº VI, pág. 500).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72424

18.07.01

"LENCIONI, IVO JULIO c/ A.F.I.P. - D.G.I."

(F.-M.A.-L.)

QUEJA

Apelación denegada. Requisitos. Art. 283 C.P.C.C.

El cumplimiento de los requisitos enunciados en el art. 283 del C.P.C.C. tiene por finalidad acercar al tribunal elementos suficientes que permitan decidir, sin substanciación alguna, si corresponde dar trámite a la queja. Por ello, no verificándose en autos dichos recaudos -en el caso, falta de agregación de las copias pertinentes y, entre ellas, la del escrito que provocó la apelación-, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78253

21.06.01

“FRASCAROLI, MANUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S.”

(M.A.-F.-L.)

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN

Declinación de la jurisdicción. Arts. 14 y 16 del C.P.C.C. Art. 30 C.P.C.C. Oportunidad.

Si bien de la literalidad de los arts. 14 y 16 del C.P.C.C. no aparece el curso a seguir ante la incidencia, la medida impone, previo a declinar la jurisdicción, analizar la oportunidad de ella. Así, dicho estado procesal aconseja verificar si la recusación se deduce en tiempo útil. El juez recusado debe examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de la recusación -ej. la oportunidad de su interposición, pudiendo desestimarla ante la falta de esos extremos- (cfr. C.N.Civ. y Com. Fed., Sala II, sent. del 14.08.79, L.L. 1979-D-332; C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 13.05.80, E.D. 90-211; íd. Sala F, sent. del 20.10.78, Rep. E.D. 13-799, nº 8; ídem sent. del 13.04.77, Rep. E.D. 11-860, nº 2; C.N.A.Com., Sala C, sent. del 14.11.75, Rep. E.D. 10-973).

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52051

03.07.01

“FISCO NACIONAL c/ Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A.”

(F.-E.-H.)

Declinación de la jurisdicción. Arts. 14 y 16 del C.P.C.C. Art. 30 C.P.C.C. Oportunidad.

El apresuramiento en que incurre el magistrado recusado en desprenderse de la causa, no habilita ni justifica la posterior actitud dilatoria del juez interviniente, en la medida que la resolución que hace lugar a la recusación no queda firme mientras ésta no haya sido aceptada por el juez a quien se han remitido las actuaciones, ya que este último también puede verificar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad (cfr. C.N. de Paz en pleno, L.L., T. 116, pág. 728) y se halla facultado para rechazarla.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52051

03.07.01

“FISCO NACIONAL c/ Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A.”

(F.-E.-H.)

Finalidad. Causales. Interpretación restrictiva.

El instituto de la recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial, de donde se desprende que está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Para su configuración debe atenderse tanto al interés particular como al interés general, que puede verse afectado por el uso inadecuado de este medio de desplazamiento de la competencia de los jueces que deben atender en el proceso (cfr. C.N.A.Civ., Sala A, R.C.C. 23690, 06.11.87 y sus citas).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51763

11.05.01

“CONSORCIO DE PROPIETARIOS POSADAS 1391 c/ O.S.P.E.R. y H.R.A.”

(Ch.-M.-D.)

Finalidad. Causales. Interpretación restrictiva.

El inc. 10 del art. 17 del C.P.C.C. queda limitado a las partes y debe manifestarse por actos directos y externos que le hayan dado estado público y, por lo tanto, no rige respecto de los letrados o apoderados (cfr. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tº 1, pág. 112). Es decir que, para su procedencia, es preciso la existencia de un estado de apasionamiento del juez adverso hacia la parte y que se manifieste a través de actos directos y externos. El carácter de parte, es claro que le asiste tanto a quien inicia la acción como a quien es demandado, no así a sus letrados, “... se ha restringido la recusación al pleito entre el juez y la parte -no con su abogado-” (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del

08.06.00, "Villareal, Luciano Amalio").

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51763

11.05.01

"CONSORCIO DE PROPIETARIOS POSADAS 1391 c/ O.S.P.E.R. y H.R.A."

(Ch.-M.-D.)

Finalidad. Causales. Interpretación restrictiva.

La aplicación de sanciones al litigante por parte del magistrado, los calificativos a los que este acuda para juzgar su conducta o las decisiones que adopte en las causas, aún cuando el recusante califique de arbitrario su proceder, no configuran la causal, ya que la arbitrariedad no es causa de recusación ni exterioriza de por sí enemistad, odio o resentimiento, y su reparación debe buscarse a través de recursos procesales que autoriza la ley (cfr. C.N.A.Civ., Sala A, sent. del 15.08.89, L.L. 1990-A-154).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51763

11.05.01

"CONSORCIO DE PROPIETARIOS POSADAS 1391 c/ O.S.P.E.R. y H.R.A."

(Ch.-M.-D.)

Finalidad. Causales. Interpretación restrictiva.

La circunstancia de haber aplicado en otro juicio una sanción al letrado no puede servir de base a la recusación por enemistad (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 11.04.00, "Sorrentino, Luis").

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51763

11.05.01

"CONSORCIO DE PROPIETARIOS POSADAS 1391 c/ O.S.P.E.R. y H.R.A."

(Ch.-M.-D.)

Formulación. Funcionarios del Ministerio Público. Facultad del magistrado interviniente.

Si bien resulta improcedente la recusación formulada por la parte actora por enemistad manifiesta del Juez con su letrada, dado que tal causal sólo se torna operativa si el odio y/o la animadversión es contra las partes y no contra los profesionales (cfr. Fassi y Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado", T. I, pág. 237), ante la solicitud del propio Juez de que se lo excuse de seguir entendiendo en la causa, explicitando los motivos de su enfrentamiento con la profesional que patrocina a la parte actora -en el caso, haber sido denunciado por ésta ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados), razones de pulcritud procesal y decoro judicial justifican receptar el pedido para evitar situaciones de violencia entre el citado magistrado y la letrada actuante.

C.F.S.S., Sala II

sent. int. 52068

12.07.01

"GHIONI, NILDA LUISA c/ A.N.Se.S."

(E.-F.-H.)

Recusación con causa. Requisitos. Arts. 20 y 177 C.P.C.C.

Conforme lo establecido por los arts. 20 y 177 del C.P.C.C., el incidente de recusación debe tener los elementos suficientes para bastarse a sí mismo. Por ello, no habiéndose agregado la copia de la resolución que lo motivó, dicha ausencia impide constatar la configuración de la causa invocada por el recusante y, en consecuencia, deberá ser desestimada.

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 52088

29.06.01

"OBRA SOCIAL ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro"

(D.-M.-Ch.)

Recusación sin causa. Tribunal colegiado. Art. 14 C.P.C.C. Improcedencia.

Del texto del art. 14 del C.P.C.C. surge claramente que "... también podrá ser recusado sin expresión de causa un juez de las Cámaras de Apelaciones ...". En consecuencia, a pesar de encontrarse acreditados los presupuestos de admisibilidad que condicionan la petición -es decir, el carácter de parte, la justificación de

la personería y la oportunidad-, no corresponde hacer lugar a la recusación sin causa cuando la misma se solicita sobre la totalidad de los Magistrados integrantes de una Sala. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78251

21.06.01

“BORRONI, IRMA c/ A.N.Se.S.”

(M.A.-L.-F.)

Recusación sin causa. Tribunal colegiado. Art. 14 C.P.C.C. Improcedencia.

Por tratarse de un tribunal colegiado, la recusación sin causa sólo se puede deducir respecto de uno de los jueces integrantes de dicho cuerpo, por lo que no resulta posible admitir la que se formula contra los integrantes de una sala o tribunal (cfr. C.F.A.Cont.Adm.Fed., causa 3763/92, “Poliszuck, J.J. c/ Inst. de Serv. Soc. Pers. de Seg., Reas. Cap. y A. y P. para Viv.”). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).

C.F.S.S., Sala III

sent. 78251

21.06.01

“BORRONI, IRMA c/ A.N.Se.S.”

(M.A.-L.-F.)

Resolución de una medida cautelar. Prejuzgamiento. Art. 17, inc. 7) C.P.C.C. Improcedencia.

Corresponde rechazar “in límine” la recusación planteada con fundamento en que los señores magistrados habían incurrido en la causal prevista en el inc. 7) del art. 17 del C.P.C.C. al haberse pronunciado en favor de la legitimación de los actores al resolver la medida cautelar oportunamente apelada. Ello así, porque el pronunciamiento en favor de la legitimación de los accionantes fue adoptado en el marco del “análisis de la verosimilitud del derecho (fomus boni iuris)”, dado que ambos aspectos “convergen sobre los mismos actores y ambos constituyen presupuestos necesarios para obtener una sentencia” en torno a la cautelar debatida; porque, naturalmente, al haber cuestionado la accionada la legitimación para obrar de los demandantes al recurrir de la medida, ese punto debió ser necesariamente abordado por los jueces al resolver su recurso, como requisito intrínseco de admisibilidad de aquélla, estrechamente relacionado a la verosimilitud del derecho (cfr. Palacio - Alvarado Velloso, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tº V, pág. 34). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72444

20.07.01

“CARRIÓ, ELISA Y OTROS c/ Poder Ejecutivo Nacional”

(F.-L.-M.A.)

Resolución de una medida cautelar. Prejuzgamiento. Art. 17, inc. 7) C.P.C.C. Improcedencia.

La decisión adoptada por el Tribunal en torno a la legitimidad para obrar participa de la misma naturaleza que tradicionalmente se ha reconocido al pronunciamiento relativo a la verosimilitud del derecho como recaudo necesario para la procedencia de la medida cautelar, que no requiere un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso (cfr. Palacio - Alvarado Velloso, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tº V, pág. 35). De ello se infiere claramente que los magistrados, al decidir en favor de la legitimación de los actores al resolver la medida cautelar oportunamente apelada, no incurrieron en prejuzgamiento expreso sobre la cuestión de fondo a decidir, capaz de provocar su apartamiento como jueces naturales de la causa. Ello así porque, con arreglo a conocida doctrina del Alto Tribunal, no se configura la causal contemplada en el inc. 7 del art. 17 del C.P.C.C. cuando el tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida, lo que ocurre, entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de una medida cautelar (Fallos 311:578). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72444

20.07.01

“CARRIÓ, ELISA Y OTROS c/ Poder Ejecutivo Nacional”

(F.-L.-M.A.)

Resolución de una medida cautelar. Prejuzgamiento. Art. 17, inc. 7) C.P.C.C. Im-procedencia.

Son manifiestamente improcedentes las recusaciones que se fundan en la intervención de los jueces del tribunal en un anterior pronunciamiento propio de sus funciones legales, ya que su actuación importa juzgamiento y no prejuzgamiento en los términos de la norma respectiva, máxime cuando se trata de la resolución relativa a una medida precautoria dictada sobre la base de la verosimilitud de las circunstancias en que se funda la demanda, que, por demás, es susceptible de ser dejada sin efecto (Fallos 311:578, Disidencia del Dr. Petracchi). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72444

20.07.01

“CARRIÓ, ELISA Y OTROS c/ Poder Ejecutivo Nacional”

(F.-L.-M.A.)

Informe. Art. 22 C.P.C.C.

Si los magistrados recusados no efectuaron el informe a que se refiere el art. 22 del C.P.C.C., resulta prematuro adentrarse al análisis de fondo de la cuestión suscitada. En consecuencia, corresponde devolver el expediente a la Sala, a fin de que sus integrantes produzcan el informe de referencia. (Disidencia del Dr. Laclau).

C.F.S.S., Sala III

sent. int. 72444

20.07.01

“CARRIÓ, ELISA Y OTROS c/ Poder Ejecutivo Nacional”

(F.-L.-M.A.)

SENTENCIA

Nulidad. Principio de congruencia.

El principio de congruencia es la “exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis, incidental o sustantiva, y lo resuelto por la decisión jurisprudencial que lo dirime” (cfr. Maurino, “Nulidades procesales”, pág. 199, citando la obra de Peyrano, “El proceso”). Por ello, corresponde declarar la nulidad de la sentencia -y de todo lo actuado en su consecuencia- si la misma soslayó el referido deber de congruencia del que deben gozar las decisiones judiciales (en el caso, se petitionó el reajuste del haber por la ley 24.241 y el “a quo” resolvió la cuestión según lo reglado por la ley 18.037).

C.F.S.S., Sala I

sent. int. 51975

11.06.01

“SAN MARTÍN, AMANDA EDITH c/ A.N.Se.S.”

(Ch.-M.-D.)